

Concepción, diecinueve de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Intervinientes.

Que con fechas veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y treinta y uno de mayo, uno, dos tres, cuatro, siete, ocho, nueve y diez de junio del año en curso, ante esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, integrada por las juezas doña Ana María Hernández Hulín, doña Nancy Loreto Vargas Bustamante y doña Karina Gema Mihovilovic Gutiérrez, se realizó audiencia de juicio oral en causa RUC N°**1510036490-2**, RIT 125-2020, seguida contra de:

1.- **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, cédula de identidad n° 15.671.890-4, casado, 38 años, nacido el 23 de enero de 1983, ingeniero comercial, domiciliado en Camino a Curaquilla sin número, Arauco.

2.- **Mario Esteban Arzola Henríquez**, cédula de identidad n°15.616.279-5, soltero, 37 años, nacido el 30 de enero de 1984, técnico industrial, estudios superiores, incompletos, con domicilio en calle Enrique Molina n° 240, Chiguayante.

3.- **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**, cédula de identidad n°10.394.967-k, soltera, nacida el 16 de diciembre de 1963, 57 años, dueña de casa, octavo básico, lee y escribe, con domicilio en población Bernardo O'Higgins, calle Enrique Molina 240, Chiguayante.

4.- **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, cédula de identidad n°11.573.761-9, casada, 50 años, nacida el 21 de diciembre 1970, dueña de casa, segundo medio, domiciliada en La Marina 530. Chiguayante.

Por el Ministerio Público, compareció el fiscal don **José Patricio Aravena López**; en representación del Consejo de Defensa del Estado, y como querellante concurrió doña **Gisela Isabel Inostroza Ulloa**, en tanto que el Banco Estado de Chile, querellante y acusador particular, estuvo representado por don **Rodolfo Cerliani Vásquez**. Por su parte, la defensa del Sr. Pablo Muñoz Giacaman estuvo a cargo del abogado Sr. **César Ramírez Burgos**, y el abogado **Sr. Patricio Díaz Suárez** estuvo a cargo de la defensa de los acusados Mario Arzola Henríquez, Hilda Henríquez Cuevas y Ana Henríquez Cuevas. Todos los anteriores, con domicilios y correos electrónicos registrados ante este Tribunal.

SEGUNDO: Que el presente juicio compete a cinco hechos, como se expondrá a continuación.

I.- Hechos.

“Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, quien se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O'Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de

créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O'Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían,”

Primero: El cliente José Iván Sepúlveda Tapia originalmente solicitó en diciembre de 2014, a través de Pablo Muñoz Giacaman, un crédito como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía - por la suma de 1.000.000 de pesos, siendo informado por Muñoz Giacaman que dicho crédito había sido rechazado, sin percibir Sepúlveda Tapia directamente monto alguno. No obstante lo anterior, basado en las gestiones de solicitud efectuadas por el cliente Sepúlveda Tapia, fue otorgado en su favor el 15 de diciembre de 2014 un crédito por la suma de \$ 35.672.852 (825,79 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$3.000.000 (69,44 UTM), siendo el imputado PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo, uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Sepúlveda Tapia dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

A) Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LR-8989-7, de 14 y 10 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: José Iván Sepúlveda Tapia. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.

b) Cartola de cuenta corriente N° 0-000-6197476-8 a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia, con movimientos entre 29 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014. La cartola no correspondía a Sepúlveda Tapia y los movimientos reflejados no eran verdaderos

c) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de José Iván Sepúlveda Tapia. El año 2014, Sepúlveda Tapia no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

d) Certificado N°003/2014 de la empresa “Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.”, suscrito por Nelson Hermosilla Toloza en favor de José Sepúlveda Tapia. Tal documento no había sido emitido por la empresa en favor de José Sepúlveda Tapia, sino de un tercero (David Arratia Soto), habiendo sido adulterado.

Del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente y abonado por el Banco a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado por la suma de \$33.970.000, fue girado a través de dos cheques de dicha cuenta corriente, N°2842736 y 2842738, con firma falsificada de José

Sepúlveda Tapia, uno pagadero a José Sepúlveda T por suma de \$17.000.000 y otro pagadero a Alejandro Flores Loyola por la suma de \$16.970.000; este último, fue presentado a cobro por Flores Loyola a requerimiento de PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, quien recibió finalmente el dinero.

Segundo: El cliente Héctor Fernando Jara Cabezas, originalmente solicitó en febrero de 2015, a través de Pablo Muñoz Giacaman, como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por la suma de \$20.000.000.

El crédito fue otorgado al cliente Héctor Fernando Jara Cabezas el 18 de febrero de 2015 por la suma de \$ 35.075.540 (815,23 UTM) más una línea de crédito por la suma de \$4.000.000 (92,96 UTM), siendo el imputado PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Jara Cabezas, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

a) Declaraciones anuales de Renta años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y pago Simultaneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de Héctor Fernando Jara Cabezas. Entre los años 2012 y 2014, Jara Cabezas, no presento Declaración Anual de Renta, ni declaraciones mensuales y pago Simultáneo de Impuestos, siendo los documentos presentados forjados en su formato y contenido.

b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DCHC.55-0 y DBKB.29-6, de 28 de enero de 2015, con indicación de PROPIETARIO:

Héctor Fernando Jara Cabezas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DCHC.55 y DBKB.29 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.

c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 000061974523, a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a Jara Cabezas y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.330.000 fue abonada en Febrero de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842740 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia pagadero a RENE MUÑOZ MERA -padre de Pablo Muñoz Giacaman - y entregado por PABLO MUÑOZ para ser presentado a cobro el 20 de Febrero de 2015, por MARIO ARZOLA HENRÍQUEZ, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude.

Tercero: La cliente Paula Brant Parada originalmente solicitó en marzo de 2015, a través de Pablo Muñoz Giacaman, como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por un monto ascendente a la suma de \$23.000.000. El crédito fue otorgado a la cliente Paula Camila Brant Parada, el 01 de abril de 2015, por la suma de \$37.135.462 (858,82 UTM), siendo el imputado PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado,

haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Brant Parada, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Paula Camila Brant Parada, Brant Parada presentó Declaración Anual de Renta del año 2014; sin embargo, el contenido de la misma en los datos personales, en la Actividad, profesión o giro del negocio y en las partidas, no correspondían a las declaradas, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

b) Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LT-9049- 5, de 14 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: Paula Camila Brant Parada. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Paula Camila Brant Parada en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 0000-61-98-412-7 a nombre de Paula Camila Brant Parada, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a Brant Parada y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.360.000 fue abonada el 10 de abril de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842741 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia, pagadero a RENE MUÑOZ MERA - padre de Pablo Muñoz Giacaman- y entregado por PABLO MUÑOZ para ser presentado a cobro el 10 de abril de 2015, por MARIO ARZOLA HENRÍQUEZ, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude.

Cuarto: En los dos créditos otorgados a Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, solicitados en Abril de 2015, y otorgados el 29 de abril de 2015 por \$88.290.129 (2041,86 UTM) y \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS y MARIO ARZOLA HENRÍQUEZ - hijo de Hilda y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por Muñoz Giacaman en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:

a) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DBPP.34-6, YB.4544- 1 y XV.5873-3, respectivamente de 26 de marzo, 13 de abril y 19 de marzo del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Hilda Magdalena Henríquez Cuevas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DBPP.34, YB.4544 y XV.5873 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Hilda Magdalena Henríquez Cuevas en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

b) Copia de contrato entre Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato

anterior con Henríquez Cuevas, nunca fue suscrito con la empresa referida, siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

c) 06 copias de facturas de ventas y servicios (N°18, 19, 20, 23, 24 y 25) de “Hilda Magdalena Henríquez Cuevas” “Servicio de Transporte de Personal, Servicios Especiales pagadas por AES GENER. Los documentos no eran auténticos pues no correspondían al giro de la imputada, no correspondían a documentación tributaria original de la contribuyente y daban cuenta de un servicio inexistente.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por Hilda Magdalena Henríquez Cuevas de los buses placa patente única HDLW.80-1 y HDLW.79-8 y otra parte de la suma, recepcionada por Hilda Henríquez Cuevas en su cuenta 533-0-017976-9 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN y su cónyuge FRANCISCA ANDREA VASQUE AGUIRRE, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue Mario Arzola Henríquez quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a Hilda Henríquez Cuevas el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por Muñoz Giacaman, llevó a esta la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de esta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma.

Quinto: En los dos créditos asociados a la clienta Ana Gladys Henríquez Cuevas, solicitados en abril de 2015 y otorgados el 22 de abril de 2015 por \$88.221.883 (2040,28 UTM) y el 27 de abril del 2015 por \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN y ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS y MARIO ARZOLA HENRÍQUEZ – sobrino de Ana y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Ana Gladys Henríquez Cuevas, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por Muñoz Giacaman en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:

a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas. El año 2014, Ana Gladys Henríquez Cuevas no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42- K, respectivamente de 26 de marzo y 22 de abril del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Ana Gladys Henríquez Cuevas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DPPP.36 y CJLJ.42 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Ana Henríquez Cuevas en

el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Copia de contrato entre Ana Gladys Henríquez Cuevas y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con Henríquez Cuevas, nunca fue suscrito con la empresa referida siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por Ana Gladys Henríquez Cuevas de los buses placa patente única HFSS.42-1 y HFSS.43-K y otra parte de la suma, recepcionada por Ana Gladys Henríquez Cuevas en su cuenta 533-0-017988-2 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN y su cónyuge FRANCISCA ANDREA VASQUE AGUIRRE, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue Mario Arzola Henríquez quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a Ana Henríquez Cuevas, por intermedio de su madre Hilda Henríquez Cuevas, el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por Muñoz Giacaman, llevó la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de esta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma.

De esta manera, los montos de dinero asociados a los créditos obtenidos fraudulentamente con datos falsos, en los hechos señalados, ascendieron a lo menos a \$458.976.544 en créditos (más \$11.000.000 en líneas de crédito) y los dineros provenientes de los créditos, a lo menos \$75.060.000, fueron obtenidos por o para PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, a través de transferencias recibidas o cheques cobrados.

II.- Calificación jurídica y participación.

Los hechos descritos configuran, a juicio del Ministerio Público:

a) En el caso del imputado **PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN**, cinco (5) delitos de FRAUDE DEL FISCO previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3 del Código Penal, hechos en los que se le atribuye la calidad de autor en grado de consumado, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

b) En el caso del imputado **MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ**, dos (2) delitos de FRAUDE DEL FISCO previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3 del Código Penal, hechos en los que se le atribuye la calidad de autor en grado de consumado, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

c) En el caso de las imputadas **HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS y ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS**, un delito de FRAUDE DEL

FISCO previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3 del Código Penal, hechos en los que se les atribuye la calidad de autoras en grado de consumado, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

III.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal.

La Fiscalía estima que, respecto de cada uno de los acusados concurren las siguientes circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal:

a) En el caso del imputado **PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN**, concurre la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

b) En el caso del imputado **MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ**, concurren las circunstancias modificatorias del artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal.

c) En el caso de la acusada **HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS**, concurre la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

d) En relación a **ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS**, no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

IV.- Pena solicitada:

El ente persecutor solicita se apliquen las siguientes penas:

a. En el caso del imputado **PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN**, la pena de doce (12) años presidio mayor en su grado medio, más multa del cincuenta por ciento (50%) de perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el lapso de diez años, más las accesorias legales y costas de la causa.

b. En el caso del imputado **MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ**, la pena de seis (6) años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa del 50 por ciento de perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el lapso de siete años, más las accesorias legales y costas de la causa.

c. En el caso de la imputada **HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS**, la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, más multa del cincuenta por ciento (50%) del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el lapso de 5 años y un día, más las accesorias legales y costas de la causa.

d. En el caso de la imputada **ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS**, la pena de seis (6) años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa del 50 por ciento de perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el lapso de seis (6) años, más las accesorias legales y costas de la causa.

TERCERO: El Consejo de Defensa del Estado, representado por don Georgy Schubert Studer adhirió a la acusación fiscal en todas sus partes.

CUARTO: El Banco del Estado de Chile, representado por el abogado Rodolfo Cerliani Vásquez formuló acusación particular respecto de los cuatro acusados ya individualizados en los siguientes términos:

I.- Hechos.

Hechos: “Entre diciembre del año 2014 y septiembre del año 2015, PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, que se desempeñaba en esa fecha, como Ejecutivo de negocios Pequeña Empresa, del Banco del Estado de Chile , en la oficina ubicada en calle Avenida O’Higgins 486 , en esta ciudad y comuna de Concepción, en el marco de su funciones de ubicar clientes para el otorgarle créditos, tramitó, evaluó y presentó al Comité de Créditos del Banco, varias solicitudes de créditos para Pequeños Empresarios del rubro Transportistas tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de las actividades, estado de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de Créditos destinados a Transportistas de Pequeñas Empresas, condición que no tenían, logrando que finalmente esos créditos fueran otorgados

En algunos casos, sin el conocimiento real de los clientes, Pablo Muñoz Giacaman, gestionó los créditos con antecedentes falsos y por montos superiores a los solicitados por estos, apropiándose, a lo menos, de las diferencias de dinero directamente o a través de terceros que las cobraron o percibieron, con perjuicio directo para el banco.

En otros casos, Pablo Muñoz Giacaman, concertado con algunos de estos clientes, con la documentación falsa, gestionó y logró la aprobación de los créditos en provecho propio y de los clientes, y también con perjuicio directo para el banco.”

CASOS CONCRETOS DE CREDITOS TRAMITADOS Y OTORGADOS CON DOCUMENTACION FALSIFICADA.

Uno: Don JOSE IVAN SEPULVEDA TAPIA, C.I. 10.068.029-7, originalmente solicitó en diciembre del año 2014 en el Banco del Estado de Chile a través de Pablo Muñoz Giacaman un crédito como persona natural por un monto de \$1.000.000, siendo luego informado por el propio Pablo Muñoz Giacaman, que el crédito por \$ 1.000.000 no había sido aprobado, con lo cual el cliente José Iván Sepúlveda Tapia, nada recibió como crédito de parte del Banco del Estado de Chile.

Pese a lo anterior, sin siquiera haber calificado José Sepúlveda Tapia, para la obtención de un crédito como persona natural por un monto de solo \$1.000.000, con fecha 15 de Diciembre del 2014, Pablo Muñoz Giacaman tramitó, evaluó y presentó a aprobación y logró obtener un crédito de una líneas exclusivo para Pequeños Empresarios para don José Iván Sepúlveda Tapia por un monto de \$ 35.672.852 , más una línea de crédito por \$ 3.000.000; toda la documentación con la cual fue evaluado y aprobado el crédito era falsa, tanto respecto de la actividad del Señor José Iván Sepúlveda Tapia, que nunca fue ni ha sido transportista, como también la documentación de su Estado de situación o patrimonio:

La documentación falsa presentada al banco con la cual se aprobaron los dos créditos al Sr. José Iván Sepúlveda Tapia es la siguiente:

a.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes XS.4977-1 y LR.8989-7, de 10 y 14 de Julio 2014, respectivamente, donde se individualiza como propietario a don José Iván Sepúlveda Tapia. Estos dos vehículos nunca fueron registrados a nombre de don José Iván Sepúlveda Tapia; esos certificados fueron adulterados de otros originales.

b.- Cartola de la cuenta corriente número 0-000-6197476-8 a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia con movimientos entré el 29 octubre y 24 de noviembre del año 2014; la cartola no corresponde a José Iván Sepúlveda Tapia y los movimientos consignados no eran verdaderos.

c.- Declaración Anual de Impuesto a la Renta año Tributario 2014 de don José Iván Sepúlveda Tapia. Esta persona NO presentó al Servicio de Impuestos Internos Declaración Anual de Renta el año 2014, siendo el documento presentado al banco falsificado.

d.- Certificado N° 003/2014 de la empresa "Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.", suscrito por Nelson Hermosilla Toloza a favor de José Sepúlveda Tapia. Este documento no fue emitido a favor de José Sepúlveda Tapia, sino de un tercero (David Arratia Soto), por lo tanto, es un documento adulterado.

Del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente y abonado por el banco a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia número 53300159849 del Banco del Estado de Chile por la suma de \$ 33.970.000 fue girado a través de dos cheques de esa cuenta números 2842736 y 2842738 con las firmas falsificadas de José Sepúlveda Tapia , uno girado a favor de José Sepúlveda Tapia por \$ 17.000.000 y otro por la suma de \$ 16.970.000 girado a favor de Alejandro Flores Loyola, este último fue presentado a cobro por Alejandro Flores Loyola a requerimiento de Pablo Andrés Muñoz Giacaman, quien recibió finalmente el dinero

Dos: Don HECTOR FERNANDO JARA CABEZAS, C.I.8.015.842-4, solicitó en febrero del año 2015, un crédito para Pequeños Empresarios del rubro transporte, a través de Pablo Muñoz Giacaman, por la suma de \$ 20.000.000, pese a que no era transportista ni cumplía ningún requisito para optar a este crédito.

Pese a lo anterior, el crédito fue otorgado al Sr. Héctor Fernando Jara Cabezas, el 18 febrero 2015 y por una suma mayor, \$ 35.075.540, más una línea de crédito por la suma de \$ 4.000.000, siendo Pablo Andrés Muñoz Giacaman quién tramitó, evaluó y presento a aprobación ambos créditos los que fueron aprobados haciendo uso de documentación falsa respecto de la actividad del cliente, estado de situación o patrimonio, estos documentos son los siguientes:

a.- Declaraciones anuales de Rentas de los años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y Pago Simultaneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de Héctor Fernando Jara Cabezas. Esas declaraciones son falsas ya que Héctor Fernando Jara Cabezas NO presentó Declaración Anual de Rentas como tampoco Declaraciones Mensuales y Pago Simultáneos de Impuestos, siendo los documentos falsos en su formato y contenido.

b.- Certificado de Anotaciones Vigentes de los Vehículos patentes DCHC.55-0 y DBKB.29-6 de fecha 28 enero 2015, con indicación que el propietario de ambos

vehículos es Héctor Fernando Jara Cabezas. Revisadas ambas inscripciones, ambas placas patentes NO existen con el número verificador señalado y las placas patentes DCHC.55 y DBKB.29 nunca han estado registradas a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva el Registro Civil, siendo ambos certificados adulterados de originales.

c.- Cartola de la cuenta corriente asociada al número 000061974523 a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas, con movimiento entre el 24 de octubre del 2014 y 11 febrero 2015. La cartola no le correspondía a esta persona y, los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso (recordemos que el cliente solicitó crédito por \$20.000.000) asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$ 13.330.000 fue abonado en febrero 2015 a la cuenta corriente N° 53300159849 del Banco del Estado de Chile de José Sepúlveda Tapia, siendo girado el mismo monto a través del cheque número 2842740 de la cuenta señalada, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia y pagadero a RENE MUÑOZ MERA, padre de Pablo Muñoz Giacaman, y entregado por Pablo Muñoz Giacaman para ser presentado al cobro el 20 febrero 2015 por MARIO ARZOLA HENRÍQUEZ, concretándose a través de esta última persona la obtención de dicho dinero producto del fraude.

Tres: Doña PAULA CAMILA BRANT PARADA, C.I. 15.591.629-K, solicitó en marzo 2015, a través de Pablo Muñoz Giacaman, como persona natural, y no como transportista, condición esta última que no tenía, un crédito por \$ 23.000.000. El crédito fue finalmente otorgado por la suma de \$ 37.135.462, siendo Pablo Muñoz Giacaman quién tramitó, evaluó y presentó a aprobación el crédito haciendo uso de documentación falsa respecto de la actividad, estados de situación o patrimonio de doña Paula Brant Parada, siendo estos documentos los siguientes:

a.- Declaración Anual de Impuestos a la Renta año tributario 2014, sin embargo, el contenido de la misma en los datos personales, en la actividad, profesión o giro del negocio y en las partidas no correspondían a las declaradas, siendo el documento falso en su formato y contenido.

b.- Certificados de Inscripción Anotaciones Vigentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos placas únicas XS.4977-1 y LT.9049-5 del 14 de Julio 2014 con indicción de propietario: Paula Camila Brant Parada. Los dos vehículos no se encontraban ni se encuentran registrados a nombre de esta persona en el Registro de Vehículos Motorizados, siendo ambos certificados adulteraciones de originales.

c.- Cartola de la cuenta corriente asociada al número 0000-61-98-412-7 a nombre de Paula Camila Brant Parada, con movimiento entre 24 octubre 2014 y 11 febrero 2015. Esta cartola no correspondía a doña Paula Brant Parada y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero otorgado en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$ 13.360.000 fue abonado el 10 abril 2015 a la cuenta corriente de José Sepúlveda Tapia número 53300159849 del Banco del Estado de Chile, siendo girado ese mismo monto a través del cheque número 2842741 de esa cuenta con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia pagadero a RENE MUÑOZ

MERA, padre de Pablo Muñoz Giacaman y entregado por este último para ser presentado a cobro el 10 abril 2015 por MARIO ARZOLA HENRÍQUEZ, concretándose a través de esa persona la obtención de dichos dineros producto del fraude.

Cuatro: Doña HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS, C.I. 10.394.967-K, solicitó dos créditos para Transportistas Pequeños Empresarios con documentación falsificada en Abril del 2015 y obtenidos el 29 de Abril del 2015 por \$ 88.290.129 y \$ 88.290.339, respectivamente, más una línea de crédito por \$ 2.000.000.- En la tramitación de estos créditos actuaron en forma concertada Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, Pablo Andrés Muñoz Giacaman y Mario Arzola Henríquez, hijo de Hilda Henríquez Cuevas, en la solicitud de estos créditos, haciendo uso de documentación falsa respecto de la actividad, estado de situación o patrimonio de Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, como empresaria del rubro de transporte, condición que no tenía, para luego ser tramitados y presentados a aprobación por Pablo Muñoz Giacaman; dentro de la documentación falsa presentada al banco para la obtención de los créditos a favor de doña Hilda Magdalena Henríquez Cuevas se encontraban los siguientes:

a.- Tres Certificados de Anotaciones Vigentes de los Vehículos patentes DBPP.34-6, YB.4544-1, y XV.5873-3, respectivamente del 26 marzo, 13 abril y 19 marzo año 2015, con indicación de propietario: Hilda Magdalena Henríquez Cuevas. Las placas patentes referidas no existen con el número verificador en cada caso, y las placas patentes DBPP.34, YB.4544 y XV.5873 NO se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Hilda Magdalena Henríquez Cuevas en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva el Registro Civil, siendo los certificados presentados adulteraciones de originales.

b.- Copia de contrato entre Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y AES GENER S.A. de 15 de febrero del 2015 sobre servicio de arriendo de Buses. Este contrato nunca fue suscrito con la empresa señalada, siendo falso su contenido como también la mención de quien comparece en representación de la empresa.

c.- 6 copias de facturas de ventas y servicios (N° 18,19,20,23,24 y 25) de Hilda Magdalena Henríquez Cuevas – Servicio de Transporte de Personal, Servicio Especiales pagadas por AES GENER. Estos documentos no eran auténticos pues no correspondían al giro de doña Hilda Henríquez Cuevas, no correspondían a documentación tributaria original de la contribuyente y por lo demás daban cuenta de un servicio que no existió.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte fue para la compra de dos buses por parte de doña Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, placas patentes HDLW.80-1 y HDLW.79-8; y otra parte del dinero fue recibido por Hilda Henríquez Cuevas en su cuenta corriente 533-0-017976-9 del Banco del Estado de Chile y luego transferido el día 06 mayo 2015 y 19 junio 2015 en la suma total de \$ 10.700.000 a la cuenta corriente número 61-97476-8 del Banco Santander Chile cuyo titular era Pablo Andrés Muñoz Giacaman y la suma de \$ 5.000.000 transferido 11 mayo 2015 a la cuenta corriente Número 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a Pablo Andrés Muñoz Giacaman y a su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre.

En la obtención de los créditos fraudulentos fue Mario Arzola Henríquez, quién previo acuerdo con Pablo Andrés Muñoz Giacaman, propuso a Hilda Henríquez Cuevas el modo de obtener en forma fraudulenta estos créditos ejecutados por Pablo Muñoz Giacaman; Mario Arzola llevó a Hilda Henríquez Cuevas la documentación necesaria para la solicitud de los créditos , participó en el llenado de la documentación, y luego le entregó la documentación a Pablo Muñoz Giacaman para la tramitación de los créditos, sabiendo todos que la documentación era falsa.

Cinco: Doña ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS, C.I. 11.573.761-9, también solicitó en Abril del año 2015 y obtuvo dos créditos para pequeños empresarios del transporte, con documentación falsa, el 22 abril 2015 por \$ 88.221.883 y el 27 abril 2015 obtuvo otro crédito por \$ 88.290.339, más una línea de crédito por la suma de \$ 2.000.000.n Estos créditos fraudulentos los obtuvo Ana Gladys Henríquez Cuevas, en forma concertada con Pablo Andrés Muñoz Giacaman, y su sobrino Mario Arzola Henríquez, quienes intervinieron en la solicitud de los créditos, haciendo uso de datos falsos respecto de la actividad, estado de situación o patrimonio de Ana Gladys Henríquez Cuevas, como empresaria del rubro transporte, condición que no tenía, para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación por Pablo Muñoz Giacaman; la documentación falsa presentada al banco para la obtención de los créditos a favor de doña Ana Gladys Henríquez Cuevas es la siguiente:

a.- Declaración Anual de Impuestos a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas, ese año 2014 Ana Gladys Henríquez Cuevas NO presento Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado falso en su formato y contenido.

b.- Certificado de Anotaciones Vigencias de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42-K, respectivamente del 26 marzo y 22 abril año 2015, con indicación en ambos del propietario: Ana Gladys Henríquez Cuevas. Esas placas patentes no existen con los números verificadores señalados y las placas DPPP.36 y CJLJ.42 no se encontraban ni se encuentran registrados a nombre de Ana Gladys Henríquez Cuevas en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva el Registro Civil, siendo ambos certificados presentados al banco, adulteraciones de documentos originales.

c.- Copia de contrato entre Ana Gladys Henríquez Cuevas y la empresa AES GENER S.A. de fecha 15 febrero 2015, sobre servicio de arriendo de buses. Este contrato nunca fue suscrito con la empresa referida, siendo falso su contenido y la mención de los comparecientes en representación de la empresa señalados en el contrato.

Del dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte fue usado para la compra por Ana Gladys Henríquez Cuevas de los buses placas patentes HFSS.42-1 y HFSS.43-K; otra parte del dinero obtenido ilícitamente fue recibida por Ana Gladys Henríquez Cuevas en su cuenta corriente número 533-0-017988-2 del Banco del Estado de Chile; parte de este dinero con origen ilícito fue transferido el 6 de mayo 2015 y 19 junio 2015 , la suma total de \$ 10.700.000.- a la cuenta corriente bancaria N° 61-97476-8 del Banco Santander de Pablo Andrés Muñoz Giacaman, y la suma de \$5.000.000 fue transferida el 11 mayo 2015 a la

cuenta corriente número 500100348899 del banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a Pablo Andrés Muñoz Giacaman y a su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre .

En estos hechos ilícitos fue Mario Arzola Henríquez, quién previo acuerdo con Pablo Andrés Muñoz Giacaman, que propuso a su tía Ana Gladys Henríquez Cuevas , por intermedio de su madre Hilda Henríquez Cuevas, el modo de obtener fraudulentamente los créditos; llevó la documentación necesaria para solicitar los créditos y participó en el llenado y forjamiento de parte de la documentación y luego la entregó a Pablo Muñoz Giacaman para su tramitación, sabiendo TODOS ellos de la falsedad de todo esos documentos.

Así los montos de dinero obtenidos fraudulentamente asociados a los créditos para pequeños empresarios del transporte antes señalados, obtenidos con documentación falsa sumaron al menos a la suma de \$460.976.544 más \$ 11.0000.00 en líneas de créditos, de este dinero obtenido por las personas ya individualizadas en forma fraudulenta, a lo menos \$ 75.060.000, fueron obtenidos por o para Pablo Andrés Muñoz Giacaman a través de transferencias recibidas o cheques cobrados.

II.- Calificación Jurídica:

a.- En el caso de PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, cinco delitos contemplados en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, DFL N° 3 del año 1997, que indica: “El que obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”. En estos hechos se le atribuye la calidad de autor en grado de consumado de conformidad a lo establecido en el artículo 15 número 1 del Código Penal.

b.- En el caso de MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ, dos delitos contemplados en el artículo 160 de la Ley General de Bancos; hechos en los que se le atribuye la calidad de autor en grado de consumado de conformidad a lo establecido en el artículo 15 número 1 del Código Penal.

c.- En el caso de HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS, dos delitos contemplados en el artículo 160 de la Ley General de Bancos; hechos en el que se le atribuye la calidad de autora en grado de consumado de conformidad a lo establecido en el artículo 15 número 1 del Código Penal.

d.- Finalmente en el caso de doña ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS, un delito contemplado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos; hechos en los que se le atribuye la calidad de autora en grado de consumado, según lo que dispone el artículo 15 número 1 del Código Penal.

III.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Respecto de cada uno de los acusados concurren las siguientes circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal:

a.- En el caso del imputado PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, concurre la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

b.- En el caso del imputado MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ, concurre la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

c.- En el caso de la imputada HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS, concurre la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

d.- En el caso de la imputada ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS, no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal

IV.- Penas solicitadas.

Atendida la pena asignada por la ley a los delitos, y en consideración a la naturaleza jurídica de los ilícitos que se investigan, solicitan se aplique las siguientes penas, todas por los delitos contemplados en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, DFL N° 3 del año 1997:

1.- A Pablo Andrés Muñoz Giacaman, por 5 delitos reiterados, la pena de diez (10) años de presidio mayor en su grado mínimo, más la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

2.- A Mario Esteban Arzola Henríquez, por dos delitos reiterados la pena de cinco (5) años de presidio menor en su grado máximo, más la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

3.- A Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, por dos delitos reiterados, la pena de cinco (5) años de presidio menor en su grado máximo, más la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

4.- A Ana Gladys Henríquez Cuevas, por un delito, la pena de tres (3) años de presidio menor en su grado medio, más la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

5.- Más, para cada acusado, las accesorias generales y especiales y costas de la causa.

Demanda civil: El Banco Estado presentó **demanda civil**, en conjunto con la acusación particular. De acuerdo al auto de apertura, llamadas las partes a conciliación, no siendo posible llegar a acuerdo.

La **Demanda Civil** presentada en contra de todos acusados, por parte del querellante BANCO DEL ESTADO DE CHILE, representada por el abogado Rodolfo Cerliani Vásquez, fundada en los hechos descritos en su acusación particular, a la cual se remite. Solicita que en definitiva se condene a una indemnización de perjuicios en contra de: Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Mario Esteban Arzola Henríquez, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y en contra de Ana Gladys Henríquez Cuevas, los cuatro ya individualizados, para que, en definitiva, sean condenados a pagar a su representado las cantidades que a continuación se detallan:

1.- Al pago de los daños materiales y efectivos sufrido por el Banco del Estado de Chile a consecuencia de las acciones dolosas de los demandados, que tuvo como consecuencia una pérdida real en el patrimonio del Banco del Estado de Chile, solo en capital, la suma de \$ 471.976.544. De esta suma, se demanda;

a.- A **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** para que sea condenado al pago, el solo, de la suma en capital de \$ 114.883.854 (que es la diferencia entre el total

defraudado \$ 471. 976.544 menos todos los créditos fraudulentos obtenidos por las hermanas Hilda Magdalena y Ana Gladys, ambas de apellido Henríquez Cuevas, la suma de \$ 357.092.690).

b.- Para que sean condenados al pago en forma solidaria, conforme al artículo 2317 del Código Civil, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y a Mario Arzola Henríquez**, al pago de la suma de \$ 178.580.468, que es el total, en capital, de los tres créditos obtenidos en forma fraudulenta por Hilda Magdalena Henríquez Cuevas: \$88.290.129 +88.290.339 + \$2.000.000= Total 178.580.468.

c.- Para que sean condenados al pago en forma solidaria conforme al artículo 2317 del Código Civil, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Ana Gladys Henríquez Cuevas, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y a Mario Arzola Henríquez**, al pago de la suma de \$178.512.222 que es el total, en capital, de los tres créditos obtenidos en forma fraudulenta por Ana Gladys Henríquez Cuevas: \$88.221.883 + \$88.290.339 + \$2.000.000= Total \$ 178.512.222. O la suma que US. estime conveniente, de acuerdo al mérito del proceso.

2.- El reajuste, equivalente a la variación que haya experimentado dichas cifras desde la época de la comisión de los delitos, hasta la fecha del entero y cumplido pago de las cantidades demandadas, todo de conformidad al índice respectivo determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

3.- Los intereses legales correspondientes, los que deberán ser calculados y liquidados por el Tribunal, desde la fecha de la comisión de los delitos, hasta la época en que se verifique el pago de las cantidades demandadas.

4.- El pago de las costas de la causa.

QUINTO: ALEGATOS DE APERTURA.

El **fiscal** presentó los casos materia del presente juicio, advirtiendo que se trata de cuatro acusados y cinco delitos. Manifestó que solo uno de los acusados, es común todos, Pablo Andrés Muñoz Giacaman, a quien calificó como el principal responsable de la totalidad y cada uno de los hechos, consecuentemente, aquel, a juicio del Ministerio Público y porque así lo indica el artículo 239 inciso tercero, vigente a la época de los hechos, ha de recibir notoriamente la pena más rigurosa al final del juicio.

Describió la forma de desarrollo de cada uno de los hechos, el procedimiento de obtención de créditos, las maniobras usadas para defraudar y las personas involucradas en los mismos.

Pidió al tribunal que durante del juicio y, en especial, al momento de la dictación de veredicto y la condena que creen será impuesta en este caso a los acusados, mire en perspectiva su conducta en relación con el resto de los imputados en la causa, que prestaron declaración con anterioridad a este juicio y participaron de diligencias de investigación, lo que motivó que en la acusación se reconozca la atenuante del artículo 11 nº9 del Código Penal respecto de uno de ellos, Mario Arzola Henríquez,

El ente persecutor señaló que la conducta del acusado a partir de los elementos típicos que se describen en la acusación constituyen el delito de fraude

al fisco, puesto que conforme a las definiciones del Código Penal, aquél tiene la condición de empleado público, los dineros tienen la condición de fondos fiscales por las razones que se dirán en el alegato de clausura, y consecuentemente, toda otra conducta ilícita de menor gravedad está absorbida por el delito más grave, que en este caso, corresponde al del artículo 239 inciso tercero.

En relación a los otros acusados, que no son funcionarios del Banco Estado, Mario Arzola Henríquez, Hilda Henríquez Cuevas y Ana Henríquez Cueva, la Fiscalía les imputa la condición de empleados públicos, porque entiende que, a su respecto se aplica comunicabilidad estricta respecto del mismo delito principal, que en este caso es, fraude al fisco, postura que está apoyada jurisprudencialmente según refirió, dejando para las clausuras el desarrollo de este punto.

Espera que los imputados declaren, pronosticando que probablemente las declaraciones de doña Hilda Henríquez Cuevas, doña Ana Henríquez Cuevas y don Mario Arzola Henríquez no arrojarán sorpresas, y aseverando que no comparte esa postura respecto de don Pablo Muñoz Giacaman, quien, en ningún momento de la investigación ha efectuado un reconocimiento efectivo de su actividad y más bien ha buscado siempre para ponerse en una condición que genere de una manera forzada alguna compasión con su condición, la que el fiscal espera a partir del relato de los clientes, y otras personas que se vieron afectadas indirectamente por su acción, den cuenta que no merecen tal trato privilegio que procura.

Por su parte, **la querellante Consejo de Defensa del Estado**, expuso en primer lugar, que se ha adherido a acusación tanto en cuanto a los hechos como calificación jurídica, esto es, el delito de fraude al Fisco descrito y sancionado en el artículo 239 de Código Penal en su inciso tercero, no se extenderá más allá respecto de medios probatorios aludidos por el Ministerio Público y la forma que se va a probar en esta causa la participación predominante y decisiva en el resultado del perjuicio causado al Banco Estado, cometido por la actuación del encartado Pablo Muñoz Giacaman. En efecto, sin la intervención de este funcionario público ejecutivo de pequeña empresa, el Banco Estado, jamás habría podido entregar estos cuantiosos créditos que ascienden aproximadamente a \$450.000.000 según la acusación fiscal, de los cuales parte de esos dineros, alrededor de 75 millones y fracción quedaron en poder de Muñoz Giacaman a través de estos actos de disposición que él hace de estos dineros, que se obtienen de los créditos, y que ingresan ya sea a su patrimonio personal o al patrimonio personal que compartía en una cuenta bipersonal con su cónyuge.

En ese contexto, los medios de prueba con los que el Ministerio Público cuenta podrán acreditar que la actividad desarrollada y desplegada en su calidad de ejecutivo de pequeña empresa, permitió al Sr. Muñoz Giacaman que el banco otorgara estos créditos mediante la documentación falsa que permitió otorgar a estos clientes una condición empresarial y una condición crediticia que no tenían para poder acceder a estos cuantiosos créditos, haciendo presente que los créditos varían entre \$ 33.000.000 y \$ 36.000.000 y hasta \$ 88.000.000. Los créditos otorgados destinados por los bancos para desarrollar la actividad del

transporte y que cuentan con garantía FOGAIN, esto es, garantía del Estado. Por otra parte, la prueba pericial dará cuenta de que la documentación presentada para la obtención de estos créditos fue falsificada, ya sea porque en ella hubo intervención de terceros, porque efectivamente no son veraces y porque existió adulteración de los mismos, y permitiendo este ardid que ha planificado el Sr. Muñoz Giacaman quien era el que siempre tuvo el control de la acción por ser el ejecutivo, la persona encargada en el banco de evaluar los créditos, y de ser el responsable de verificar la veracidad de los antecedentes que cada cliente presenta para poder ser sujeto de crédito. En ese contexto, él siempre tuvo en su poder, la facultad, de verificar esta información y tal como lo señaló el Sr. Fiscal su dolo directo queda manifestado en la presentación de estos documentos, puesto que, además de ser falsos, no hay un acto negligente, ya que finalmente, quien obtuvo el mayor beneficio con la obtención de estos créditos fue el Sr. Muñoz Giacaman.

Creen que, finalmente, en este juicio, la discusión se va a centrar no en probar los hechos, sino en la calificación jurídica que se dé a estos hechos respecto de los particulares. Es conocida la discusión nacional jurisprudencial y doctrinaria, respecto de cuál es la calificación jurídica que se le debe dar a los particulares, que participan en la comisión de delitos en los cuales se requiere una calidad especial como en el caso del Sr. Muñoz Giacaman, quien es un empleado público, porque trabaja para una empresa del estado, que fue creada por el DL 2079 de 1978, que establece que el Banco Estado es una empresa autónoma del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, el Sr. Muñoz Giacaman es un empleado público, porque el estatuto de personal del Banco Estado está regulado por el Decreto 432 de 1979, que indica que los funcionarios del Banco Estado se rigen por en cuanto a la calidad de personal por las normas de ese decreto, y supletoriamente por otras normas, como las del Código del Trabajo, sin embargo, tienen un nombramiento y son empleados públicos, porque tanto la institución para la que prestan servicios como el estatuto que los regula está dado por normas legales y no por el acuerdo de voluntad de dos o más personas. En ese contexto, no hay discusión alguna en que el Sr. Muñoz Giacaman es un empleado público, a mayor abundamiento, ellos están sometidos a sumario administrativo, investigación que se llevó a efecto en este caso, sobre la que depondrá el investigador, dando cuenta de cómo internamente operaba el Sr. Muñoz Giacaman en cuanto a la transferencia de los fondos de estos créditos otorgados a estos clientes que le permitieron generar transferencias, haciendo un alcance en este punto, que el Banco no solamente otorgó créditos, sino que también les abrió cuentas corrientes y líneas de créditos a estos clientes, para que pudieran operar en el banco, dineros que también fueron utilizados por el Sr. Muñoz Giacaman y de esa manera, igualmente, se podrá comprender la acción que ejecuta él con la chequera que correspondía al Sr. José Sepúlveda.

Sostienen, entonces, que respecto del Sr. Muñoz Giacaman es un funcionario público conforme a lo que establece el artículo 260 del Código Penal, fundamentalmente, porque el Banco del Estado es un banco que tiene una función pública y estatal, porque a través del Banco Estado, entonces, el Estado de Chile realiza una función económica que tiene por objeto mover la actividad económica,

pero también permitir el acceso económico o el acceso al crédito a personas mayormente vulnerables o que en esas condiciones no sería sujetos de crédito en otras instituciones bancarias.

Como anticipó el punto de discusión será si estos particulares que participan con el Sr. Muñoz Giacaman, esto es, si la Sra. Hilda y la Sra. Ana Henríquez Cuevas, y el Sr. Mario Arzola tienen o no la calidad de empleados públicos. Y, en este aspecto, el Consejo de Defensa del Estado plantea la teoría de la comunicabilidad, es decir, que esta situación o esta condición especial se comunica a aquellos que participan en la comisión de este hecho, fundamentado aquella calificación jurídica, a su juicio, en dos cuestiones: la primera de texto o legal, que es el artículo 64 del Código Penal, que establece una regla de incomunicabilidad de las circunstancias personales, sin embargo, esta norma está dada solo para las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal; el texto legal es expreso y únicamente limitada a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, de modo tal, que a contrario sensu, la regla entonces es la contraria para el resto de las circunstancias personales, como sería ésta que es la de ser un funcionario público que le da la característica a este delito especial. La segunda, tiene que ver más bien con un tema de dogmática jurídica, y dice relación con el principio de la unidad del título de imputación que quiere decir que todos quienes intervienen en un hecho típico deben ser sancionados por el mismo título. Posiciones en este sentido, doctrinarias en Chile han sido planteadas por el profesor Novoa y por el profesor Carril. Hay cierta doctrina, sostenida por el profesor Hernández, que señala que, nuestra jurisprudencia ha sido dominante en aceptar esta tesis, respecto de la mayoría de los delitos especiales, con la salvedad del parricidio, según esta tesis dice este autor, los partícipes deben responder siempre exactamente por el mismo concepto por el que responde el autor, con la condición que hayan tenido conocimiento de la concurrencia personal del funcionario público. En este punto se va a detener, porque tanto la Sra. Hilda, como la Sra. Ana y tanto Mario Arzola, sabían que Pablo Muñoz Giacaman era un ejecutivo del Banco Estado, que los créditos los iba a otorgar el Banco Estado, que se iban a otorgar estos créditos, que no eran créditos para cualquier finalidad, sino que tenían una finalidad específica y, por lo tanto, ese conocimiento los hacía sabedores de la situación en la que estaba el Sr. Muñoz Giacaman. No era desconocido para las encartadas que Pablo Muñoz Giacaman trabajaba en el Banco Estado, que era ejecutivo del mismo, y que les iban a otorgar créditos para comprar buses. Ese conocimiento, las encartadas lo tenían de tal manera que sabían de qué se trataba esta temática y sabían quién era Muñoz Giacaman, porque lo relacionaban directamente con el hijo o el sobrino en este caso, del otro encartado, Mario Arzola, encartado que era socio en los hechos de Muñoz Giacaman, quienes habían conformado una sociedad de transportes por intermedio de una tía, la que se llamaba Muñoz y Arzola Ltda., y que fue constituida por la tía de don Mario Arzola, doña Ada Henríquez Cuevas, hermana de las encartadas. En ese contexto estiman que hacer una calificación jurídica diversa de a figura de fraude al fisco, haciendo presente que cierta doctrina ha recientemente señalado que este delito no es impropio, sino propio, y el argumento esgrimido por la doctrina actual, sustentada por el profesor Balmaceda, entre otros, es porque cual es la figura residual del fraude, es una estafa genérica,

es una estafa especial, del artículo 470 n°8 del Código Penal, es un hurto o una apropiación indebida. Según el profesor Balmaceda al no existir una claridad de cuál es la figura residual, como por ejemplo ocurre con el parricidio y el homicidio simple, en la práctica no existe certeza de cuál es el juicio de imputación que se le va a dar al extraneus, cual es el dolo, por lo tanto, lo única que quedaría aquí es sancionar a los extraneus, como autores de fraude al fisco, porque respecto de ellos se genera el mismo título de imputación.

Así creen, que durante las extensas jornadas que nos esperan en este juicio, se podrá acreditar entonces la participación del Sr. Muñoz Giacaman como autor de fraude al fisco del artículo 239 inciso tercero del Código Penal y también la participación que, en los mismos hechos y con esa calificación jurídica les ha correspondido a las encartadas Ana Henríquez Cuevas, Hilda Henríquez Cuevas y Mario Arzola Cuevas.

En tercer lugar, expuso el **querellante Banco Estado**, señalando que, en representación del Banco del Estado de Chile, cuya Ley Orgánica está establecida en el DL 2079 del año 1977, presentaron querella por el delito sancionado en el artículo 160 de Ley General de Bancos contra todos los que resulten responsables de los hechos relatos por Fiscalía que, por economía no repetirán y los hacen suyos.

En la etapa procesal correspondiente, el Banco del Estado presentó acusación propia, personal, separándose de la posición jurídica de los que a los hechos debe calificarse, este querellante si bien concuerdan en los hechos y la forma de ocurrencia de los mismos, estiman que, desde el punto de vista jurídico la calificación de ellos es distinta.

Consideran que el autor principal de los hechos, Pablo Muñoz Giacaman, nunca fue empleado público del Banco del Estado de Chile, como tampoco lo son ninguno de los empleados que trabajan para este banco, es por eso que presentaron la querella de acuerdo al artículo 160 de la Ley General de Bancos, el que reproduce.

Probarán con la prueba ofrecida en su acusación, que Pablo Muñoz Giacaman tuvo participación directa en todos los créditos otorgados en formas fraudulentas a don José Iván Sepúlveda Tapia, a don Héctor Fernando Jara Cabeza, de doña Paula Camila Brant Parada, en el cuarto y quinto lugar, las situaciones de las hermanas Hilda y Ana Henríquez Cuevas, que actuaron en concomitancia con éste y también con otro acusado Mario Arzola Henríquez.

Es por eso que estiman que Pablo Muñoz debe ser condenado por cinco delitos reiterados contemplados en el artículo 160 de la Ley General de Banco en grado de consumado conforme al artículo 15 n°1 del Código Penal, en el caso de Mario Arzola, solicitan que sea condenado por 2 delitos reiterados del artículo 160 de la Ley General de Bancos. En el caso de Hilda Magdalena Henríquez, que solicitan que sea condenada en calidad de autora y por los delitos reiterados establecidos en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, en grado de consumados. Con respecto a Ana Gladys Henríquez Cuevas, requieren que ella

sea condenada por el delito también establecido en el artículo 160 de la Ley General de Bancos en el grado de consumados.

Acerca del daño civil, que probarán que la conducta delictiva del imputado además de obtener créditos con documentación falsa, ocasionó perjuicio real y efectivo, no al Fisco de Chile, sino al Banco del Estado de Chile, por un monto en capital de \$ 471.000.000, ya que ese dinero al día de hoy, no ha sido recuperado, siendo los afectados por el delito. De esa manera, hacen responsable a Pablo Muñoz Giacaman por el total del perjuicio causado, esto es, \$160.000.000 en capital y el resto son líneas de sobre giro otorgados a las personas que ya individualizó antes. En segundo lugar, de esta cantidad solicitan que responda en forma solidaria, la Sra. Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y su hijo Mario Arzola, por los créditos, otorgados a la propia Hilda y también la hermana de ella, Sra. Ana, porque ellos participaron en concomitancia en la concreción de la falsificación para obtener en definitiva estos dos créditos respecto de cada una de ella.

Finalmente, respecto de doña Ana, solicitan que se le haga responsable civilmente en forma solidaria de sus créditos 178 millones de pesos, con todos los anteriores.

Afirma que el perjuicio lo sufrió el Banco del Estado, y que hay argumentos de leyes, que confirman la posición del banco también, citando al efecto los artículos 1, 2, 29 de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile está establecida en el DL 2079 de 1977, exponiendo que, los funcionarios del Banco del Estado de Chile, son empleados particulares, conforme al artículo 2º de la Ley Orgánica del Banco Estado de Chile, no existiendo norma especial en contrario. Invoca, asimismo, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, en cuanto a que está cometido a la fiscalización de la Comisión para el mercado Financiero y no por la Contraloría General de la República. Los trabajadores del banco Estado no tiene decreto de nombramiento, sino que firman contrato de trabajo con el Banco. Los sueldos de los empleados del Banco del Estado de Chile no están establecidos en una escala única, sino que se negocian colectivamente a través de sus sindicatos.

En relación al artículo 160 de la Ley General de Bancos, según el cual: “el que obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio ocasionando perjuicios a la institución, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.”

Argumenta, que esta disposición está establecida en una ley especial, la Ley General de Bancos, por lo tanto, predomina sobre el artículo 239 del Código Penal. Es decir, los funcionarios de los bancos en Chile, sean públicos o privados, cometen delito del artículo 160 de la Ley de Bancos, y por ser una ley especial prevalece sobre tipificado en artículo 239 del Código Penal.

En cuanto al concepto de empleado público, afirma que está establecido en el Estatuto Administrativo, DFL 338 de 1960, dice en el artículo 2º letra b, de esta ley: “Empleado público o funcionario es la persona que desempeña un empleo

público en algún servicio fiscal o semi fiscal y que, por lo tanto, se remunera con cargo al presupuesto general de la Nación o del respectivo servicio”.

Nada de esto ocurre con los funcionarios del Banco del Estado de Chile, su remuneración la paga directamente el Banco de Estado de Chile, no lo paga ni el fisco de Chile, ni el erario nacional ni el servicio donde está el funcionario, lo paga directamente el Banco del Estado de Chile.

En su alegación de inicio, **la defensa de don Pablo Muñoz Giacaman**, en primer lugar, se refirió a la trayectoria vital de su representado en cuanto a estudios y experiencia laboral. Añadiendo que, en un momento determinado de su vida, realiza tres conductas subsumibles en el tipo penal del artículo 160 de la Ley General de Bancos, compartiendo la posición jurídica adoptada por el querellante Banco Estado.

En cuanto a la conducta realizada por su representado en un momento determinado de su vida que se explicará porqué ello ocurrió, también se revelará porqué en una primera declaración, el imputado no aporta antecedentes a esta investigación, a diferencia de lo que ocurre en una segunda declaración que se presta ante el Juzgado de Garantía donde renunció a su derecho a guardar silencio, y entregó un correlato a hechos que constituyen un delito o varios delitos como se formulaba por parte del Ministerio Público.

Asimismo, invoca los principios de principio de la tipicidad, señalando que la conducta imputada a su defendido es subsumible en el artículo 160 de la Ley General de Bancos. Explica que el obrar de su representado en un momento determinado fue generado por una atenuación de sus condiciones psíquicas, derivada de incurrir en gastos más allá de lo que podía derivado de una adicción al juego y de una adicción al consumo de sustancias ilícitas, y en una conducta de obtener créditos, obteniendo parte de esos créditos para su persona, ello a proposición de un tercero. Su representado obtuvo de esta institución pública créditos proporcionando en los tres primeros casos, antecedentes que no eran fidedignos, porque de manera contraria, estas personas no podían obtener los créditos en cuestión y él se queda con parte de estos dineros, se trata de créditos de alrededor \$ 35.000.000 a \$ 38.000.000 para cada una de estas personas, Sr. José Sepúlveda, el Sr. Héctor Jara y la Sra. Paula Brant, los cuales quedan con parte de estos dineros y otra parte de estos créditos se queda en poder de su representado. Aclara desde ya, apelando al sentido común, que se señala por el Ministerio Público que el Sr. José Sepúlveda no recibió parte alguna de estos dineros, y que, en definitiva, fue una persona que concurre hasta el banco a solicitar un crédito de \$ 1.000.000 y en definitiva no se le otorga, y después todo este dinero que se obtiene va a parar a poder de su representado, acreditarán que el Sr. Sepúlveda cobró por ventanilla con su carnet de identidad uno de estos cheques y es así como se procede ante los bancos. Es absolutamente improbable que un cajero de banco vaya a entregar por ventanilla una cantidad importante de dinero a una persona que no le exhiba su cédula de identidad. Por lo tanto, el Sr. Sepúlveda de alguna forma cobró estos dineros, pero el relato resulta ser distinto a la luz de lo aquí señalado.

Respecto de don Héctor Jara y la Sra. Paula Brant, ellos sí reconocen haber recibido parte de estos préstamos y, que, en definitiva, demostrarán que parte de estos dineros de forma importante, de la misma manera fueron a parar en manos de un tercero que tenía vinculación con ambos. No dice que puedan demostrar esta vinculación con el Sr. José Sepúlveda, porque no cuentan con mayores antecedentes probatorios que la declaración y los antecedentes aportados por su representado, pero sí respecto de los otros dos.

Tratándose de la situación de la Sra. Hilda, Ana y Mario Arzola acreditarán que se trata de créditos fueron obtenidos para su representado y para el Sr. Arzola presentando antecedentes falsos acerca de la identidad de quien iba a ser el destinatario de estos dineros, ello a efectos de realizar una actividad lícita mediante la compra de buses para prestar servicios a una minera en el traslado de sus trabajadores. Actividad que acreditarán que, en definitiva, fracasó y se generó las respectivas demandas ejecutivas para el cobro de las cantidades adeudadas.

Ambas figuras son absolutamente subsumibles en el artículo 160 de la Ley General de Bancos de acuerdo a lo que ella señala, se trata de la obtención de créditos de una institución, en este caso, el Banco Estado suministrando datos que no son reales y en otro caso, reemplazando la identidad de quienes aparecen como solicitantes. Ello, por cuanto demostrarán, que tanto el Sr. Arzola como su representado no podían pedir esos créditos directamente de Banco Estado. Por eso es relevante el tema de la tipicidad, la Constitución ninguna conducta se puede castigar, sino en los casos que la ley la describe, es la ley la que describe las conductas y de acuerdo a ello se precisa se precisa cual es la actividad que ha desarrollado el imputado.

Desde el punto de vista de la sanción que solicita el Ministerio Público reiteran, que cualquier petición de pena tendrá que ser establecida en la sentencia, y una vez discutidos los parámetros de lo que significa el respectivo juicio oral. Entienden que, si bien existirá en la presente causa una eventual sentencia condenatoria, toda vez que su representado al igual que lo hizo ante el Juzgado de Garantía, establecerá ante este Tribunal cuál es su participación en los hechos y qué actividades éste realizó, renunciando a su derecho a guardar silencio y realizando una declaración que podrá ser corroborada facilitando la decisión de este tribunal, deberá ser en definitiva ponderada esa circunstancia a la luz de los señalado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos.

Y, por otra parte, demostrarán que per se no incidiendo el carácter de funcionario público en la no aplicación del artículo 160 de la Ley General de Bancos, sea funcionario público o privado, se aplica la norma y en definitiva, compartiendo el criterio del Banco Estado en cuanto a que su representado no es un funcionario público, sino un empleado particular, sujeto a metas, a normativa de trabajo propia de instituciones privadas y no propias de instrumentos públicos.

Por último, aclara, esbozarán en su oportunidad que el criterio del profesor Balmaceda, al cual ha hecho referencia el Consejo de Defensa del Estado, producto de las últimas modificaciones en materia de estos fraudes al Fisco, ha

cambiado. Cuestión que en definitiva probarán durante el devenir del juicio y en los alegatos de clausura correspondientes a esa etapa procesal.

En conclusión, la oferta de la defensa del Sr. Muñoz Giacaman: se demostrará que, éste efectivamente obtuvo créditos en parte para sí y en parte para terceros, mediante la aportación de documentos de carácter falso, y en segundo lugar, se probará que también obtuvo créditos para su persona y para don Mario Arzola a efectos de generar la compra de buses para realizar actividades empresariales en el norte de Chile, a empresas mineras y que, en definitiva, por no poder comparecer ellos, la identidad de los solicitantes fue distinta de quienes solicitaban los créditos, pero ello, en definitiva, se trató de una operación de carácter comercial que fracasó. Y ello se demuestra porque estos créditos, las cuotas de estos créditos muchas fueron efectivamente pagadas, porque es una práctica común que hay personas que se dedican a maquillar antecedentes para obtener créditos, ya sea hipotecarios o de otra naturaleza que en definitiva las personas terminan pagando, porque no todos los ingresos se reflejan en actividades formales, hay otro tipo de ingresos, pero en este caso en comento se pagaron algunas de las cuotas no todas ellas, y eso es lo que demostrarán durante la secuela del juicio y harán la petición de sanción si ello corresponde en su oportunidad de acuerdo a la prueba que se rendirá oportunamente.

Finalmente, **la defensa de don Mario Arzola Henríquez, doña Hilda Henríquez Cuevas y doña Ana Henríquez Cuevas**, argumentó que tal como lo reconoció el fiscal, sus representados, han reconocido su participación en los hechos desde el inicio de la investigación, declarando ante el Ministerio Público y ante la Policía de Investigaciones en su oportunidad, ayudando al esclarecimiento de los hechos.

Respecto a la Sociedad de Mario Arzola Henríquez que tenía con Pablo Muñoz, efectivamente era de facto, en el sentido que don Mario Arzola no era socio en la escritura con Pablo Muñoz, sino que la socia era doña Ada Henríquez Cuevas, tía de Mario Arzola. El representante legal de esa sociedad fue siempre Pablo Muñoz Giacaman, ella nunca tuvo injerencia más allá en esa sociedad, sino que esa sociedad se creó, ya que a Mario Arzola le presentan a Pablo Muñoz y de común acuerdo empezaron a trabajar un contacto en el norte para hacer operar una empresa de transporte de personal, puesto que Pablo Muñoz trabajaba en transporte de carga. Así entonces, Pablo Muñoz conoce a Mario, le crea su confianza, pero más allá de la sociedad que tenía Pablo Muñoz con Ada Henríquez ofrece a Mario comprar cuatro buses en el norte y no arrendar, pero Mario Arzola no podía comprar buses, porque tenía problemas financieros, tenía DICOM. Entonces, Pablo Muñoz le indica que deben comprarse cuatro buses, porque era una posibilidad de trabajo en el norte y estos cuatro buses, tendrían que ser comprados por dos personas distintas, y que Mario tendría que arreglárselas. Mario Arzola le comunica a su madre Hilda Henríquez y a su tía para comprar estos cuatro buses para ponerlos a trabajar en el norte. Pero ahí para Pablo Muñoz Giacaman, Mario Arzola con su madre y su tía fue un vehículo en el fondo para defraudar, en este caso, al Banco Estado, ya que, si bien es

cierto se compraron estos cuatro buses, sus representados nunca vieron un peso respecto a la generación de estos trabajos y a corto plazo estos contratos no prosperaron.

Por otro lado, puede decir que también fueron en cierto modo víctimas de que Pablo Muñoz, sin el conocimiento de sus representados, le otorgó estos créditos a dos personas que eran dueñas de casa, con estudios básicos, nunca tuvieron una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, una línea de crédito, les otorgó estos créditos de buses, pero también les abrió línea de crédito, cuenta corriente, tarjeta de crédito, donde tampoco sus representadas no vieron un peso y nunca se enteraron que Pablo Muñoz había otorgado estos créditos, sino hasta la formalización.

Así las cosas, cuando estos créditos se empiezan a pagar en un primer momento y ya después no se pagan, sus representadas se hacen parte de los juicios ejecutivos que entabla el Banco Estado caratulados C-4778- 2016 del 2° Juzgado Civil de Concepción caratulados “Banco Estado con Henríquez” y C-6647- 2016 del 1° Juzgado Civil de Concepción, haciéndose parte en estas causas civiles, entregando voluntariamente los buses al Banco Estado. Entidad que, al enterarse de esta entrega voluntaria de buses, a través de su representante exhorta y oficia el retiro de estos, por ende, sus representadas por reparar el daño producido, respecto a la compra de estos buses, hacen entrega voluntaria de estos al Banco Estado, en las causas civiles como ya señalado.

Por ende, sus defendidas desde el inicio, han ayudado al esclarecimiento de los hechos. Mario Arzola ha reconocido su participación, sus representadas se han hecho parte como ya señaló en las causas civiles haciendo entrega voluntaria de los buses materia de este juicio, y por último, a su parecer, no creen que el delito por el cual se acusa a sus representados sea el de fraude al Fisco del artículo 239 inciso tercero del Código Penal, sino que comparten el criterio señalado por el Banco Estado y así también la otra defensa que, el delito tiene que ser el calificado bajo el artículo 160 de la Ley General de Bancos y no el de fraude al Fisco .

Así se acreditará lo que señala en este alegato de apertura, con la prueba testimonial y documental, que se rendirá en la etapa procesal correspondiente y que acreditará la responsabilidad de sus representados, lo que ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público y también en las causas civiles del Banco Estado haciendo entrega voluntaria de los buses objeto de esta querella.

SEXTO: Que de conformidad al artículo 326 del Código Procesal Penal el imputado **PABLO ANDRÉS MUÑOZ GIACAMAN**, hizo uso de su derecho a prestar declaración, en los siguientes términos.

En forma libre y espontánea refirió que antes de comenzar con los hechos, quiere indicar que trabajando como funcionario del Banco Estado, efectivamente obtuvo ciertos créditos, tres créditos con los Sres. Sepúlveda, Jara y la Srta. Brant, con los que se quedó con parte de esos fondos, en coordinación junto con el Sr. Alejandro Beltrán, quien es la persona que trae a su puesto de trabajo a estas tres personas quien estaba al tanto de toda la situación, de cómo iba a ser la forma de

trabajar, y de cierta forma es la persona que hizo posible que esto también funcionara. Y, además, también en los dos créditos con la Sra. Hilda y Ana, también obtuvieron junto con Mario, que como no podían, él siendo funcionario obviamente no podía pedir un crédito para sí, y Mario que por su condición financiera tampoco podía pedir un crédito para él. Obtuvieron estos dos créditos para la compra de los buses, con la finalidad de un negocio legal con una minera y poder comenzar a recibir ingresos siempre con la intención de pagar y hacer de forma legal el pago de todos estos créditos.

En relación a los tres primeros, siempre el acuerdo fue que los créditos se pagaban, con Alejandro Beltrán siempre se conversó que estos créditos se iban a pagar, y en conjunto con Mario cuando vieron la posibilidad para comprar estos buses, también siempre la intención fue la de pagar. Nunca hubo una intención de defraudar.

Como comienza esto, viene de una familia de clase media, normal, estudió en un colegio privado, el Instituto Humanidades, egresó el año 2000, con promedio sobresaliente, buen alumno, sin ningún tipo de problemas, luego ingresó a la Universidad del Desarrollo donde se tituló como ingeniero comercial, siendo el segundo alumno de la promoción, destacado y titulándose con honores, sin tampoco tener ningún tipo de problema. Ingresó a trabajar al Banco Santander el año 2008 donde trabajó como ejecutivo de empresa hasta el año 2010, administrando una cartera de clientes, aproximadamente a 120 clientes, cumpliendo sus metas, su trabajo, sin pormenores ni problemas, con una calificación interna del Banco Santander acorde a su trabajo.

Ingresó el año 2010 a trabajar al Banco Estado, donde trabajó en una plataforma de pequeña empresa, con un equipo de trabajo donde se llevaron siempre muy bien, no tuvieron nunca ningún problema.

Venía desde antes con el tema de, siempre le gustaron los juegos, las apuestas, los casinos, creyendo que era controlado, que mantenía el control sobre eso, pero llega una etapa, en el momento no lo podía determinar así, y no lo podía dimensionar, pero se fue metiendo y absorbiendo en estos juegos, en estas apuestas, empezó a perder dinero, altas sumas de dinero, a veces ganaba, pero las menos. Se fue endeudando tanto en la banca privada con distintos bancos, pidiendo créditos, usando las tarjetas de créditos que tenía en ese tiempo, no dimensionaba, siempre pensaba que podía salir del problema y en conjunto con esto, y debido a su alta afluencia tanto a casinos formales como informales, comenzó a utilizar drogas, sustancias ilícitas que le permitían poder cumplir sus labores como funcionario, padre, esposo, y tratando de evitar levantar sospechas de lo que estaba realizando.

Es así que llegó al año 2013-14 en que la situación económica ya lo aquejaba, no tenía los suficientes ingresos para poder cubrir las deudas que tenía y comenzó a pedir créditos informales a prestamistas, gente que prestaba dinero con un retorno con altos intereses, y con un riesgo asociado, porque estos créditos informales no son préstamos que cobren en forma normal o decente, incluso pueden llegar hasta amenazas en el caso de no pago. En el transcurso empezó a

perder su patrimonio que tenía en ese momento, a tener problemas para pagar las cuotas de vehículos, de la casa, la mensualidad del colegio de los niños que en ese momento estaban en colegio particular.

Un día llegó al Banco Estado, Alejandro Beltrán a quien conocía desde el Santander, quien era cliente de Banco Santander y del Banco Estado del segmento empresa, en una conversación puntual de un día, el deponente le comentó los problemas financieros que estaba teniendo y él le plantea la posibilidad de obtener créditos para personas que él pudiera traer de los cuales, el acusado se quedaba con una parte de esos crédito y la otra parte desconoce cuáles eran las partes de ellos, pero entre ellos se arreglaban, y que vieran esa posibilidad. Manifiesta que no fue una decisión inmediata, nunca había ideado estas cosas, pero en su desesperación y en su mundo de bilz y pap que estaba viviendo en ese momento, decidió aceptar esta proposición, y es así como llegó don José Sepúlveda al banco que viene en compañía de Alejandro, llegan a su puesto de trabajo, y se le indica más o menos cómo iba a ser la forma de realizar esto, Alejandro le llevó la documentación, la cual que él recepcionó, probablemente debe haber hecho algún tipo de firma o algo debe haber hecho, la verdad no lo recuerda con exactitud, y sale a aprobación este crédito y se cursa un crédito por el monto que se indicó, con el cual el acusado se quedó con una parte, y el resto fue cobrado por el Sr. José Sepúlveda, quien lo cobró por ventanilla con su carnet de identidad, lo cual es totalmente contrario a lo que él indica de que había ido al banco a pedir un crédito por un \$ 1.000.000 y que había sido denegado. Porque si mal no recuerda, incluso el deponente dio hasta el visto bueno desde la caja cuando piden para poder cobrar un monto alto, piden un visto bueno, y él otorgó el visto bueno para que fuera cobrado por don José Sepúlveda por caja con su carnet de identidad, por un monto de \$ 17.000.000.

Posterior a eso, Alejandro le presentó a Héctor Jara, a quien el tampoco conocía, pero sí él conocía muy bien a Alejandro, eran amigos, entiende que Héctor Jara trabajó para don Alejandro en las empresas de él, hicieron exactamente lo mismo, Alejandro le trae la documentación y se obtuvo el crédito en el cual el imputado se quedó con una parte y el resto fue entregado a don Héctor Jara, y ahí desconoce cuáles fueron las partes para cada uno, entiende por lo que Alejandro le comentó con posterioridad que don Héctor Jara le entregó a Alejandro una alta suma de dinero y se realizó el proceso de este crédito, la obtención para cada una de las partes de los fondos de los créditos.

Posteriormente, vino la Sra. Paula Brant, que él no conocía y fue acompañada de Alejandro, ella tiene un vínculo directo con Alejandro, es la mamá del hijo de Alejandro y su pareja en ese momento. Alejandro le trae la documentación, le entrega todos estos papeles, y se indicaron cuáles iban a ser las partes de cada uno, se procedió a realizar el desembolso de dinero para cada una de las partes, y también entiende que Paula le entregó una alta suma de dinero también a Alejandro.

Luego, Alejandro le insistió que continuaran realizando esto, y el imputado le dijo que no le interesaba por el momento, explica que dentro de su

desesperación que tenía con anterioridad, también vio el riesgo de todo esto y le dijo que no.

Anteriormente, el acusado había conocido a Mario por intermedio de un proveedor de clientes que tenían en el banco, don Patricio Hermosilla, conoció a Mario, con quien formaron una amistad, con quien hicieron lazos tanto personales como laborales, y en un momento le manifestó, ya que Mario tenía muy buenos contactos en el norte para poder comenzar a trabajar y siempre la intención del imputado fue tratar de independizarse de los bancos. Y es así que sale esta idea en la cual se ve la opción de comprar cuatro buses para poder colocarlos a trabajar, Mario vio la opción de buscar estas dos personas para que fueran quienes los reemplazan a ellos, ya que al final los créditos eran para ellos, y así como llegaron doña Hilda y doña Ana a quienes no conocía, quizás había escuchado hablar de ellas alguna vez, pero no las conocía. Recibió la información, ingresó los créditos a los comités, aprobaron, se compraron los buses, y los saldos de dinero fueron a entregados, desembolsados a las cuentas de ellas, y luego se desplazaron hacia la cuenta del deponente y a la cuenta bipersonal que tenía con su señora quien no tenía conocimiento alguno. Ese dinero fue utilizado básicamente en la implementación, pintura, desplazamiento, y con posterioridad, pagos de sueldos, pagos de petróleo, una suma de gastos que se involucraron como para la puesta en marcha de una empresa. Así funcionó ese tema.

Manifiesta que desea dejar en claro que se encuentra muy arrepentido de haber realizado toda esta situación, por el daño a la institución quien lo recibió y acogió de las mejores formas, por el daño a sus colegas con quienes ha compartido por más de cinco años, el daño familiar que realizó y que le dio tanto a su Sra., a sus hijos, a la gente que lo quería, que lo quieren, que obviamente no están de acuerdo con lo que hizo, pero que le han dado su apoyo en el transcurso del tiempo. Arrepentido porque nada de esto resultó, todo lo que pensó en el momento podía sacarlo del hoyo en que estaba, sacarlo de los problemas, finalmente, fue todo lo contrario, y terminó perdiendo todo, absolutamente, perdió su casa, sus vehículos, actualmente vive de allegado en la casa de su suegra en Arauco, sus hijos se encuentran en un liceo fiscal, y no pagan una mensualidad y viviendo en base a donaciones tanto de amigos como de familiares y todo le generó un daño, tanto familiar, como psicológico y actualmente se encuentra en un tratamiento con la psicóloga Claudia Díaz quien le está ayudando a salir de esto y la abstinencia del consumo, para salir delante de todo esto y poder volver a empezar en algún momento. Fue una etapa compleja, de juegos, de consumo de drogas, donde se gastó sumas, de mirar para atrás ve todo lo que hizo y le da una rabia con sí mismo y una pena porque nadie de las personas que se vieron involucradas ni familiar ni laboralmente merecían todo lo que tuvieron que pasar por esta situación. Tuvo malas juntas, malos consejos, que lo llevaron a estar en esta posición, siendo acusado del delito.

Interrogado por el Ministerio Público, responde que con anterioridad el juicio ha declarado dos veces, la primera el 2017, la segunda el 2020. La declaración del año 2017, la prestó en la Fiscalía y la fiscal de turno del momento. Esa versión no se parece a la recién entregada al tribunal, en esa oportunidad no reconoció

participación criminal en los hechos que se investigaban, agrega que está absolutamente consciente que su primera declaración fue distinta y no reconoció el delito, porque en ese momento aún dentro de su cabeza y de lo que estaba viviendo, su proceso, seguía consumiendo y a su parecer no esto no iba a terminar de esta forma, no vio el camino y no vio lo que iba a pasar. Fue en ese momento asesorado por otro abogado, y sinceramente no vio lo que venía, lo que podía pasar, y lo que está pasando en estos momentos. Y es por eso que en ese momento, que dio esa declaración.

La segunda declaración fue el 2020, no recuerda la fecha, junio puede ser, no la recuerda con exactitud, se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario, desde el 20 de enero de 2020. Los cargos que se le imputaban en enero de 2020, cuando quedó en prisión preventiva, fraude al fisco, sin diferencia a lo que se le acusa el día de hoy. Fue en esa declaración cuando ya llevaba varios meses privados de libertad, cuando por primera vez mencionó el juego y la droga como elementos asociados al caso, nunca lo había mencionado, porque nunca lo reconoció delante de nadie. El juego si bien existía conocimiento de algunos amigos y su Sra. algo sabía que le gustaba jugar, pero no en los niveles en los que lo estaba haciendo en el último tiempo. Con respecto al consumo de drogas, siempre trató de hacerlo de la forma manera más invisible posible, porque no quería por lo menos que su familia supiera, obviamente amistades sí sabían. Pero con respecto a su familia nadie lo sabía, y por eso no lo quiso reconocer. No lo menciono en la primera declaración, porque nunca vio que podía terminar en esta situación, nunca quiso comentar de las drogas, y según su perspectiva tenía todo controlado, lo que nunca fue.

Cuando quedó en prisión preventiva, su defensa era distinta de la actual, al defensor anterior tampoco se lo mencionó las drogas y el juego, es decir, los antecedentes sobre el particular solo aparecieron con su actual defensor, a quien le contó todo tal cual como pasó.

Conoce los antecedentes que se van a producir durante el juicio, acerca de si hay testimonios sobre el juego y consumo de drogas, con respecto al primero hay un par de personas que podrían ratificar, y respecto de drogas no tiene testigos que presentar, porque las personas más cercanas son amigos entre comillas, personas con las cuales participaba de estas reuniones, pero no van a estar. Es su versión y los informes médicos. Acerca de los informes son psiquiátrico y una de asistente social, y certificado de la atención psicológica que está recibiendo desde que salió del penal el 19 de enero de 2021. El informe psiquiátrico se elaboró estando en el recinto penal, en base a su declaración, se hizo un examen toxicológico, estando en el penal también, no recuerda el mes. Tampoco recuerda cuando tiempo llevaba privado de libertad, cuando se efectuó ese examen, aproximadamente en septiembre u octubre. Mientras estuvo preso, un año, consumió marihuana en bajas dosis, más que nada para mantener la calma y la ansiedad de la situación y abstinencia que se tenía.

En los cinco casos que menciona, don José Sepúlveda, don Héctor Jara, doña Paula Brant, doña Hilda y doña Ana se utilizó documentación falsa. En los tres primeros casos, no intervino en la elaboración de la documentación falsa, de

hecho en la declaración anterior se habló si había forjado o creado esos documentos, no los forjó, pudo haber colocado alguna firma o alguna huella, en los documentos, en la solicitud, debido a que son tantos los papeles que se firman para poder cursar un crédito, que en general, no solamente en este caso, cuando de repente hay un error de tipeo, cuando hay un problema, se suele realizar esta práctica de colocar uno mismo la firma, entendiendo que los clientes ya habían firmado, pero el mayor porcentaje de los documentos fueron sido firmados por los clientes.

En los tres primeros casos, José Sepúlveda, Héctor Jara, Paula Brant, los documentos falsos, era falsa la documentación completa de evaluación, certificados de anotaciones vigentes, declaraciones de renta, formularios de IVA, de patrimonio.

En casos de doña Ana y doña Hilda, la documentación falsa que se utilizó, es de carácter similar a la anterior, es decir, básicamente, declaraciones de IVA, patrimonio, certificados de anotaciones vigentes, declaración de renta. Es decir, documentación de similar característica a la anterior.

Acerca de Alejandro Beltrán, a quien mencionó como partícipe en los primeros tres hechos, en los casos de doña Hilda y doña Ana no tuvo ninguna participación. Respecto de documentación falsa en los casos de ellas, documentación tributaria, certificados de anotaciones de vehículos, entre otros, no sabe quién falsificó esos antecedentes, él recibió la documentación, desconoce quién los falsificó, esos documentos llegaron a la oficina a través de Mario Arzola.

En cuanto al tema de los montos de los créditos. La tramitación estándar de un crédito de pequeña empresa, bien un cliente, se le indica cuál es la documentación que tiene que presentar, posteriormente, la persona trae la documentación, ésta se evalúa, se revisa, se ingresa al sistema y se presenta al comité respectivo para su aprobación. Antes de presentarse la documentación al comité respectivo, el ejecutivo debe revisarla, es decir, ver que la documentación sea real y acreditarla con las entidades correspondientes, tanto Servicio de Impuestos Internos como Registro Civil, y se revisan con los folios de cada documentación, se revisa que sean documentos reales, en la página del SII, con los folios se revisa que sea un documento real o un documento que no corresponde. En relación con el registro civil, se revisa de la misma forma en la página, con el código de verificación en la página del Registro Civil. Además de revisar la documentación, hay que revisar la documentación que se trae, acreditar la verificación y que sean fidedignos, se acredita el patrimonio de la persona.

Explica que una visita domiciliaria es una visita a su lugar de trabajo, su oficina, su local comercial o en su defecto su casa. Corresponde a una visita que realiza el ejecutivo a este cliente nuevo para revisar que la documentación presentada corresponda en términos de dirección, en términos de si es una oficina o un local comercial, sea establecida y que esté trabajando.

En los casos de las cinco personas mencionadas en la acusación y en los alegatos, no realizó verdaderamente esta visita domiciliaria. Agrega que, en general, en la banca, las visitas domiciliarias prácticamente no se realizan, los

ejecutivos en general hacen algunas visitas, pero en un alto porcentaje, la reunión es en el puesto de trabajo, se recibe la documentación, se revisa y se verifica que la documentación sea real, pero no necesariamente se realiza esa visita domiciliaria, y lo puede asegurar tanto de su parte como de los colegas con los que trabajó en los dos bancos. Se deja constancia en los documentos como que se realizó, pero más que nada es la reunión con el cliente y la verificación de los documentos.

En la situación que afecta a don José Sepúlveda Tapia, según su versión, llegó acompañado de Alejandro Beltrán, respecto a lo que el Sr. Sepúlveda, contesta que Alejandro, en conversación con él, previo a llegar donde el declarante, le comunica de forma directa y súper explícita que va a ir a pedir un crédito al banco, a obtener un crédito, el cual va a ser repartido entre tanto José Sepúlveda, don Alejandro y el imputado, él llegó al banco sabiendo que iba a obtener un crédito de esa forma. De acuerdo a sus antecedentes personales, el Sr. Sepúlveda no podía obtener el crédito que le fue otorgado por Banco. Estado en este caso. Pudo desembolsar el Banco Estado el monto equivalente al crédito para una persona que no podía tener acceso a aquel, con la documentación presentada por don Alejandro y por el filtro que el imputado no realizó, siendo ejecutivo. El Sr. Sepúlveda era cliente nuevo. Según la versión del imputado, el Sr. Sepúlveda se hizo de parte del dinero del crédito, cobrando por caja el documento, la diferencia entre el monto del crédito y lo cobrado por caja, se lo quedó el acusado, quien se hizo. Explica que, una parte se dejó en la cuenta de don José Sepúlveda y se retiró a través de un documento, cree que fue cobrado por Alejandro Flores a quien le pidió el favor que hiciera el cobro, es decir, un cheque de la cuenta de don José Sepúlveda, y que es probable que el acusado haya realizado esa firma, no recuerda si esa firma la hizo son José o el deponente, los otros llenos del cheque, como el monto, es probable que él también. El cheque le parece que estaba extendido a nombre de Alejandro Flores, que es una persona conocida con quien trabajó y a quien le pidió el favor, y lo cobró y entregó el dinero.

Respecto de don Héctor Jara, el proceso de recepción de los fondos y reparto, según su versión, una vez que se desembolsó el crédito, no recuerda el monto, algo como \$ 35.000.000 en total el crédito, una parte fue para don Héctor y la otra era para el acusado y esa parte fue dejada en la cuenta de don José Sepúlveda para poder retirarla. Se retiró ese dinero a través de un documento que fue emitido a nombre de René Muñoz, que es su papá y cobrado por Mario Arzola a quien pidió el favor que cobrara ese documento. Cuando habla de documento, se refiere a un cheque de la cuenta de José Sepúlveda, probablemente llenado por el acusado.

En el caso de doña Paula Brant, el monto aproximado fue de 35 o 36 millones, cree 22 o un poco más para Paula y la diferencia era para el acusado, se hizo de la misma forma que la anterior, es decir, un cheque de la cuenta de José Sepúlveda, girado a nombre de René Muñoz, y cobrado por Mario Arzola a quien nuevamente le pidió el favor que cobrara el documento. Probablemente, el llenado de firma y contenido fue realizado por el acusado Muñoz.

Es decir, hasta el momento, se trata de tres cheques de la cuenta corriente del Sr. José Sepúlveda, los tres cheques en blanco de la cuenta de José Sepúlveda, los sacó del talonario se generó a don José Sepúlveda cuando se le abrió la cuenta corriente, probablemente los llenó, pero no recuerda si los documentos se los pasó don José o que el talonario de don José haya quedado en la oficina donde trabajaba el imputado. Los talonarios se entregaban a los clientes, no recuerda si se los pasó o no, si se lo llevó o no, no lo recuerda, pero sí, por lo menos esos tres cheques quedaron para poder cobrarlos.

En cuanto a la Sra. Hilda y doña Ana, el imputado hace una distinción en este caso, en torno al destino de los dineros de los créditos otorgados a ellas. No las conoció. La documentación de la solicitud de crédito y otra documentación asociada a la tramitación bancaria de ambas, se la hizo a través de Mario, quien le llevó la documentación a la oficina. El destino de los dineros, uno fue para la compra de buses, cuatro buses, se otorgaron dos créditos a cada una, por un monto de 88 millones a cada uno. Una parte fue a parar a cuatro buses. El resto del dinero, fue a parar a la cuenta corriente personal del acusado, y a una bipersonal con su Sra. a través de una transferencia de ellas a su cuenta. Cuentas creadas a propósito del otorgamiento de los créditos, ellas no tuvieron intervención en esas transferencias desde sus cuentas. Acerca cómo se realizaron las transferencias sin intervención de ellas, responde que a través que un dispositivo que él tenía en su poder, era un token de transferencia, eran token de ellas que nunca recibieron. Estos créditos fueron otorgados a ellas porque ellos no podían, pero en el hecho eran para Mario y para él, entonces en los hechos, ellas no recibieron esos token de transferencia, sino que él quedó con ellos, y él hizo las transferencias. En relación a los dineros transferidos desde esas cuentas a las propias del imputado y la bipersonal con su Sra., cree que los montos son de alrededor de 15 millones por cada persona, los cuales se utilizaron en implementación de buses, pintura, diseño de la marca, compra de accesorios, también los primeros meses para pagar parte de los sueldos, peajes, petróleo, y alguna parte también probablemente se haya ocupado para un uso personal. De estos 15 millones por casa una estaba en conocimiento de su existencia, Mario y él, Mario conocía el uso y destinos de estos dineros, con él veía la parte de logística, implementación y operativa.

En lo concerniente a los dineros provenientes de los primeros tres créditos, los que le cobró Alejandro Flores y lo que dos veces a petición suya cobró don Mario Arzola, esos cerca de 45 millones de pesos los utilizó en juegos, drogas, para pagar, para fines personales.

Interrogado por la abogada Consejo Defensa del Estado, respondió que ingresó a trabajar al Banco del Estado el 2010, estuvo allí hasta el 2015, siempre como ejecutivo de pequeña empresa; preguntado respecto a los créditos materia de este juicio, señala que aparte de la actividad económica los clientes debían tener capacidad de pago, tener un estándar de venta, una cantidad de UF anuales que calificaran para estar en el segmento pequeña empresa, ventas de unos \$80.000.000 hasta unos \$900.000.000 anuales; una vez que se otorgaban estos créditos, a los clientes se entregaba una cuenta corriente y una línea de crédito

que ascendía en promedio a \$3.000.000; la cuenta corriente se materializaba a través de una chequera; preguntado en qué casos de los créditos otorgados a las personas como Paula Brant, Héctor Cabezas, las señoras Ana e Hilda se entregaron estos productos adicionales, responde que en todos; los créditos fueron otorgados entre diciembre 2014 a abril o mayo de 2015; sí, era ejecutivo del banco cuando se empezaron a pagar estos créditos; no recuerda cuantas cuotas de estos créditos se alcanzaron a pagar; cree que no se dieron meses de gracia para pagarlos; la sociedad Transportes Muñoz y Arzola Ltda. se creó en enero de 2015; a don José Sepúlveda se otorgó un crédito, lo mismo al señor Héctor Jara, a Paula Brant un crédito, y a Hilda y a Ana Henríquez dos; dejó de prestar servicios para el banco en septiembre de 2015 para independizarse, por renuncia voluntaria; la actividad comercial que decide realizar la hace en el norte de Chile; sí, realizó gastos operacionales para esa actividad, como implementación, pintura, diseño, marketing; lamentablemente esas actividades operacionales no se tradujeron en ningún documento o contrato; sí, su intención fue devolver los dineros de los créditos de las señoras Hilda y Ana, pues los otorgaron para él y Mario Arzola; los otros tres también los obtuvieron para ellos, pero eran esos clientes los que iban a cancelar, pero ellos iban a pagar los de las señoras Hilda y Ana.

Interrogado por el querellante Banco Estado, señaló que sí, al ingresar al Banco del Estado el 2010 firmó un contrato de trabajo; se exhibe documento individualizado en el punto 7 letra a) de la prueba de la querellante y señala que ese es el contrato de trabajo que firmó al ingresar al Banco del Estado, aparece firmando por el banco doña Fani Luengo, que es subgerente de pequeña empresa, la que en ese tiempo laboraba en Concepción; sí, en el contrato aparece su firma; no recuerda si firmó otro documento al ingresar al banco.

Examinado por el abogado defensor del acusado Mario Arzola y de las acusadas Hilda Henríquez y Ana Henríquez, acerca de los dos cheques girados a nombre de don René Muñoz de febrero y abril de 2015 por los montos de \$13.330.000 y \$13.360.000 y si Mario Arzola tenía conocimiento del origen de esos fondos, responde que no; no, Mario Arzola no recibió dinero de esos fondos; respecto a si Hilda y Ana Henríquez Cuevas tuvieron conocimiento que al momento de la compra de los buses, aparte o paralelamente se les abrió una cuenta corriente, tarjeta de crédito y una línea de crédito, responde que no les informó, Mario estaba al tanto y no sabe si éste les informó; no, por su parte, Ana e Hilda Henríquez no recibieron dinero de esos créditos, líneas de crédito y tarjeta de crédito no, Ana e Hilda no concurren al banco a hablar con él; doña Ana Henríquez y doña Hilda firmaron el set de productos completo que se otorga para el otorgamiento del crédito, la cuenta corriente y la línea de crédito, es una carpeta grande de papeles, no podría identificarlos uno a uno, es un set considerable de papeles, lo que siempre se firma para la obtención de un crédito.

Entrevistado por su defensa, señaló que sí, primero intervino en el otorgamiento de tres créditos; en cuanto a la forma de operar en el otorgamiento de estos créditos, señala que Alejandro Beltrán se contactó con él, coordinaron todo el tema, trajo a estas personas que tenían algún tipo de relación cercana con éste, las traía a su puesto de trabajo, conversaban el tema, se firmaba la documentación, para luego una vez aprobado el crédito se repartían los fondos

otorgados a cada una de las partes, nunca supo cuánto se repartía Alejandro con los clientes; el mecanismo de cobro era básicamente el mismo en los tres créditos, ellos cobraban por ventanilla los cheques y la parte que le correspondía a él la cobró por medio de la cuenta de José Sepúlveda; geográficamente su puesto de trabajo estaba en el segundo piso, en un área de pequeña empresa, no estaba de paso en la oficina de O'Higgins, es decir el cliente que entraba al banco no pasaba a su oficina, sino que para llegar debía subir una escalera bastante grande y cruzar todo el edificio y llegar a un lugar donde había varios ejecutivos entre los que estaba él; esto lo dice porque la probabilidad de que tres personas que dicen no conocerlo, que tiene relación directa con Alejandro Beltrán, que lleguen a su puesto a pedirle un crédito sin ser del mundo de pequeña empresa, la probabilidad muy cercana a cero; eso es importante considerando que ellos dicen que llegaron a su puesto solo a pedirle un crédito como; sí, dice que respecto a estas tres personas, señor Sepúlveda, señor Jara y señora Brant, el elemento común era el señor Beltrán; respecto a José Sepúlveda, sí, ha dicho que se utilizó la cuenta corriente del señor Sepúlveda; respecto al cobro de los dineros que era para el cliente, cada una de las personas, José Sepúlveda, Héctor Jara y Paula Brant cobraron sus respectivos cheques por ventanilla, las platas fueron depositadas en sus cuentas corrientes y ellos cobraron por caja los documentos; sí, escuchó que la acusación dice que él se quedó con parte del dinero; como cualquier banco, para cobrar cheques por ventanilla, por montos altos, el cobro tiene que ser por la persona que está cobrando el documento, debe ser siempre con su carnet de identidad, debe exhibirlo; sí, eso lo verifica el cajero y el jefe de operaciones de la parte de caja; si una persona al cobrar un cheque girado a su nombre y no exhibe su cédula de identidad, no se le paga; quien recibe el dinero debe firmar el documento de forma cruzada y colocar su Rut atrás; respecto de don José Sepúlveda, sí, Alejandro Beltrán concurre con esta persona y solicita un crédito; sí, para pedir el crédito debe acompañarse cierta documentación; fue Alejandro Beltrán quien le proveyó de la documentación que le indicó en reunión previa; sí, dijo que es probable que él hubiera firmado alguno de estos documentos; no recuerda cuantos documentos son, pero fácilmente un legajo de cuenta corriente, línea crédito y solicitud de crédito puede llegar a las cincuenta hojas; sí, se firma una garantía, están las garantías estatales, se firma un pagaré que respalda al banco y todos los demás documentos que legalmente son necesarios; no, no sabe cómo se distribuyó el dinero entre Beltrán y José Sepúlveda; sí, hay un segundo crédito, respecto a don Héctor Jara, quien era trabajador de Alejandro Beltrán y por lo dicho por éste eran relativamente amigos; por lo que Alejandro le comentó el señor Jara le había pasado una suma considerable de dinero, cree que como \$18.000.000, cree que era para un negocio y después le iba a devolver el dinero, pero no le explicó con detalles, sabe que iban a hacer negocios; sí, Alejandro Beltrán lo pone en contacto con el señor Jara; respecto a Paula Brant, ella es la mamá del hijo de Alejandro Beltrán y pareja en ese tiempo; sí, Alejandro le presenta a la señora Brant y pide el crédito; sí, Alejandro le comentó que Paula Brant le había entregado parte del crédito; para él la investigación empezó el año 2017, en esa época había otra Fiscal; a la pregunta de si Paula Brant, José Sepúlveda y Héctor Jara fueron interrogados por la policía, dice que a ese

momento no; a posterior, supo que sí, no sabe la fecha; sí, supo que el señor Jara estuvo como imputado en esta causa.

Respecto a los créditos otorgados a la señora Hilda y a la señora Ana, estos créditos fueron 100% para él y Mario, porque ellos no podían pedirlos; sí, los créditos se utilizaron para adquirir cuatro buses; sí, dijo que el dinero se usó para mantención de los buses y en parte para uso personal; para implementación y luego mantención de buses, con mantención se refiere a gastos en neumáticos, en un bus se usaban ocho neumáticos, cada tres o cuatro meses podía andar en el orden de \$2.000.000 a \$2.400.000 por bus; el pago de sueldos de los choferes que era de \$600.000 a \$700.000 por cada bus; petróleo, cambios aceite y filtros; todo eso multiplicado por cuatro, porque eran cuatro buses al principio; los primeros cuatro o cinco meses funcionaron bien, como tenían este dinero para darse vuelta; los pagos eran a 90 a 100 días desde la emisión de la factura; el problema fue que esos pagos no llegaban, empezó a pasar 5 o 6 meses en que abonaran alguna parte con lo que solo podían cubrir parte de lo que habían gastado y así se fue formando una bola de nieve de deudas, no podían cubrir los gastos básicos del negocio; sí, los primeros créditos se empezaron a pagar, pasados unos 7 meses ya no pudieron pagar nada, estaban complicados, lo primero que debían pagar era el petróleo y choferes, mas peajes y parte operativa, tan solo en eso se iba el poco dinero que recibía y no daba para pagar los créditos; respecto a gastos personales, se refiere a sus adicciones, a jugar, a perder la plata en cocaína, en alcohol, en juego; también gastos en una casa de la familia, pero lo principal fue en estos vicios; en cuanto a su situación económica, hasta antes de ese tiempo, tenía situación normal, tenía su casa, su vehículo, sus hijos en colegio bien pagado, particular, tenían una vida tranquila, sin sobresaltos; sí, esa era su vida con su señora y sus hijos; sí, tenía una cuenta suya y una bipersonal con su señora, tenían saldos, sin problemas, tenían buenos sueldos, su señora trabajaba en el banco Itaú; no tenía mayores problemas; pero él por sus adicciones empezó a gastar más de lo que ganaba, se empezó a meter en problemas, deudas, que fueron deteriorando la situación económica familiar y con su señora, había deudas que no podía pagar y así empieza a perder poco a poco las cosas que en tenía; su casa la tenía con crédito hipotecario, donde tenían cuenta bipersonal, con su señora los dos firmaron para obtener crédito, como no tenía dinero dejó de pagar el crédito hipotecario; tenía dos opciones, o venderla muy barata o se la remataban; trataron de ganar tiempo, pero tuvo que vender su casa más o menos \$25.000.000 menos del valor, se pagó el crédito y perdió la casa; tenía dos vehículos, uno fue embargado, se lo llevaron desde su casa antes de venderla; la camioneta la vendió con prenda en unos \$3.000.000 y valía casi 15; los dineros que provenían de los buses se depositaban en su cuenta, posteriormente se depositaron en una cuenta empresa que abrieron, ahí se traspasaban de una cuenta a otra; durante los años 2014 y 2015, respecto a depósitos y egresos de la cuenta corriente, sí, había cartolas; durante el proceso en que se obtuvieron estos créditos los montos fueron creciendo considerablemente, ingresaron montos altos, en ese tiempo tenía varias cuentas en varios bancos, se traspasaban de un lado a otro, las utilizaba de forma personal y a medida que pasaban los meses los montos fueron decreciendo porque los fue gastando, por su dependencia al juego y a consumir, su trastorno

de no ver claramente, de no ver el camino y el fin de lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo, se gastaba la plata, teniendo problemas económicos en la casa, llegar a perderlo todo, no lo vio y comenzó a gastarse la plata; a finales de 2016 ya las cuentas comenzaron a bajar considerablemente; respecto a los casinos, en un principio iba a Marina del Sol, también a Los Ángeles, Santiago, Pucón, pero posteriormente iba a casinos clandestinos donde se jugaban altas sumas de dinero, allí había muy malas juntas; respecto a su adicción a la cocaína, se produce porque era tal su dependencia al juego, el trasnoche y la necesidad de responder al otro día en lo laboral y familiar, en una reunión se la dieron a probar, le gustó, se sintió bien, se dio cuenta que al consumirla podía andar como si nada, tranquilo; pero luego le daba la bajada y necesitaba más; estando en el penal, no había cocaína, solo pasta base, y la única forma de controlarse fue el consumo de marihuana; fue al hospital del penal, estaba un poco descontrolado, le prestaron ayuda psicológica y psiquiátrica; una vez que egresa del penal llega a la casa de su suegra con su familia, el tratamiento en que estaba en el penal se cortó abruptamente y al llegar allá necesitó algún tipo de pastillas; en este momento está en tratamiento psicológico, está tomando pastillas, pero se las consiguió porque no ha podido pagar un psiquiatra, no tiene previsión de salud, pero sí está tratándose con una psicóloga; en cuanto a los cuatro buses, es efectivo que no tuvo contacto con doña Hilda y doña Ana, los contactos para la obtención de los documentos para los créditos se hicieron a través de Mario; tuvo claro que la empresa de buses había fracasado, a mediados o fines de 2017, ya no había posibilidades, tenía muchas deudas, estaban en DICOM, ya no les prestaban servicios; en cuanto al pago de los créditos, el compromiso de estos tres primeros clientes siempre fue pagar los créditos, ese fue el acuerdo entre las partes, como no eran sujetos de crédito, del acuerdo fue que debían pagar; estos clientes sabían absolutamente que no calificaban para obtener los créditos y también que los documentos para obtenerlos estaban alterados; respecto al señor Sepúlveda recuerda que sí se pagaron algunas cuotas; lo mismo respecto al señor Jara, sabe que se cancelaron algunas cuotas, lo mismo respecto a la señora Claudia Brant.

SÉPTIMO: Que de conformidad al artículo 326 del Código Procesal Penal el imputado **MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ**, depuso, en los siguientes términos.

En forma libre y espontánea, indicó que antes de conocer a Pablo se desempeñaba en el norte como independiente, tenía una pequeña empresa, una pyme, y arrendaba buses para empresas en traslado de personal. Estuvo un tiempo así, y un amigo en común con Pablo que es Patricio Hermosilla, era ejecutivo en ese tiempo de Cabal, una empresa de buses, un día le menciona que tiene un amigo que tiene camiones, y quería hablar con el deponente para él ir al norte a trabajar con camiones.

Recuerda que un día se reunieron en el mall, los tres, Patricio Hermosilla, Pablo Muñoz y él, empezaron a conversar, le comentaba que efectivamente tenía camiones acá en Concepción y qué posibilidades existían de que el acusado arrendara esos camiones en el norte, quien le contestó que su rubro no es de camiones, sino de transporte de personal, pero que, si sabía de algo, lo podía

ayudar con eso. De ahí siguieron conversando, entablaron conversaciones más seguidas, hicieron lazos de amistad, y un día decidieron hacer una empresa en conjunto para trabajar en el norte. Cuando lo decidieron, él no podía pertenecer a la misma, porque tenía problemas financieros, tenía DICOM, y Pablo le dice que, para su tranquilidad, que hable con alguien de confianza suyo que lo representara en la empresa. Así que ahí, él habló con su tía Ada Henríquez y le explicó, le dijo que quería formar una empresa con Pablo y así trabajar de una manera más ordenada. Su tía accedió, pero fue solamente de papel, o sea, ella prestó su nombre para que él se respaldara de cierta forma que tenía una empresa con Pablo, a través de ella, pero ella jamás intervino en la empresa, nunca se metió en nada. Empezaron a trabajar con Pablo de la misma forma que lo hacía él antes, arrendando buses y subarrendando allá en faena. Después de un tiempo, no se acuerda las fechas puntuales, pero cree que fue a fines de 2014, 2015, más o menos. Y un día, no se acuerda cómo surgió la idea, pero Pablo le dice que, por qué no compraban, porque justo les salió un contrato en Calama y necesitaban cuatro buses, era proyecto bueno, de largo tiempo, rentable, Pablo dijo por qué mejor no compraran los buses en vez de arrendarlos, porque era mejor, para capitalizar. El deponente le preguntó la forma de hacerlo, porque la empresa era nueva y tampoco ellos tenían condiciones financieras como para hacerlo, y ahí Pablo le dijo que él lo podía ver, pero que el Sr. Arzola le consiguiera a alguien que no tuviera DICOM, que no tuviera problemas financieros. No sabía a quién decirle, y se le ocurrió decirle a su mamá. Le dijo a su mamá si lo podía ayudar, le pidió un favor para poder surgir y que les fuera un poco mejor, le contó que se había presentado esa oportunidad, y si lo podía ayudar con eso. Su mamá lo quiso apoyar, pero ella no calificaba para los cuatro buses, entonces necesitaban a otra persona y, en primera instancia, pensaban hacer el crédito con ella solamente, pero no se podía. Después hablaron con otra tía que no quiso, luego con su tía Ana que se negó, su tía no está familiarizada con el tema de los bancos, entonces era como bien temerosa en eso, le dijo que no, y su madre le manifestó que se quedara tranquilo, porque ella iba a hablar con Ana cuando estuviera más calmada para ver si los podía ayudar. Ana accedió, no de muy buenas ganas, le explicaron que era una compra de buses, que los buses tenían trabajo y que no se preocupara porque todo iba a salir bien. Finalmente, accedió y Pablo le pasó la carpeta con documentos para que él la firmara, porque su madre y su tía nunca fueron al banco, jamás se acercaron al banco, él le llevaba documentación a su mamá, y a su tía. Su mamá la firmó, su tía también, pero quedó documentación que Pablo no se la pasó de inmediato, sino en una segunda ronda, y era complicado sacarle la firma a su tía, porque siempre desconfiaba. Entonces, como que él no quiso decirle que faltaban más documentos, porque se iba a negar a firmarlos y ahí, él firmó documentos que le pasó Pablo. Luego de eso, el acusado llevó los documentos a Pablo, se los pasó, y se gestionaron los créditos.

Después desconoce cuáles eran los procesos internos del banco, pero se compraron los buses, llegaron, hubo inconvenientes en la puesta en marcha, los buses llegaron tarde, demoraron el tema de las pinturas, y cuando llegaron a Calama con los buses, tuvieron hartos inconvenientes de puesta en marcha, los buses venían con problemas, a pesar de que eran nuevos, entonces se retrasaron con la entrega y el contrato que tenían inicialmente lo perdieron. Tuvieron que

reinventarse con los buses ya comprados y ahí trabajaron con distintas empresas, algunas no muy conocidas, pero ellos con la desesperación de poderlos trabajar y que se pagaran, los arrendaron igual, y efectivamente, no les pagaron, les quedaron debiendo muchas facturas, le arrendaron un bus a una persona, Héctor Muñoz se llama, que le pasó los chequea a Pablo garantizados de los arriendos, tres o cuatro cheques, cree, por el valor del arriendo anticipado, cosa que nunca los pagó, y además les robó el bus. Al final fueron puras tragedias, estuvieron así por hartó tiempo, y con suerte pudieron pagar un par de cuotas, como cuatro o cinco cuotas de los buses, pero ya después no pudieron más, porque los proveedores no les pagaban, los buses tenían muchos problemas, y al final tuvieron que conseguir plata, él le consiguió plata a su tía Ada para poder seguir funcionando. Y no pudieron nunca trabajar al cien por ciento como lo habían pensado inicialmente cuando se propuso esta idea de sacar los buses.

Eso en relación a los créditos en que aparecen ellos mencionados, porque a las otras tres personas que nombran no las conoce, no participó de eso y el tema de los documentos, de los cheques, también, no tuvo relación con los cheques, Pablo le pidió solamente un favor, que el papá de él había vendido un camión, y que por favor le cobrara el cheque del pago de ese camión, porque como él trabajaba en el banco, era mal visto que él siendo el funcionario lo cobrara, y se lo pasó, lo dejó en la caja, con un bolso, el imputado cobró el documento y después le entregó la plata del documento a Pablo en el estacionamiento.

Interrogado por el fiscal: responde que no conoció a don José Sepúlveda Tapia, ni a Héctor Jara Cabeza ni Paula Brant Parada ni a Alejandro Beltrán.

En cuanto al cobro de documentos, recién relatada al tribunal, realizó cobros de cheques, a requerimiento de Pablo Muñoz en dos oportunidades. Cada una de estas veces, fue, Pablo lo llamó en un día en febrero y le comentó que su papá vendió un camión, y se lo pagaron con un cheque y se lo dejaron a él el cheque por la venta del camión, le dijo que necesitaba cobrarlo, pero que si podía cobrarle el cheque, porque se trabajaba en el banco, entonces sería mal visto que cambiar el documento, entonces le pidió cambiar el documento, que el deponente no encontró extraño, ya que el documento estaba a nombre del papá, no recuerda de quien era el cheque, pero sí que venía a nombre del papá, René Muñoz, así que pasó por la ventanilla, lo firmó, puso su Rut atrás, le pasaron el dinero y se juntó con Pablo en el estacionamiento y se le entregó el dinero.

Solo cuando declaró en Fiscalía, se enteró que se le acusaba por esos documentos, no supo si el padre de Pablo Muñoz realmente vendió un camión.

El segundo cheque, en abril fue de la misma forma, la venta de otro camión, y el mismo método, pasó por ventanilla con un bolsito, entregó el dinero a Pablo y se fue. No se quedó con ninguna parte del dinero por el cobro de esos cheques.

Acerca de los créditos, la idea de obtener el financiamiento para comprar los cuatro buses, señala que no se acuerda bien por las fechas, pero estaba conversando con Pablo y recuerda que Pablo le dijo si ellos compraban los buses, él le preguntó cómo, y ahí surgió la idea, Pablo le dijo que viera a alguien que

tuviera antecedentes financieros y Pablo veía lo otro. Dijo que él podía ayudar con el tema de los créditos, porque además era algo que se hacía constante en el banco, como algo habitual, ayudaban a muchos empresarios del transporte a obtener créditos. Su mamá y su tía no eran empresarias del transporte, ese tema se veía de manera interna en el banco, según lo que conversaron.

En relación a la documentación asociada a la tramitación de créditos y lo señalado por Pablo Muñoz, señala que éste le entregó carpetas con documentos, y él las llevó donde su mamá y era documentación para el crédito, de todo tipo para el crédito, desconoce los nombre, pero eran documentos para los créditos de los buses y no recuerda otras cosas, todo lo que necesario para el crédito, que lo llevó donde su mamá y donde su tía para que firmaran esos documentos, es decir, Pablo le entregó documentos para firmar. En a los documentos asociados a declaraciones de renta, certificados de vehículo, contratos con empresas, dice que supo de las facturas que se hicieron para acreditar renta o acreditar el trabajo en el rubro, se acuerda porque firmó factura de recepción. Esas facturas venían en los documentos que le llevó, los documentos que venían, se los pasó en el Banco Pablo.

Pablo dijo que la documentación para el crédito de su mamá y su tía se los había entregado el acusado Arzola, responde éste que entregó toda la documentación que le entregó Pablo en las carpetas, se acuerda de las facturas de recepción, porque él las firmó, pero el resto de la documentación se veía internamente en el banco. No falsificó él ni su mamá ni su tía algún certificado de anotación de vehículos, tampoco falsificaron algún documento del Servicio de Impuestos Internos. Tampoco algún contrato de servicio de alguna empresa a nombre de su mamá o de su tía, sí firmó facturas.

Los documentos mencionados los veían del banco, él le entregó la documentación, pero la documentación que le señala el fiscal, le decían que se veía internamente en el banco, acerca de quien la veía en el banco, no sabe si era Pablo u otra persona. Pablo le dijo que se veía en el banco, no interactuó con nadie más en el banco además de don Pablo.

En cuanto a la forma en que se iban a obtener los créditos, le contó a su mamá Hilda, que tenía un amigo trabajaba en el banco y eran socios y querían comprar buses, y era la única manera de optar a esos créditos y que Pablo les iba a ayudar porque trabajaban en conjunto. Comenta que eso siempre se sacó, esos créditos y esos buses, porque, primero, tenían trabajo, y segundo, se iban a pagar los créditos, porque estaban el nombre de su mamá y de su tía involucrados.

Su mamá Hilda no supo que para obtener esos créditos tenía que aparecer como empresaria del transporte, en cuanto a la honestidad del procedimiento para obtenerlos, ella no le preguntó mucho, él le dijo que se quedara tranquila, que los iban créditos se iban a pagar, que no iban a tener ningún problemas, y su mamá poco entiende, no le hizo mayores problemas, y solamente después le preguntaba si los créditos se pagaban o no. A su tía Ana le dijo lo mismo que a su mamá, pero al principio su tía se negó, y después su mamá habló con ella para convencerla que sacara los otros dos buses, porque ellos tenían trabajo seguro, y se iban a

pagar, y que no se preocupara de nada. Él no estuvo presente en esa conversación entre ellas.

Una vez obtenidos los créditos, los trámites que hubo hacer para obtener los buses, dice que recuerda que se tuvieron que juntar, su mamá, su tía en la Notaría Carrasco para firmar las prendas y el proceso para llegar eso.

Entre que entrega documentación firmada a Pablo Muñoz y la obtención de créditos, contesta que no tuvieron intervención ni él ni doña Hilda ni doña Ana Henríquez.

En la obtención de los créditos, además de la compra de los buses, hubo una suma adicional, según recuerda cuando se sacaron los créditos Pablo dijo que iba a hacer por cada crédito cinco millones de pesos más para la puesta en marcha de los equipos. Ese dinero existió y se ocupó para la puesta en marcha y el funcionamiento de los primeros meses, pero eran cinco millones de pesos por crédito. No recuerda la suma total que se iba a obtener, pero pone como ejemplo que si el bus costaba setenta y cinco millones y el crédito se iba a hacer por ochenta, y ese remanente era para trabajarlo en la puesta en marcha. Pablo se quedó a cargo de esas platas, y cuando faltaba algo en el norte, él transfería, ese dinero no lo recibieron su tía, su mamá ni él. No sabe cuánto dinero recibió, Pablo efectivamente, de los créditos.

Se enteró de esta investigación criminal personalmente, cree que, en el 2017, que se estaba investigando el caso, y a fines de 2019, porque un amigo le dijo que por la prensa que habían hablado de una estafa en el Banco Estado y que estaba involucrado, y después formalmente en enero o febrero 2020 fue a declarar a la Fiscalía, y esta sería la segunda vez que declara. Declaró en Fiscalía el año pasado, no recuerda. Al momento de declarar en fiscalía no recuerda si ya había sido formalizado. Recuerda que, en su declaración ante Fiscalía, aportó como nuevo antecedente la firma de los documentos del crédito, también le tomaron muestras caligráficas, en fiscalía y tuvo que hacer varias veces su firma y su Rut.

Respecto de la empresa, como miembro de la empresa de la que habló, aparece Ada Henríquez quien se desempeña en empresa automotriz como encargada de administración y finanzas, su tía no estaba muy de acuerdo, porque primero, no conocía a Pablo, no sabía nada, qué iba a pasar, y como tiene buena relación con ella, y para apoyarlo accedió, pero solamente para representarlo en caso de cualquier cosa, en el papel.

La empresa funcionó hasta el 2016, durante el periodo de funcionamiento no vio ninguna utilidad, no pudieron pagar cuotas, lo poco que tenían, se perdió, se tuvo que vender para compensar un poco los gastos que tenían allá, y al final, fue un mal negocio, en realidad. Los dineros de la empresa eran gestionados por Pablo, y el declarante no tenía ninguna injerencia en la parte financiera asociada a la empresa.

Con relación a los dineros asociados a la empresa o los remanentes del crédito, se ocupó harta plata al principio en la empresa, y después el Sr. Arzola se tuvo que conseguir dinero para continuar trabajando, y se consiguió dinero con su

tía Ada y otras personas para poder seguir funcionando. Su situación económica mientras duró esta empresa no era muy buena, porque hicieron el negocio, justamente para poder salir adelante, pero perdieron todo, no fue una buena época.

En cuanto al destino de los buses, un bus se lo robaron, que estaba a nombre de su tía Ana, lo robaron, supone porque fue el último con quien se conversó y se llama Héctor Muñoz, él le pasó unos cheques a Pablo para pagar adelantado esos arriendos, pero los cheques no tenían fondos, nunca se cobraron y se robó un bus. Y los otros buses, se trataron de trabajar en diferentes partes, pero siempre presentaban fallas mecánicas, y finalmente, nunca se pudo hacer nada con los buses. El año pasado se entregaron oficialmente esos tres buses al Banco Estado, se entregaron oficialmente al Banco Estado, y hay un oficio, ignora término legal, de retiro en las ciudades de Calama y en Antofagasta, la entrega la hicieron su tía Ana y su mamá hicieron la entrega de ellos, y el imputado Arzola dio las indicaciones de donde estaban ubicados esos buses.

Examinado por la querellante Consejo de Defensa del Estado, manifestó:

Conoció a Pablo Muñoz por un amigo en común, sabía dónde trabajaba, le dijo que ejecutivo Banco Estado, en micro empresa, en el Banco Estado que está en calle en O'Higgins con Rengo, en Concepción.

Cuando lo conoció y decidieron hacer esta compra de buses, anteriormente, este acusado no había hecho compra de este tipo de buses, siempre subarrendó buses. Respecto de estos buses, y que uno fue robado y se hizo la denuncia en su tiempo, la constancia.

Si supo acerca de la existencia algún juicio iniciado por Banco Estado en contra de su mamá y su tía por no pago de las cuentas, indica que no recuerda, sí le mencionaron que habían llegado unas cobranzas a la casa de su tía, y le preguntó si los buses se estaban pagando o no, las cuotas que no estaban no pagadas, le parece que tomó noticia en 2017, las cobranzas más o menos de esa fecha, su tía y su mamá entregaron los buses en agosto del año pasado. Él siempre supo dónde estaban los buses. Nunca los puso con anterioridad a disposición del banco, tampoco le dijo a su madre y tía donde estaban.

Firmó documentación, para los créditos de su tía y su mamá, del banco de su tía, algunos documentos que tenía que firmar ella y que no firmó y él los firmó, y facturas también. Facturas y documentos de ambos créditos. Del crédito de su mamá no firmó nada, porque ella firmó toda la documentación, las facturas que acreditaban antigüedad de la empresa, que tenían movimiento, para justificar la antigüedad de su mamá, en la empresa, que ella tenía una supuesta empresa de transporte, ya que su mamá no se dedicaba al transporte.

Cuando le comentó a su mamá y su tía, de esta posibilidad de compra de buses, les habló del Pablo, que era un amigo y socio que trabajaba en el banco y qué iba a ayudar a sacar los buses, pero ellas no lo conocieron, pero sabían que, trabajaba en Banco Estado y que era el ejecutivo que las iba a ayudar a sacar los buses.

Entrevistado por el querellante Banco Estado, respondió que de los cuatro buses, uno fue entregado a Héctor Muñoz, quien entregó unos cheques que no tenían fondo y que se llevó el bus, en definitiva, dice que él fue robado. Se presentó constancia ante carabinero, y de hecho en el vigente aparece como robo, y después el deponente fue varias veces a preguntar, pero no tenían señales del bus, Carabineros de Antofagasta o Calama, no recuerda.

Estos buses fueron obtenidos con prenda, se firmó la prenda respecto de estos buses, desconoce si se avisó al banco para hacer efectivo los seguros sobre esta pérdida, entiende que no. El imputado Arzola junto con Pablo Muñoz, estaban a cargo de los buses, no recuerda si se presentó al banco la denuncia del robo. Con respecto a los otros tres, están en manos de Banco Estado, porque se pusieron a disposición del Banco Estado el año pasado, su mamá y su tía hicieron la entrega de los buses, y hay un receptor asignado para el retiro de los buses en las direcciones que ellos dieron, desconoce si a la fecha fueron entregados o no y una orden de retiro de los buses.

Indagado por el defensor César Ramírez, por el imputado Pablo Muñoz Giacaman.

Indicó que conocía a Pablo Muñoz Giacaman, tenían una cierta relación de amistad, dentro de declaración de Pablo Muñoz, éste manifestó que tenía un problema con el juego, las apuestas, él en su calidad de amigo que él desconocía, sus hermanos decían que de repente lo veían en juegos de puzle, y por eso se enteraba Pablo Jugaba, pero directamente Pablo contárselo, nunca se lo mencionó. Acerca de una adición a sustancia, como cocaína, no supo, vio cosas raras, pero el acusado Arzola estaba en el norte, ahora por declaraciones se enteró que la situación era más crítica, pero o lo sabía en ese tiempo. Situaciones raras que se perdía a veces, pero no le dio mayor importancia.

De acuerdo a lo que esbozó, tienen participación él y dos familiares, uno es su madre, la Sra. Hilda, mantiene una buena relación, la comunicación no es tanta, no ha tenido conflictos con ella, lo ayudó en este negocio. Respecto de su tía Ana, si entendiéramos que hay alguien que no tiene nada que ver en esto, sería la Sra. Ana, porque en una oportunidad se negó a firmar documentos y, en definitiva, mediante un engaño se le dijo que las firmas que ella realizó no eran para un crédito, sino que eran para retirar buses. Explica que al principio se le preguntó, se negó, después accedió, supo que lo era estaba firmando era para la compra de los buses.

El imputado declaró después de ser formalizado ante el fiscal Aravena en enero de 2020, antes de ello nunca había declarado y desde el comienzo de esta investigación, en relación a su mamá entiende que sí había sido citada a declarar, no recuerda. Le parece que declaró con la fiscal Aguayo, no recuerda la fecha. No recuerda si declaró con la Policía de Investigaciones, después ella declaró con el fiscal Aravena, dice el defensor, que debe haber dado alguna versión, y como ella no tenía nada que ver más que la firma de los documentos, sí le pidió explicaciones, de hecho, hubo un problema familiar, pero más allá que eso, hubo

diferencias con su mamá, quien estaba afectada y lo único que quería era solucionar todo. No se acuerda qué conversaron sobre el punto.

Fue quien involucró a su madre en esta situación, no obstante, haber declarado al final del procedimiento, con el fiscal Aravena, a ella sí la citaron con anterioridad a declarar no queda claro si con la Policía de Investigaciones, pero sí está claro que con la fiscal Aguayo. Esto generó un problema familiar, acerca de explicaciones que le pidió su madre, no se acuerda bien, pero es la misma explicación que su mamá en su momento, le pidió a Pablo por teléfono, porque los dos participaron en lo mismo, no se acuerda bien, obviamente, le tuvo que pedir disculpas, pero no recuerda bien qué conversaron en esa oportunidad.

Al momento de estos negocios, ellas vivían en sus actuales residencias, en Chiguayante, el imputado conversó con ellas para realizar estos negocios, ninguna de ellas concurrió al Banco Estado a conversar con don Pablo. No recuerda si le pidió explicaciones, y si lo hizo, no se acuerda que conversaron, pero y tienen que haber sido las mismas explicaciones que le pidió a Pablo en el mismo momento. Cuando su madre fue citada a declarar, él no concurrió ya sea a la policía o Fiscalía a dar explicaciones de lo ocurrido, por lo tanto, su única declaración, además de la actual, es la que dio al fiscal Aravena cuando estaba prácticamente todo investigado, dice que cuando lo citaron a declarar por los cheques que él cobró. Antes de ello, no hubo ninguna explicación de su parte.

No sabe que la Sra. Hilda manifestó en más de una oportunidad que ella tenía un conocido apodado Leo, que le habría realizado cierta documentación de IVA para poder formar una empresa.

Es de profesión, ingeniero industrial, pero no lo terminó, trabajó tres años y medio bajo ese cargo, trabajó en el norte, se desempeñó como jefe de maquinaria en el norte, con empresas contratistas, de manera dependiente, y cuando se independizó, él trabajaba en una empresa que nombra como jefe de maquinarias, y se dio la oportunidad de arrendar buses, de hecho, le pidieron que se encargara de arrendar buses, y con el jefe que tenía en ese tiempo se llevaban súper bien, y el acusado le manifestó que podría ser el mismo quien los arrendara, y como no tenía buses, podía arrendarlos, siendo apoyado por éste, y renunció para ello, y él se independizó. Cuando conoció a Pablo, ya trabajaba de manera independiente subarrendando buses.

Por lo tanto, cuando conversó con Pablo y éste le preguntó de camiones, le dijo que camiones no sabía nada, todo lo que sabía era de buses.

En relación a buses, se arrienda o compra un bus, pero el bus necesita mantención, dentro de la cual está la mecánica, por ejemplo, porque los buses son fiscalizados por la seremi de transportes, por choferes por buses, mantenimiento de neumáticos, él estaba a cargo de los buses, y después de iniciar la empresa tuvo problemas económicos. Contesta que cuando arrendaban buses había dos modalidades de arriendo, con conductor o sin conductor, y cuando se arrienda con conductor deben hacerse cargo de todo lo que es, sueldo de conductores, mantenciones y todo eso, cuando uno arrienda el equipo, arrienda el bus solo, uno no se hace cargo de combustible, de conductor, de nada. Señala que en relación a

los buses que compraron a nombre de la Sra. Hilda y la Sra. Ana, cualquier cosa de estos, lo veía Pablo, ya que el deponente llegaba hasta el punto operacional, no administraba dineros, solo gestionaba contratos de arriendo para que los buses trabajaran, los pagos y esos temas llegaban directamente a Pablo. Entonces, dice el defensor, desde concepción, era Pablo Muñoz Giacaman trabajando como ejecutivo del Banco Estado quien celebraba los contratos de trabajo con los choferes, él se encargaba de la compra y pagaba los neumáticos, él pagaba la mantención a los mecánicos, y el rol de este imputado era buscar que hubiera contratos de transporte, él veía el tema de los buses, pero si necesitaba dinero para mantención o para algo, se comunicaba con Pablo. En cuanto a los montos para mantención de los buses, indica que dependía del tipo de mantención, porque eran buses nuevos, pero tenían fallas, pero no muy grandes, fue en el 2015, tampoco recuerda mucho, qué les hicieron exactamente, pero sí se ocupa dinero, pero actualmente no podría dar una cifra exacta de cuanto ocuparon.

Indica que fue él, quien llevó a la Sra. Ana y a la Sra. Hilda a la notaría Ramón García a firmar la prenda, jamás las llevó al banco a entregar o firmar algún papel, fue la única vez que firmaron algo en público, fue en esa notaría y ahí las llevó él. Nunca las llevó al banco. Defensor señala que dice que Sra. Ana, dijo que el imputado le planteó con quien estaba negociando, quien era su socio, respondiendo que cree que nunca se lo dijo. La Sra. Ana le entregó su cédula de identidad, no recuerda bien qué hizo con ella, pero tuvo que habérsela entregado a Pablo, quien se la devolvió después. Y el acusado se la tuvo que haber entregado a ella. Nunca le dijo a ella que la firma era para retirar los buses, señala que no recuerda, le dijo que era para el crédito de los buses, pero para el retiro de los buses fue ella personalmente a la notaría. Para pedir los créditos, sí le dijo que eran para los buses.

Acerca de si sabe si en alguna oportunidad, su madre presionó a la Sra. Ana para que firmara, responde que la trató de convencer por mucho tiempo, porque ésta al principio estaba reacia a firmar. Juan Salas es el esposo de su tía, quien no tuvo conocimiento de estos hechos, al menos no de parte del acusado. Desconoce si él tomó en conocimiento que se estaban generando varias deudas impagas a propósito de los buses que llegaban donde la Sra. Ana.

No sabe, si su madre le mencionó a Ana que conocía a un tipo de nombre Leo que trabajaba haciendo declaraciones de IVA.

Entiende que su sociedad con el Sr. Pablo Muñoz Giacaman era a efectos de comprar en común estos buses, responde que la sociedad se creó para trabajar en el norte, la compra de los buses se dio después, porque se habían ganado un contrato y ahí Pablo mencionó que, en vez de arrendar, podrían comprar buses, y se hizo lo que ya explicó, pero nunca se hizo la empresa para comprar los buses. Los buses eran de él y Muñoz, pero estaban a nombre de Ana e Hilda y antes de ocurriera todo esto, el Sr. Muñoz Giacaman no conocía ni a la Sra. Ana ni a la Sra. Hilda. Dice que a tu tía Ana hasta el día de hoy no la conoce, y a su mamá la conoció, un día porque su mamá necesitaba un medicamento y Pablo le pasó cincuenta mil pesos en el banco, porque el acusado le pidió, ya que él estaba en Calama trabajando y su mamá necesitaba medicamentos

urgentemente, él no tenía plata, y le dijo a Pablo que le pasara plata para el medicamento y ahí Pablo se juntó con ella.

En definitiva, quien llevó los documentos para ser firmados tanto por la Sra. Hilda como por la Sra. Ana fue él, el acusado no leyó tales documentos, ellas tampoco, solo firmaron.

No tuvo ninguna participación en cuanto a elaboración intelectual en las respuestas que dieron Ana e Hilda al momento de ser citadas tanto en Investigaciones como en la Fiscalía, ellas respondieron lo que entendían. Ana no le comentó que había sido citada por fiscalía, tampoco respecto de citación por Policía de Investigaciones.

Los buses se mantuvieron trabajando aproximadamente un año y medio o dos años, tiempo durante el cual no recibió ningún dinero, es decir, trabajó gratis.

Respecto de la puesta en marcha, cuando se sacó el crédito, hubo un adicional como de cinco millones de pesos, que fueron para la puesta en marcha, pero en la formalización de su mamá a la cual él asistió que fue el año pasado, se mencionaron dineros de cuentas corrientes o sobregiros de los cuales no tenía conocimiento.

Fue formalizado en forma individual el 10 de febrero de 2020, y prestó declaración ante el fiscal Aravena el 10 de febrero de 2020, y allí dio la versión que ha expuesto ante este tribunal. De acuerdo solo firmó los documentos que tenía y unas recepciones de facturas. El defensor manifiesta que, de acuerdo a la acusación, si participó en parte del forjamiento de la documentación que se le entregó al Sr. Muñoz Giacaman para tramitar el crédito de doña Hilda y doña Ana a sabiendas a que esos documentos eran falsos, respondiendo que no participó en el llenado y forjamiento de los documentos. Solo participó en las firmas que mencionó anteriormente.

Interrogado por su Defensor, Sr. Patricio Díaz, contesta: Cuando se decidió comprar esos buses, su madre Hilda Henríquez y su tía Ana Henríquez sabían que estos buses se iban a adquirir de forma fraudulenta, estos buses nuevos tuvieron muchos gastos caros de neumáticos o similares, que tuvieron que asumir cuando se inició el equipamiento y puesta en marcha de los buses, para empezar a trabajarlos en el norte, tuvieron gastos de inicio, implementación de los kits mineros y esas cosas, de alrededor dos millones y medio o tres millones por bus.

Cuando se inició no recibió dinero para los buses, solo si necesitaba le decía a Pablo y él transfería para los gastos. En algún momento recibió dinero, se hicieron como un pequeño sueldo, pero no vieron De sociedad Muñoz y Arzola limitada, el representante legal era Pablo, cree que después tuvo cuenta corriente, al principio no, el responsable de esa cuenta corriente era Pablo, el imputado no tuvo poder para representar a esa empresa, no sabe si tía Ada tuvo un poder, pero ella lo representaba en la empresa.

De los créditos que se otorgaron por la adquisición de estos buses, existieron también, cuentas corrientes, líneas de crédito, tarjetas de créditos por cada una de las operaciones de Ana Henríquez e Hilda Henríquez, no tuvo

conocimiento acerca de la concesión de estos productos con anterioridad, por los créditos de los buses, se enteraron en la formalización que se habían traspasado desde la cuenta de su tía y su mamá a la cuenta de Pablo.

Ni este imputado ni doña Ana Henríquez ni doña Hilda Henríquez recibieron algún dinero producto de estas líneas de créditos.

Los buses en el norte, trabajaron efectivamente hasta 2017 puede ser, pero no de manera fluida, siempre con espacios de tiempo detenidos en el año. Actualmente, esos buses están en poder del Banco Estado desde el año pasado. Se hizo una entrega voluntaria de los tres buses a Banco Estado y ahí se mandó al receptor para el retiro de los buses, e indicando las direcciones donde se encontraban.

De los documentos que firmaron su tía Ana Henríquez y su madre Hilda Henríquez, correspondían a documentos del crédito del banco, en realidad no recuerda, los vieron, pero firmaron solamente, eran documentos tipo de un banco. No existe otra documentación que haya entregado al banco a parte de las dos carpetas que señaló, posteriormente.

OCTAVO: Haciendo uso del derecho establecido en el artículo 326 del Código Procesal Penal, la acusada **HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS**, manifestó lo siguiente.

En forma libre y espontánea, expone que empezó un día que su hijo llegó a su casa, diciéndole que tenía un amigo y socio que era Pablo Muñoz Giacaman, su hijo le dijo que él le había propuesto un negocio en el norte, porque su hijo trabajaba en el norte, entonces Pablo le dijo que si podían trabajar juntos y le dijo que él tenía camiones. Su hijo le dijo si lo podía ayudar en este proyecto y le explica situación, ella le preguntó si no era muy riesgoso, y le preguntó si los buses que quería sacar tenían trabajo para poder pagar las cuotas, respondiendo que sí, como estaban pasando por una mala situación económica encontró que era buena la idea, pero sin medir las consecuencias que iba a tener, todos los problemas que han tenido desde ese tiempo hasta ahora. Además, el problema que ocasionó a su hermana y a su familia, ella no dimensionó, solo quiso ayudar a su hijo para que saliera adelante, pero los riesgos que esto implicaba, no los asumió. Solo vio que la idea era buena, nada más.

Mario le dijo que son cuatro buses que le estaban pidiendo en norte, y que ella podía sacar dos solamente y necesitaba otra persona para poder sacar los otros dos. Entonces, consultó a una hermana que le dijo que no, en eso se le vino a la mente Ana, habló con ella y le explicó la situación, respondiendo que ella no se prestaba para eso, porque no tenía cómo declarar renta ni nada. Ella quedó media bajoneada por la respuesta, pero le dijo a su hijo, que su tía había dicho que no, pero que no se preocupara, porque ella que iba a insistir para Ana pueda firmar los documentos. Así fue, y en eso Mario llegó con unas carpetas a la casa, que ella miró, pero no leyó su contenido, si no que firmó donde le indicó su hijo, y firmó como cuatro o cinco hojas, sin leer ninguno de esos documentos. Solo se percató que decía Banco Estado, nada más. Al día siguiente o a los dos días, fue con las carpetas a casa de su hermana Ana y le pidió que firmara las carpetas,

porque el negocio era bueno y los buses se iban a pagar, asegurándole que los buses se iban a pagar solos, porque tienen un buen trabajo en el norte. Ana se volvió a negar, le dijo que no quería tener problemas con su marido ni la familia. Ahí la deponente le insistió, hasta que ella aceptó firmar. Ana siempre le preguntaba si las cuotas se estaban pagando, y ella le decía que sí, porque a su vez, ella le preguntaba a su hijo Mario, y éste le respondía que sí, que no se preocupara. Un día llamó a Pablo Muñoz y le preguntó si las cuotas de los buses se estaban pagando, y éste le respondió que sí, que no se preocupara, y ella volvió a quedar tranquila, porque la idea era sacar esos buses y que se pagaran y tener un patrimonio para poder seguir trabajando, y tener un poco de dinero. Nunca fue la idea de estafar al banco ni nada de eso, porque ellos no estaban acostumbrados a eso, es primera vez que está involucrada en una cosa así, nunca ha tenido problemas con justicia. Dice que es una dueña de casa, una persona enferma, con una diabetes crónica, entonces, lo vio como la solución para los problemas que se venían a futuro, pensando en que todo iba a salir bien, sin embargo, las cosas no funcionaron como pensaron Mario y ella, empezaron dificultades.

Un día llegó su hermana a su casa, y le mostró que habían llegado cobranzas, se asustó le preguntó a Mario, quien le respondió que el negocio no funcionó, aparte se robaron un bus, y ella empezó a desesperarse porque no sabía cómo iban a pagar esas cuotas, que estaban a nombre de Ana y suyo.

Eso fue más o menos todo lo que vivió, que han vivido hasta ahora, y todo lo que firmó, fue en la casa, nunca fue al banco para ningún trámite, solo fue a notaría a firmar las prendas con su hermana Ana, de los cuatro buses, los dos suyos y los dos de ella. Eso es todo lo que sabe, más allá no sabría decir nada más de eso, porque eso es lo que ella vivió en esos momentos.

Respecto a todos los otros papeles, de firma y todo, ella le preguntaba a Mario y éste le decía que lo veía internamente Pablo en el banco, explica que ella no tiene idea de chequera, jamás ha firmado un cheque, jamás ha tenido cuenta corriente, no tiene tarjetas de crédito, no tiene nada, ni siquiera ha ido al banco, por nada, porque no tiene a qué ir. Su hermana Ana, menos, porque ella igual es dueña de casa como ella.

Examinada por el fiscal, respondió que en la época que su hijo Mario le pidió participar en la tramitación de estos créditos para la compra de los buses, ella para ganarse la vida y criar a su hijo, porque es madre soltera, hizo un curso de corte y confección, porque tiene sexto básico nada más, no tiene más estudios, entonces ella hacía trabajos en su casa, cosía, hacía bastas, cosas pequeñas y así se ganaba la vida, trabajó también como niñera cuidando unos niños,

Ella no tenía vinculación con el rubro del transporte, ni documentación tributaria asociada a ese rubro, no era dueña de bus, buses, ni tenía vehículo, nunca lo ha tenido.

Cuando habló con su hermana Ana, ella inicialmente se mostró reticente a participar de esto, y una de sus aprehensiones es que como lo iba a hacer ella si no tenía renta que acreditar. En relación a Hilda, ella tampoco tenía como

acreditar renta, esa duda o preocupación que tuvo su hermana, también la tuvo pensando siempre en que no atrasarse en las cuotas de los buses, y esa era la preocupación constante, que tenía después que Ana firmó, era la preocupación de ambas.

En cuanto a la forma como lo iban a hacer ante el banco para acreditar renta y poder obtener los créditos, responde que cuando Mario le llevó los papeles a casa, para firmarlos, ella le preguntó si era solo eso, respondiendo que sí, que no se preocupara, porque eso lo hacía internamente Pablo Muñoz en el banco, que él debía llevar solo esos papeles, firmados por Hilda y Ana. Acerca de la expresión empleada “eso que hacía Pablo Muñoz internamente en el banco”, señala que el Mario le dijo que Pablo Muñoz iba a hacer esos papeles, pero ella no le dio mayor importancia a qué papeles que se refería, porque ella ni siquiera leyó los papeles que firmó. Nunca supo de qué papeles se trataba, solo los firmó y no supo más de lo que pasó hasta que le dijeron que tenía que ir a Notaría a firmar la prenda. Fiscal indica que se refiere a los documentos o antecedentes para acreditar renta, contestando que nunca firmó ningún papel de renta, de ninguna cosa de esas, tampoco supo de donde salieron esos papeles. Insiste que lo único que firmó fueron los papeles que Mario llevó, que le pasó Pablo para que ellas lo firmaran, y de ahí no tiene de qué otros papeles, porque, Mario le comentó que Pablo se encargaba de eso internamente en el banco.

Ha declarado anteriormente, primero, ante la PDI, no recuerda la fecha; después declaró con la fiscal Aguayo, luego con el mismo fiscal. No ha dado siempre la misma versión respecto de los hechos, cuando declaró con la fiscal Aguayo cambió algunas cosas porque tenía miedo, pero cuando declaró con el fiscal Aravena, dijo todo como pasaron las cosas. Por ejemplo, en su primera declaración, mencionó a una persona llamada Leonel Mela, que ella conocía, pero cuando ella declaró, él había fallecido el 2004, ya había fallecido, pero lo hizo por temor, se acordó de él, tenía miedo y lo que más le preocupaba es que su hermana no pasara por todos los problemas que ella le había provocado. Se sentía culpable por haberle insistido que firmara. En ese lapso mintió. Respecto de Leo Mela, se acordó de él y dijo que él le había dicho que firmara documentos y todo, pero era porque se puso nerviosa, no fue así, y es lo único que no fue verdad en ese momento. Nadie le dio esa idea, o la asesoró, dice que fue ella por nervios y miedo que la invadió, porque nunca había estado involucrada en ningún asunto judicial.

En relación con el crédito, firmó ciertos documentos, y lo demás su hijo le dijo, que lo demás lo veía Pablo internamente en el banco, una vez que los créditos fueron aprobados, solo intervino en la notaría para firmar las prendas para retirar las prendas, que eran los dos buses y los dos buses de Ana, la acompañó su hijo Mario, fueron los tres, es decir, Ana, Mario y ella.

A propósito de estos buses, asociados a los créditos, no recibió dinero, su hermana menos, no tuvieron ningún conocimiento de dinero, ella se enteró de todas las cosas, la chequera, tarjeta, y todo eso en la formalización, y ahí se asustó más todavía, porque ella nunca había tocado un peso. Ni siquiera tenía idea, que tenía chequera y tarjeta electrónica.

En las declaraciones anteriores, especialmente, la de Pablo Muñoz, se habló de que había transferido cierto dinero desde su cuenta corriente a unas cuentas corrientes de don Pablo Muñoz, respondiendo que ella no intervino en nada de eso, ella no tiene idea ni de cómo llenar un cheque, quién y cómo, no tiene idea de nada. Agrega que no podía intervenir en ello, porque no tenía conocimiento que tenía eso.

Interrogada por el Consejo de Defensa del Estado, responde: que cuando habla de la propuesta que le hace su hijo Mario respecto de un socio, se refería a Pablo Muñoz Giacaman, ella no tenía idea de lo que él hacía, Mario le dijo que trabajaba en el banco. Nunca fue al Banco Estado a conversar con Pablo, aclara acerca del dinero para comprar medicamentos, ella llamó a Mario, quien estaba en el norte en este tiempo, y ella necesitaba unos medicamentos, ya que estaba muy enferma, siempre ha estado, porque tiene una diabetes crónica y muy avanzada, incluso tiene poca visión del ojo izquierdo, porque tiene una retinopatía diabética. En ese momento, ella no tenía insulina y llamó a Mario y le pidió que le mandara dinero para comprar la insulina, quien le dijo que no tenía, pero que lo dejara hablar con Pablo para decirle que le pasara dinero a su madre. Luego le devolvió el llamado, manifestándole que Pablo la iba a estar esperando en O'Higgins con Rengo, al frente del Banco Estado de Concepción, y esa fue la primera vez que vio a Pablo Muñoz, quien le pasó cincuenta mil pesos, ella le recibió el dinero, él se fue, y ella se fue a comprar su medicamento.

Cuando su hijo le propuso la realización de estos negocios, le manifestó que Pablo Muñoz iba a conseguir estos créditos, porque él trabajaba en el banco, eso suponía ella, que por eso lo podía conseguir. Cuando su hijo llegó con papeles, ella firmó papeles, que eran para comprar dos buses nuevos.

Acerca de sus declaraciones anteriores, señala que con la fiscal Aguayo se entrevistó una vez. No recuerda haber prestado dos declaraciones ante ella, solamente PDI y con ella y posteriormente con el fiscal presente.

No recuerda que fue lo que declaró en su primera entrevista ante la fiscal.

En relación a los documentos que firmó y lo único que se dio cuenta es que decían Banco Estado.

Cuestionada por el abogado de la querellante Banco Estado, acerca de si sabía que los documentos que firmó eran para solicitar un crédito al Banco del Estado de Chile, responde que, lo único que ella sabía era que eran para comprar dos buses, pero de cantidad de crédito o de dinero, no tuvo la menor idea de eso, era, reitera que firmó para comprar dos buses y todo lo demás lo iba a hacer Pablo Muñoz internamente en el banco. Más allá no sabe, ella solamente firmó esos papeles.

Examinada por el abogado defensor César Ramírez, responde que, a esa fecha, ella era modista, y presentaba problemas de salud relacionados con una diabetes, que mantiene desde hace veintiocho años, es la madre de Mario Arzola. La comunicación con su hijo es buena, en el sentido que nunca discuten, pero más allá de que él le diga cosas personales suyas, él es reservado en ese sentido,

pero lo cotidiano, de preguntarse como están, pero con el resto de sus cosas personales no es muy abierto en ese sentido de contarle sus cosas. En definitiva, ella por su relación de madre e hijo que tenía con Mario Arzola, se involucró en este tema, sí por ayudarlo. Para ello lo que él le comentó era que iban a pedir un crédito para la adquisición de unos buses, a ella solo le autorizaron la adquisición de dos buses, y le pidieron a su hermana Ana que participara, sin saberlo en la adquisición de dos buses, ella se negó desde el principio, pero la deponente insistió y le dijo que le ayudara en eso para poder tener una situación económica más estable, entonces ella comprendió eso y Ana le dijo que si era para salir adelante y si los buses se iban a pagar, le iba a hacer el favor de firmar. Ana ella entendió firmar para retirar los buses, o sea, ella no supo que su firma se utilizó para la adquisición de un crédito. No sabía.

Cuando esto se empezó a investigar, prestó declaración ante funcionario de la PDI, de la Brigada de Delitos Económicos, no recuerda la fecha de esa declaración, y a través del ejercicio de refrescar su memoria, señala que la fecha es el 4 de agosto de 2017. Entiende el defensor, que ella tuvo miedo con esta circunstancia, antes de prestar declaración no se acuerda si conversó con su hijo que la estaban citando a la policía, ya que él estaba en el norte en esos momentos, él se lo pasaba más en el norte que en esta zona, y trabajaba en el norte, hablaban por teléfono más que nada para preguntarle por su salud, nada más allá.

Ella le comentó a su hermana que la habían citado a declarar. lo que declaró es lo que ella quiso contarle a la policía de cómo habían ocurrido los hechos, después prestó declaración en la Fiscalía, primero, en una primera oportunidad, hizo uso de su derecho a guardar silencio porque estaba sin su abogado, respondiendo que no se acuerda de ello, pero sí declaró una vez ante la fiscal Aguayo, no se acuerda de la parte que le señala el defensor sobre acogerse a su derecho a guardar silencio. Declaró una vez en PDI y en la Fiscalía. La fecha del documento que se le exhibió por el Consejo de Defensa del Estado era 12 de diciembre de 2107. Concurrió a declarar el 28 de diciembre de 2017, ante la fiscal María José Aguayo, y en esa declaración entregó un conjunto de antecedentes, reconoce que en esa oportunidad le mintió a la fiscal. Para dar esa declaración en la cual ha reconocido que le mintió a la fiscal, para dar esa declaración, previamente no conversó ni asesoró con nadie, todo lo que dijo, lo fue respondiendo a medida que la fiscal le iba preguntando, no fue que lo hubiera pensado antes.

Tiene hasta sexto año de estudios, por lo tanto, no tenía mayor conocimiento de documentos, por ejemplo, de declaraciones de IVA no sabía, nada de eso.

En la declaración de 28 de diciembre de 2017, le mencionó a la fiscal que tenía un amigo que se llamaba Leo Mela, pero que éste había fallecido el 2004, según ha aclarado ahora, ella señaló que Leo Mela le había dado un dato de una persona que aumentaba la renta para poder hacer un negocio, explicando la declarante que por eso dice que, en ese momento mintió, por el miedo y por no inculpar a su hermana Ana más de lo que ya la había embarrado. Reconoce que

le dijo a la fiscal eso, pero insiste que mintió en esa parte. Dice el defensor, que además le dijo, mintiendo que este sujeto aumentaba la renta falsamente mediante documentos para ser presentados en bancos, respondiendo que es lógico que ella mintiera, porque si él falleció el 2004, y esto pasó el 2017, no podría haberle dicho eso, ella mintió por miedo. El defensor quiere saber si lo dijo, respondiendo que sí lo dijo en esa oportunidad. También señaló a la fiscal, que esta persona Leo le llevó unos papeles para que los firmara, contestando que también le mintió, igualmente le dijo a la fiscal que era trabajadora independiente, explica que ella trabajaba en su casa, haciendo costuras, eso es ser independiente, porque no tenía patrones en ese momento. No se acuerda si le dijo a la fiscal que le iba muy bien y que ganaba de un millón de pesos hacia arriba. Luego de serle exhibida parte de declaración prestada ante la fiscal María José Aguayo de fecha 28 de diciembre de 2017, reconoce que en esa declaración dijo lo anterior, explicando que en ese tiempo fue a hacer la práctica, y cuando salió del curso que hizo, la dejaron trabajando en esa fábrica y, en ese momento, se especializó en una máquina que se llama overlock, entonces, a la overlista le pagaban bien, pero en ese momento ella era independiente, sino que estaba haciendo la práctica, después la dueña de la fábrica la dejó a cargo de esa máquina, y ahí fueron como tres meses que ganó eso, pero como independiente nunca ganó esa plata. No se acuerda si le dijo a la fiscal que era independiente, pero después dejó de trabajar en la fábrica y siguió y después trabajó independiente, no recuerda en qué momento le dijo eso. Nunca ha boleteado por sus servicios, le preguntan si le dijo la fiscal que no lo hacía.

Le declaró a la fiscal que no le habían pasado el dinero para adquirir los buses, y que tenía que pintar los buses y acomodar el diseño porque se iban a ir para el norte, exhibida parte de la misma declaración responde que si está escrito en la declaración a lo mejor fue así, pero no lo recuerda.

Nunca firmó contratos en relación a los buses, según le dijo a la fiscal, le indicó que ese contrato lo firmó su hijo, pide que le aclare de que contrato, no sabe de qué contrato le están hablando, para retirar los buses firmó.

Según señala el defensor, su hermana le había dado a ella un poder para retirar los buses, respondiendo que no lo recuerda, no dijo eso. Se le exhibe la misma declaración para superar contradicción, dándose lectura a lo siguiente: “yo nunca firmé un contrato, mi hijo firmó el contrato por mí de buses que estaban a mi nombre y de mi hermana, yo le di un poder a mi hijo, mi hermana me había dado un poder para que yo retirara los buses y ese poder se lo di a mi hijo. Los dos poderes eran de la Notaría Valenzuela de la Galería Giacaman.” Responde que su hermana no le había dado un poder para retirar los buses, la deponente tampoco le dio un poder a su hijo para retirar los buses. Dice que fueron ella y su hermana, su hijo las acompañó a la Notaría Valenzuela, indica que no firmaron.

Respecto de la mensualidad que recibía con los buses no le señaló a la fiscal Aguayo que con ello alcanzaba a pagar los créditos y le sobraba como un millón de pesos para su hijo.

Exhibida la misma declaración de 28 de diciembre 2017, ante la fiscal María José Aguayo, se da lectura a lo siguiente: “cuál era la mensualidad que recibía por los buses, alcanzaba a pagar los créditos y me sobraba como un millón de pesos para mí, mi hijo me hacía los depósitos de créditos mensuales a mi cuenta del banco estado, no recuerdo la cuenta, no mantengo cuenta en ningún otro banco, esto duró como ocho meses las máquinas en el norte y después se puso malo”, explica que esa declaración la hizo, pero después cuando declaró con el fiscal presente, ahí dijo todo lo que tenía que decir, y eso no era, no se acuerda si lo dijo o no lo dijo, pero si está ahí, es porque a lo mejor lo dijo, pero no fue así que ella recibía dinero. El dinero su hijo Mario se lo mandaba a Pablo Muñoz y éste era el encargado de pagar las cuotas de los buses. Eso se lo dijo al fiscal Aravena a principios del año 2020.

Sin embargo, el defensor acota que también le señaló a la fiscal Aguayo frente a la pregunta que había recibido aproximadamente cincuenta millones de pesos en ocho meses, le habría señalado que ella no vio ese dinero, porque se recibían en su cuenta y eran para pagar los buses. Indica que ella nunca le mencionó esa cantidad a la fiscal Aguayo. El defensor dice que efectivamente eso lo dijo la fiscal Aguayo, que fue quien preguntó, la interrogante del abogado es si en esa oportunidad le respondió que no vio ese dinero porque el mismo se depositaba en su cuenta corriente para pagar los buses. Contesta que, para empezar, ella no tenía la menor idea de que ella tenía cuenta corriente, así que es imposible que haya dicho eso, porque se enteró que tenía cuenta corriente, tarjeta de crédito y todo eso en la audiencia que tuvo después, pero nunca tuvo conocimiento de que ella, al adquirir los buses, le habían pasado chequera, y tarjeta y todo, ella no tenía idea de nada de eso. Reconoce que prestó declaración ante la fiscal Aguayo en la fecha ya señalada, mintió en cosas, porque tenía pánico, miedo, pero después con la declaración que hizo ante el fiscal Aravena declaró toda la verdad, como eran las cosas. Al principio tenía terror de todo esto y por eso mintió, pero después en la segunda declaración con el fiscal presente, ella dijo todo lo que tenía que decir, como fueron las cosas. Insiste que no se acuerda que haya dicho que tenía cuenta, porque nunca ha tenido cuenta, entonces no pudo haber dicho eso.

Exhibición de misma declaración para superar contradicción, reconoce su firma, señala: “recibió entonces aproximadamente 50 millones de pesos en esos 8 meses, sí, pero yo no vi ese dinero, porque lo recibí en mi cuenta y era para pagar los buses”. La deponente insiste que nunca dijo tenía cuenta, porque no sabía que tenía una cuenta, entonces es imposible que ella haya dicho eso. El defensor manifiesta que lo que consignó la fiscal en el acta de declaración, ella no lo dijo, manteniendo su negativa, porque ella no sabía que tenía cuenta corriente, no tenía idea.

No se acuerda si le dijo a la fiscal que el crédito era a cinco años, luego de exhibírsele la misma declaración a efectos de refrescar memoria, responde que realmente no se acuerda cuantos años les dijo, si dijo cinco años, ignorando a cuantos años fue el crédito de los buses. Y si lo dijo, no se acuerda, la declaración señala cinco años.

Acerca si recuerda que señaló que los buses no pudieron seguir trabajando y que su hijo los habría sacado de la mina para llevarlos a Panguipulli a trabajar, contestando que cree que sí, parece que le dijo esa parte, pero no tiene idea si estuvieron en Panguipulli, porque ella nunca conversaba con su hijo respecto a ese tema, solo se preocupaba que los buses se pagaran solamente. Que estuvieron trabajando, que después se fueron al norte, no tiene idea de eso.

Frente a pregunta (por la fiscal) a qué se dedicaba su hijo, señaló que estaba encargado de los buses en Panguipulli en el sur, y habría salido de la mina para ayudarla a ella. Respondiendo que cree que sí dijo eso, no está segura, pero ha pasado tanto tiempo y tanta cosa, que uno se olvida, ante insistencia, dice que sí.

Respecto a si dijo a la fiscal que la cuota era entre tres a cuatro millones entre el crédito de ella y el de su hermana, manifiesta que sí

La fiscal Aguayo le exhibió varios documentos, que la deponente miró y fue le fue informando si eran de su propiedad o no, sí. Le dijo que las facturas que se le exhibieron donde aparecía su nombre giro eran de su propiedad, responde que no se acuerda que le haya preguntado eso.

Antes que eso, se le interroga si dijo que a la fiscal que había hecho iniciación de actividades, pero no recordaba la fecha de aquello. Ante la exhibición de parte de declaración que ella prestó para refrescar memoria, responde que ella no hizo iniciación de actividades, nada de eso, porque no tenía idea de hacer facturas, en resumen, a lo mejor se lo dijo, pero nunca hizo nada de eso. En el párrafo que leyó aparece que le dijo a la fiscal Aguayo que hizo iniciación de actividades, aparece que le dijo a la fiscal Aguayo, y que para poder ampliar los créditos tuvo que ampliar su giro, responde que esa parte no se acuerda si se lo dijo, pero sí aparece en la declaración. Respecto de facturas que le fueron exhibidas, no recuerda haber señalado que sí eran suyas. Se le exhibió la inscripción de los buses que obtuvo por el crédito, respondiendo que no, no se acuerda, no sabe en estos momentos. No recuerda si se le exhibió un contrato de apertura de crédito.

Pregunta si frente a la exhibición de un contrato de apertura de crédito, le dijo a la fiscal, que ese contrato lo había firmado ella, contesta que no recuerda realmente si dijo eso o no. Luego de exhibírsele declaración de diciembre de 2017, para refrescar memoria, responde que sí le dijo a la fiscal que ese contrato lo firmó en su casa.

Acerca de si le dijo a la fiscal que su amigo Leo había fallecido, en noviembre del año 2015, porque supo se había suicidado, responde que él se suicidó, pero fue en el 2004. En esa oportunidad, no se acuerda si le dijo el 2015 o no, reconoce luego de leído la declaración que le dijo eso, explica que esa parte la inventó porque ella estaba con miedo.

Todos los antecedentes que informó la Fiscalía en esa oportunidad, los declaró porque estaba con mucho miedo, habló de declaraciones de renta, de facturas, de contratos de apertura de cuenta, en ese momento, lo imaginó y

declaró, porque estaba muy nerviosa. El defensor acota que más que esclarecer los hechos que se estaban investigando dio antecedentes falsos, respondiendo que no todos fueron falsos, en algún momento dijo lo que había pasado.

Manifestó que nunca fue al banco y nunca fue por Pablo Muñoz, aun cuando le dijo la fiscal que el 2015 había ido al banco, reiterando que por miedo mintió, porque nunca había visto a Pablo Muñoz.

Debe entender, dice el defensor, que antes de prestar ella declaración a la fiscal y, posterior a acogerse a su derecho a guardar silencio para hablar con su abogado, nunca conferenció con un abogado o su hijo respecto de lo que tenía que declarar con la fiscal. Fueron tantas cosas que pasaron, del miedo, su hijo estaba en el norte, ella fue sola, y estaba muy nerviosa, no hallaba que hacer, porque nunca había pasado por esto, nunca había tenido problemas con la justicia, en ese sentido estaba aterrada. Producto del miedo dio todos esos antecedentes falsos en esa oportunidad a la fiscal

Examinada por el defensor Patricio Díaz, expresa que sí sabía que los buses se comprarían fraudulentamente desde un inicio de la operación: Puntualizando que al principio no le contó a su hermana Ana inmediatamente esa parte, pero ante pregunta de ésta de cómo iban a obtener los créditos, le tuvo que decir, que ellas tenían que firmar solamente, y Pablo Muñoz hacía todo el resto. Ana se negó varias veces, y ella para convencerla le pidió ayuda porque estaban mal económicamente y que podía ser una puerta de salida para poder tener ingresos, Anda le dijo que quería tener problemas con Juan, el esposo, respondiendo la deponente que no iba a tener problemas porque los buses tenían trabajo y se iban a pagar solos. Ante lo cual, y siendo así accedió, manifestándole que lo único que deseaba en esos momentos era que las cuotas se pagaran, insistiéndolo ella que teniendo trabajo los buses, se iban a pagar.

No adulteró documentos para comprar los buses, como declaraciones de impuesto a la Renta, IVA, certificados de anotaciones vigentes de vehículo, solamente firmó lo que Mario le llevó a la casa, que eran unos papeles de Banco Estado. Nada más.

No tuvo conocimiento que, al momento de la compra de estos buses, se le abrió además cuenta corriente, línea de crédito y tarjeta de crédito, y sus montos, nunca supo de eso, tomando conocimiento de esa situación cuando fue la audiencia, donde recién se enteró que tenía chequera y tarjeta de crédito, pero no tenía la menor idea de nada de eso. Nunca recibió dinero respecto a servicios de buses o estos créditos otorgados por el banco, ni su hermana Ana.

Respecto de los cuatro buses que compraron su hermana Ana y ella, su hijo se encargaba del trabajo en el norte y él le enviaba el dinero a Pablo para que pagara las cuotas.

Nunca ha tenido cuenta corriente, línea de crédito ni tarjeta de crédito actualmente, solo tiene una tarjeta de la farmacia Salcobrant. En relación a sus estudios tiene sexto año.

Los buses que se adquirieron en su oportunidad con créditos, los entregó voluntariamente al banco y no sabe si el banco los retiró, pero estaban en Calama, y otro cree que estaba en Antofagasta, hizo la entrega en el Primer Juzgado Civil de Concepción, los entregó voluntariamente. No sabe si fueron recepcionados o si fueron retirados, solo sabe que los hizo entrega voluntaria. La fecha de la entrega de buses, fue cuando fue a declarar con el fiscal, el 3 o 4 de febrero del 2020.

Sobre su actividad económica, como explicó hacia trabajos en la casa y estuvo trabajando en una fábrica hace años atrás, y ahora hace trabajos esporádicos en la casa, es dueña de casa solamente en estos momentos.

Se enteró que los buses que adquirieron no se estaban pagando, aproximadamente en 2017, lo supo porque su hermana Ana llegó a la casa y le manifestó que le había llegado cobranza del banco y ahí recién se enteró que los buses no se estaban pagando. Cree que se pagaron como dos o tres cuotas.

NOVENO: Que la enjuiciada **ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS**, renunciando a su derecho a guardar silencio, prestó declaración de la manera siguiente.

En forma libre y espontánea, expone que esto empezó en febrero 2015, su hermana Hilda llega una mañana a su casa con unos documentos del Banco Estado, pidiéndole si podía firmarlos, le dijo que no, la pilló desprevenida; le explica que un tal Pablo Muñoz Giacaman le ofreció comprar cuatro buses a su sobrino Mario para hacerlos trabajar en el norte, pero Mario tenía que buscar dos familiares que no tuvieran DICOM y su hermana Hilda le firmó a Mario los documentos, a la vez pidiéndole a ella que le firmara a la vez documentos por la compra de dos buses, le explica que estaban pasando por un mal momento económico y a la vez quería ayudar a Mario; ella le responde que no pues si ella es dueña de casa como va a comprobar renta, pues en el banco piden muchos documentos; su hermana le dice que no se preocupe, que Pablo Muñoz se encarga internamente dentro del banco, que el proyecto de los buses es bueno y que los buses se pagarían solos; la vio que quería ayudar a su sobrino, la parte económica, porque su hermana estaba muy mal de salud, como era su hermana confió, su relación con ella y su sobrino era muy buena y accedió a firmar; días después fueron a la notaría Ramón García a firmar la prenda por la compra de los dos buses; siempre le preguntaba a Hilda si las cuotas se estaban pagando y ésta siempre decía que sí, que no se preocupe; hace presente que nunca firmó papel ajeno que no fuese del banco Estado; de los dineros, de los trabajos que se obtuvieron de los buses, nunca vio un peso; en cuanto a los dineros que el Banco Estado pasó para comprar los buses nunca tuvo conocimiento ni menos vio un peso, de las tarjetas, de líneas de crédito ni de chequeras, menos tuvo idea, porque ella no es de tarjetas de crédito, siempre prefiere juntar el dinero y no encalillarse, menos ha ido al banco; de esto se entera en su formalización; le pregunta a Hilda y a Mario si sabían de esto, de los dineros, de las chequeras, le dicen que no, que estaban tan asombrados como ella pues también se enteraron en la formalización; también quiere decir que estos problemas empezaron cuando llegaron cobranzas del Banco Estado, recién ahí se entera que las cuotas no se estaban pagando, se asustó y le pregunta a Hilda y a Mario, ellos le dicen que el trabajo en el norte que era tan bueno no había resultado, además que robaron un

bus; de ahí su relación con ellos flaqueó, poco se juntaban como familia; después cuando fueron a declarar y vinieron acá empezaron a hablar un poco; en cuanto a la causa civil presentada por el banco, rit C-4778, hizo entrega en forma voluntaria del bus marca Volare, lo entregó cuando se enteró de todo esto y ahí empezó a preguntar.

Interrogada por el Fiscal, señaló que a la fecha en que doña Hilda le pidió firmar los documentos del Banco Estado era dueña de casa, siempre lo ha sido, no tenía documentos tributarios pues nunca ha trabajado, tampoco era propietaria de algún vehículo (su esposo sí); en el contexto de la petición que le hace Hilda, como nunca ha trabajado no tiene idea de esto, lo único que le preocupó, pues sí sabe que el banco pide muchos papeles, le dijo a Hilda que como iba a acreditar renta e Hilda respondió que Pablo Muñoz Giacaman trabajaba en el banco y se encargaría de todo; con esta expresión ella pensó que como trabajaba en el banco iba a falsificar algo o iba a hacer algo fraudulento porque como tan accesible si ella nunca se ha presentado en el banco y nunca pensó que esto iba a llegar a esta instancia, porque le firmó a Hilda porque si Hilda confiaba en esa persona y a través de Mario, iba a firmar porque la situación no era buena en ese entonces, por ayudarlo; lo que más le preocupaba era que se pagaran las cuotas; sí, sabía que en la tramitación del crédito había operaciones fraudulentas.

Indagada por la querellante Consejo Defensa del Estado, respondió que entre que firmó los papeles que le pasó su hermana Hilda y le llegaron las cobranzas del Banco Estado pasaron como dos meses; puso a disposición los buses después de la formalización, cree que fue en febrero de 2020; entregó los buses en forma voluntaria en el Segundo Juzgado Civil de Concepción; ella dio indicación de donde estaban al receptor; supo dónde estaban los buses porque le preguntó a su sobrino, quien le dio la información.

Interrogada por el abogado del Banco Estado, respondió que los buses los entregó en Calama al receptor judicial, se entregaron físicamente; hizo entrega en forma voluntaria de los buses a propósito de la causa civil rit c-4778, para ser entregados al receptor judicial de Calama; ella preguntó a su sobrino donde estaban los buses; ella es de Concepción, no iba ir para allá; sí, hizo entrega por escrito.

Examinada por el defensor del acusado Muñoz, señala que no, no tuvo relación con los buses; sí, entendió que la firma era para comprar los buses, eso se aclaró cuando fueron a firmar las prendas a la notaría; sí, recuerda que declaró ante la fiscal María José Aguayo; fue a firmar a la notaría el 2015; no recuerda la fecha en que declaró ante la Fiscal; sí, puede ser que declaró el 2017; a la pregunta de si dijo que al principio se negó a firmar, responde que sí, pues no quería tener problemas, ella nunca ha tenido tarjeta, sabe que al banco hay que tenerle respuesta, ella nunca ha trabajado; sí, declaró ante la PDI, antes de venir a fiscalía; a la pregunta de si allí dijo que firmó un poder sin saber su finalidad, responde que cuando le llevaron los documentos firmó no más, eran del banco, nunca habló de poder; se exhibe declaración de fecha 7 de agosto de 2017 ante la PDI y lee "en el año 2015 mi hermana Hilda me pidió ayudarla para comprar unos buses lo cual no me pareció una buena idea puesto que yo no figuraba con renta, sin embargo debido a su insistencia accedí a firmar unos documentos en mi domicilio particular, los cuales no recuerdo con exactitud, confiando en mi

hermana procedí a firmar estos documentos, ni siquiera sabía su procedencia, incluso le firmé poder sin saber su finalidad”; señala que no recuerda, aunque haya estado escrito allí; a la pregunta de si recuerda que había firmado un poder sin saber su finalidad, responde que en el momento firmó los documentos que le pidió; cree que ante la PDI sí dijo que firmó un poder; sí, firmó para la compra de buses; sí, sabía que era para comprar fraudulentamente buses; sí, entregó bus el 2020, fueron adquiridos el 2015; sí, Mario Arzola le dijo dónde estaban los buses; sí, Mario Arzola estuvo a cargo de los buses; no, ella no viajó a Calama; a su casa Hilda le llevó los papeles para firmar; fue una sola vez a la notaria, con Hilda y Mario; no recuerda que Hilda le haya hablado de un tal Leo; se le exhibe la declaración prestada ante la Fiscalía el 10 de noviembre de 2017, y señala que ahora recuerda que su hermana le habló de Leo, que en su tiempo trabajaba con su hermana; no recuerda si dijo a la fiscal que su hermana dijo que si se enojaba le vendía los buses, se le exhibe la misma declaración y responde que está escrito, pero ella como iba a decir eso si los buses no eran suyos; no recuerda haber dicho eso; no, no tuvo contacto con Pablo Muñoz Giacaman; no, nunca fue al Banco Estado; la fiscal Aguayo le dijo que vaya al banco y que vea cómo está su situación, ahí fue y la persona que lo atendió le preguntó que necesitaba, le dijo que tenía problemas, la persona vio su nombre y ahí recién se entera de la inmensa cantidad de plata que se había pedido a su nombre; ahí la mandaron a hablar con otra persona, al cuarto piso, ahí la jefe parece estaba sorprendida, ahí saltó otra señora y dijo que ella nunca fue a pedir crédito; ella preguntó cómo pasaba eso si tenían cámaras y le respondieron que ellas no veían eso; esto lo dice ahora y no al Fiscal, porque ahora se acordó a propósito de lo que el abogado le dice.

Interrogada por su defensor, responde que sí sabía que los buses que compraron se habían se habían hecho fraudulentamente; no, nunca recibió dineros por algún tipo de administración o contrato de buses; se enteró que le habían abierto cuenta corriente, líneas de crédito y tarjeta de crédito en su formalización; no, no tiene los buses en su poder; uno lo robaron y el otro se entregó en forma voluntaria al Segundo Juzgado Civil de Concepción; para la compra de los buses firmó documentos solo del Banco del Estado; no, no tuvo participación en la confección de otros documentos; no, no tuvo contacto personal con Pablo Muñoz; no recibió dinero alguno de las líneas o tarjetas de crédito, no tuvo idea de eso; es dueña de casa, tiene segundo medio; nunca había tenido cuenta corriente o tarjeta de crédito; nunca ha comprado bienes inmuebles ni tiene bienes a su nombre.

DÉCIMO: Prueba del Ministerio Público, y querellantes.

a) Testimonial:

- 1.- Claudio Alfredo Marquínez Fuentes, funcionario investigador de Contraloría del Banco Estado.
- 2.- Héctor Fernando Jara Cabeza, querellante.

- 3.- Sylvia Viviana Pérez Pedreros, Jefa de plataforma pequeña empresa, Banco del Estado de Chile, sucursal O'Higgins, Concepción.
- 4.- Natalia Stella Tighe Fuentes, ejecutiva pequeña empresa, Banco del Estado de Chile, sucursal O'Higgins, Concepción.
- 5.- Carola Antonieta García Concha, Jefa de riesgo zonal, Banco del Estado de Chile, sucursal O'Higgins, Concepción.
- 6.- Manuel Jesús Muñoz Silva, funcionario Banco Estado, sucursal Talcahuano.
- 7.- Leisla Soraya Lara Henríquez, funcionaria departamento de contabilidad, del Banco del Estado de Chile, sucursal O'Higgins, Concepción.
- 8.- José Iván Sepúlveda Tapia, solicitante de crédito nº1.
- 9.- Alejandro Andrés Flores Loyola.
- 10.- Ada Verónica Henríquez Cuevas, socia de Sociedad Arzola y Muñoz limitada.
- 11.- Claudio Cabeza Muñoz, funcionario de la PDI que investigó querella presentada por don Héctor Jara Cabeza.
- 12.- Pilar Montserrat Retamal Retamal, funcionaria de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile.
- 13.- Nicol Carolina Lara Henríquez, funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile.
- 14.- Mariela del Pilar Sepúlveda Roa, funcionaria de la PDI.
- 15.- Paula Camila Brant Parada, solicitante del crédito nº3.
- 16.- Eladio del Carmen Alvial Ramis, funcionario de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile.
- 17.- Gladys Lea Lagos Reyes, funcionaria de la PDI.

b) Pericial.

- 1.- Elizabeth Yamilett Pacheco Coke, perito documental del Laboratorio de Criminalística del Policía de Investigaciones.
- 2.- Poul Reimond Yáñez Zambrano, perito documental del Laboratorio de Criminalística de la PDI.
- 3.- Ximena Paola Hermosilla Díaz, perito huella gráfica y dactiloscópica del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

c) Documental.

- 1.- para otros efectos.
- 2.- Certificado de Nacimiento de Pablo Muñoz Giacaman
- 3.- Certificado de Matrimonio de Pablo Muñoz Giacaman
- 4.- Certificado de Nacimiento de Mario Arzola Henríquez
- 5.- Certificado de Nacimiento de Hilda Henríquez Cuevas
- 6.- Certificado de Nacimiento de Ana Henríquez Cuevas
- 7.- Certificado de Nacimiento de Ada Henríquez Cuevas

8.- Oficio de 27 de Julio de 2016, suscrito por Mónica Merino Grez, Subgerente regional de Banco Estado y que contiene:

a. Copia de contrato de trabajo de PABLO MUÑOZ GIACAMAN con Banco Estado, actualizaciones de contrato (2) y anexo (1).

b. Descripción de cargo de Ejecutivo de Negocios de Pequeña Empresa "A" de Banco Estado.

9.- Oficio de 24 de Julio de 2018, emitido por Mónica Merino Grez, Subgerente Regional de Banco Estado, sobre otorgamiento y estado de situación de créditos, con anexos de detalle para los clientes HÉCTOR FERNANDO JARA CABEZAS, ANA HENRIQUEZ CUEVAS, HILDA HENRIQUEZ CUEVAS, JOSÉ IVÁN SEPÚLVEDA TAPIA y PAULA CAMILA BRANT PARADA,

10.- Oficio 056, emitido por Eliana Muñoz Zoffol, Gerente Legal (s) de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y sus anexos Oficio 29453 de 12 de enero de 2017, suscrito por Mauricio Escobar Cabeza y tabla anexa con detalle de beneficiarios consultados.

11.- Oficio N°3 de 06 enero de 2017, emitido por Jorge Lara Arriagada, Director Regional del Servicio de Impuestos Internos.

12.- Oficio de 26 enero de 2017, suscrito por Yessica Avendaño Roa, Jefe de Operaciones, Banco Santander Chile, que adjunta información sobre Situación del Cliente "Servicio de Transportes Muñoz y Arzola Limitada", incluida Consulta de Poderes y Cartolas de la Cuenta Corriente N° 69371744 desde junio 2015 a diciembre de 2016.

13.- Oficio de 13 febrero de 2017, emitido por Agente del Banco Estado de Chile que informa sobre "Servicio de Transportes Muñoz y Arzola Limitada" y adjunta Cartola de Chequera electrónica N°53371568235.

14.- Informe Empresarial Equifax de fecha 08 de enero de 2017 de "Servicio de Transportes Muñoz y Arzola Limitada" y malla societaria y directorio de vehículos de la misma.

15.- renunciado.

16.- Informe de Consulta Tributaria Integrada del Servicio de Impuestos Internos para HILDA MAGDALENA HENRIQUEZ CUEVAS, de 17 de enero de 2019, que contiene:

a. Formulario 22 (Declaración Anual de Renta), 2014.

b. Últimos documentos autorizados del Contribuyente.

c. Informe Vectorial Período Tributario 2014

17.- Informe de Consulta Tributaria Integrada del Servicio de Impuestos Internos para HECTOR FERNANDO JARA CABEZA, de 17 de enero de 2019, que contiene:

a. Informe sobre Formulario 22 (Declaración Anual de Renta), 2014.

b. Informe sobre Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos (Formulario 29) de los períodos 12-2012, 01-2013, 02-2013, 03-2013.

18.- Informe de Consulta Tributaria Integrada del Servicio de Impuestos Internos para JOSE IVAN SEPULVEDA TAPIA, de 17 de enero de 2019, que contiene:

a. Informe sobre Formulario 22 (Declaración Anual de Renta), 2014.

19.- Informe de Consulta Tributaria Integrada del Servicio de Impuestos Internos para PAULA CAMILA BRANT PARADA, de 17 de enero de 2019, que contiene:

a. Formulario 22 (Declaración Anual de Renta), 2014.

20.- Informe de Consulta Tributaria Integrada del Servicio de Impuestos Internos para ANA GLADYS HENRIQUEZ CUEVAS, que contiene:

a. Informe sobre Formulario 22 (Declaración Anual de Renta), 2014.

21.- Oficio Ordinario N°1804 de 17 de abril de 2019, de Guillermo Cubillos Espinosa, Jefe (S) del Subdepartamento de Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación y sus anexos correspondientes a Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977, LR-8989, DCHC.55, DBKB.29, XS.4977, LT-9049, DBPP.34, YB.4544, XV.5873, DPPP.36 y CJLJ.42,

22.- Oficio de 31 de enero de 2019, emitido por Nelson Hermosilla Toloza, Presidente de Transporte de Pasajeros Los Alces S.A. y copia de Certificado N°003/2014.

23.- Oficio de 20 de febrero de 2019, emitido por María Paz Cerda Herreros, en representación de AES Gener S.A.

24.- Oficio de 01 de agosto de 2019, emitido por el Agente del Banco Estado de Chile, Concepción que adjunta cartolas de cuentas corrientes de JOSE IVAN SEPULVEDA TAPIA, HECTOR FERNANDO JARA CABEZA, PAULA CAMILA BRANT PARADA.

25.- Oficio N°31449 de 12 de agosto de 2019, emitido por Alberto Vergara Arteaga, Gerente Legal Litigios de Scotiabank Chile y anexo correspondiente a cartola de cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) de Francisca Andrea Vásquez Aguirre y Pablo Andrés Muñoz Giacaman.

26.- Oficio de fecha 02 de septiembre de 2019, remitido por Rodolfo Cerliani Vásquez, en representación de Banco Estado de Chile, Concepción que da cumplimiento a orden judicial y su anexo correspondiente a cartolas bancarias de:

a. HÉCTOR FERNANDO JARA CABEZAS, N° 53300142482.

b. ANA HENRIQUEZ CUEVAS, N°53300179882.

c. HILDA HENRIQUEZ CUEVAS, N°53300179769.

d. JOSÉ IVÁN SEPÚLVEDA TAPIA, Cuenta N°53300159849.

e. PAULA CAMILA BRANT PARADA, Cuenta N°53300179751.

27.- Certificados de inscripción y anotaciones vigentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas HDLW.79, HDLW.80, HFSS.42 y HFSS.43.

28.- Oficio de 16 de septiembre de 2020, emitido por Sergio Venegas Gallegos, Agente Banco Estado de Chile, Concepción.

29.- Oficio de 24 de septiembre de 2020, emitido por Sergio Venegas Gallegos, Agente Banco Estado de Chile, Concepción.

30.- Informe N°057/15 sobre investigación administrativa, suscrito por Marcelo Rodríguez Cornejo, Jefe de Unidad de Investigaciones y Alberto Cárdenas Fernández, Jefe Departamento de Auditoría, Sucursales e Investigaciones.

d) Otros Medios de Prueba:

1.- Ocho (08) Carpetas Blancas de Banco Estado, con código de barras y anotación de individualización manuscrita con el siguiente detalle:

i. Carpeta correspondiente a ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene:

a) Original del Contrato de Apertura de Crédito por S 88.290.339, firmado el

27 abril 2015.

b) Declaración de Consentimiento Recaudación y Pago de Comisión Fogain Corfo, de fecha 27 abril 2015

c) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrito el 27 Abril 2015.

d) Papeleta de Cierre de Negocio de fecha 29.04.2019 firmada en original por

Pablo Muñoz Giacaman y por la Jefa de Plataforma.

e) 4 correos electrónicos respecto a la operación

f) Formulario para Operar Sin Seguro Desgravamen firmado por Pablo Muñoz Giacaman.

ii. Carpeta correspondiente a ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene:

a) Original del Contrato de Apertura de Crédito por S 88.221.883, firmado el 22 abril 2015.

b) Mandato de Cargo de Primas, firmado el 23.04.2015

c) Propuesta de Seguro, firmado el 23.04.2015

d) Declaración Personal de Salud firmada el 23.04.2015 (3 hojas)

e) Declaración de Consentimiento Recaudación y Pago de Comisión Fogain Corfo, de 22 abril 2015

f) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrito el 23 abril 2015 (2 hojas).

g) Papeleta de Cierre de Negocio de fecha 29.04.2015 firmada en original por Pablo Muñoz Giacaman y por la Jefa de Plataforma.

h) 4 correos electrónicos respecto a la operación.

iii. Carpeta correspondiente a PAULA CAMILA BRANT PARADA que contiene:

a) Solicitud de Productos para Pequeña Empresa, compuesto de 2 hojas, donde solicita un crédito por \$37.135.462 y otro de \$2.000.000, firmado el 30 de marzo del año 2015.

b) Papeleta de Cierre de Negocios firmada el 31.03.2015 por el ejecutivo Pablo Muñoz Giacaman 1 por la Jefe de Plataforma por la suma de \$37.135.462.

c) Un correo electrónico compuesto de 2 hojas.

d) Contrato de Apertura de Crédito compuesto de dos hojas, firmada y con huella, el 30 marzo 2015 por la suma de \$37.135.462.

e) Propuesta de Seguro compuesta de 2 hojas, firmada el 27.03.2015.

f) Mandato de Cargo de Primas, suscrito y junto a huella digital, el 27 marzo de 2015.

iv. Carpeta correspondiente a HECTOR FERNANDO JARA CABEZAS que contiene:

a) Contrato Apertura Crédito por \$35.075.540.- en 3 hojas, suscrito el 16 febrero 2015, con firma y huella.

b) Propuesta de Seguro, en 2 hojas, firmada el 16 febrero 2015.

c) Mandato De Cargo de Primas, suscrito el 16.02.2015

d) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas el 4 de febrero del año 2015 por \$35.075.540 y por \$54.000.000.

e) Papeleta de Cierre de Negocios suscrita el 18 febrero 2015 por Pablo Muñoz Giacaman y por el Jefe de Plataforma de Talcahuano, por la suma de \$35.075.540.

v. Carpeta correspondiente a HECTOR FERNANDO JARA CABEZAS que contiene:

- a) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas el 4 de febrero del 2015 por \$35.075.540 y por \$54.000.000.
- b) Contrato de Prestación de Servicios 24 Horas, 5 hojas, firmado, sin fecha.
- c) Registro Apertura Cuenta Corriente suscrito el 4 febrero 2015
- d) Anexo de Aceptación de Productos, 5 hojas, suscrito el 4 febrero 2015
- e) Contrato de Cuenta Corriente Bancaria, 8 hojas, suscrito el 4 febrero 2015.
- f) Hoja Resumen del Contrato, 3 hojas, suscrito el 4 febrero 2015.
- g) Contrato de Afiliación al Sistema y Uso de Tarjeta de Débitos, suscrito en 5 hojas el 4 febrero 2015.
- h) Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante.
- i) Resumen Boletín Concursal del solicitante, en 2 hojas, de fecha 12 febrero 2015.
- j) Informe Visita pequeña Empresa de fecha 4 febrero 2015.
- k) Declaración de Impuesto anual a la renta del año tributario 2014 del interesado.

vi. Carpeta correspondiente a JOSE IVAN SEPULVEDA TAPIA que contiene:

- a) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas el 11 de diciembre 2014 por \$35.672.852 y por \$3.000.000.
- b) Contrato de Apertura de Crédito compuesto de 4 hojas, firmada y con huella el 11 diciembre 2014 por la suma de \$35.672.852.
- c) Mandato De Cargo de Primas, suscrito por el solicitante el 11.12.2014.
- d) Propuesta de Seguro Desgravamen incompleta, solo 1 hoja, sin firma de fecha 11 diciembre 2014.
- e) Papeleta de Cierre de Negocios Firmada por Pablo Muñoz G. y la Jefe de Plataforma del banco el 15 diciembre 2015.
- f) Hoja resumen de fecha 11 diciembre 2014 compuesta por 5 hojas.
- g) Comprobante de Entrega de Documentación, 1 hoja, firmada y con huella del 11 diciembre 2014.
- h) Anexo de Contratación de Productos y Servicios de Microempresa/ Pequeña Empresa de fecha 11 diciembre 2014, firmada en la primera hoja (compuesta de 6 hojas).

vii. Carpeta correspondiente a HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene:

- a) Contrato Apertura Crédito por S 88.290.129 en 3 hojas, suscrito el 21 abril 2015, con firma y huella.
- b) Propuesta de Seguro Desgravamen incompleta, 2 hojas, con firma y huella de fecha 21 abril 2015
- c) Mandato De Cargo de Primas, suscrito el 21 Abril 2015.
- d) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas, con firma y huella, de fecha 21 abril 2015 por \$7.000.000, por \$88.290.129 y por \$2.000.000.
- e) Papeleta de Cierre de Negocios Firmada por Pablo Muñoz G. y la Jefe de Plataforma del banco el 22 abril 2015 por la suma de S 88.290.129.

f) Hoja denominada "Consulta Consolidada de Saldo de Coberturas"
viii. Carpeta a nombre de HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene:

a) Contrato Apertura Crédito por \$88.290.339 en 3 hojas, suscrito el 27 Abril 2015, con firma y huella.

b) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas, con firma y huella de fecha 27 abril 2015 por \$88.290.339.

c) Papeleta de Cierre de Negocios Firmada por Pablo Muñoz G. y la Jefe de Plataforma del banco el 28 abril 2015 por la suma de \$88.290.339

d) Formulario para Operar Sin Seguro de Desgravamen Jefe Plataforma del Banco.

e) 4 hojas de correos de fechas 27 y 28 abril 2015.

f) Hoja denominada "Consulta Consolidada de Saldo de Coberturas".

2.- Siete (07) Cheques Originales correspondientes a Cheques Serie 0823275 y 0317350 de la cuenta corriente N°53300179751; Cheque Serie 2741731 de la cuenta corriente N° 53300142482 y Cheques Serie 2842736, 2842738, 2842740 y 2842741 de la cuenta corriente N°53300159849.

3.- Muestras caligráficas de René Muñoz Mera, Mario Arzola Henríquez, Hilda Henríquez Cuevas, Ana Henríquez Cuevas, Paula Camila Brant Parada y José Iván Sepúlveda Tapia.

4.- Un disco CD-R Marca Imation, con la leyenda "Grabación Pablo Muñoz BCO ESTADO", con un archivo de audio, NUE 4321184

5.- Una Carpeta contenedora de Investigación Sumaria de Banco Estado, Fojas 1 a 247, junto al oficio remitido suscrito por Pablo Farías Morales, Jefe de Investigaciones de Contraloría de Banco Estado de 18 de junio de 2019.

6.- 06 Carpetas azules, marca Rhein y su escrito remitido de los antecedentes de 03 de mayo de 2016, que contienen:

a. renunciado.

b. Carpeta asociada a JOSÉ IVÁN SEPÚLVEDA TAPIA, con copia de los siguientes documentos:

- Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos.

- Antecedentes de Apertura de Cuenta Corriente y Contratos asociados (solicitud, anexos, incluido informe de visita) Solicitud de créditos y documentos asociados, incluido:

i. Certificados de inscripción y anotaciones vigentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LR-8989-7, de 14 y 10 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: José Iván Sepúlveda Tapia.

ii. Cartola de cuenta corriente N° 0-000-6197476-8 a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia, con movimientos entre 29 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014.

iii. Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de José Iván Sepúlveda Tapia.

iv. Certificado N°003/2014 de la empresa "Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.", suscrito por Nelson Hermosilla Toloza en favor de José Sepúlveda Tapia.

c. carpeta asociada a HÉCTOR FERNANDO JARA CABEZAS, con copia de los siguientes documentos:

- Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos.

- Copia de Comprobante de traspasos (2).

- Antecedentes de Apertura de Cuenta Corriente y Contratos asociados (incluido informe de visita)

- Solicitud de créditos y documentos asociados, incluido:

- i. Declaraciones anuales de Renta años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y pago Simultaneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de Héctor Fernando Jara Cabezas.

- ii. Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DCHC.55-0 y DBKB.29-6, de 28 de enero de 2015, con indicación de PROPIETARIO: Héctor Fernando Jara Cabezas.

- iii. Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 000061974523, a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015.

d. Carpeta asociada a PAULA BRANT PARADA con copia de los siguientes documentos:

- Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos.

- Antecedentes de Productos para pequeña empresa y Contratos asociados (incluido informe de visita)

- Solicitud de créditos y documentos asociados, incluido:

- i. Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Paula Camila Brant Parada.

- ii. Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LT-9049-5, de 14 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: Paula Camila Brant Parada.

- iii. Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 0000-61-98-412-7 a nombre de Paula Camila Brant Parada, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015.

e. Carpeta asociada a HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS, con copia de los siguientes documentos:

- Información sobre estado de crédito, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos.

- Antecedentes de Productos para pequeña empresa y Contratos asociados (incluido informe de visita y presentaciones de crédito)

- Solicitud de crédito y documentos asociados, incluido:

- i. Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DBPP.34-6, YB.4544-1 y XV.5873-3, respectivamente de 26 de marzo, 13 de abril y 19 de marzo del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Hilda Magdalena Henríquez Cuevas.

- ii. Copia de contrato entre Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses.

iii. 06 copias de facturas de ventas y servicios (N°18, 19, 20, 23, 24 y 25) de "Hilda Magdalena Henríquez Cuevas" "Servicio de Transporte de Personal, Servicios Especiales pagadas por AES GENER.

f. Carpeta asociada a ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS, con copia de los siguientes documentos:

- Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos.

- Antecedentes de Productos para pequeña empresa y Contratos asociados (incluido informe de visita y presentaciones de crédito)

- Solicitud de crédito y documentos asociados, incluido:

- i. Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas.

- ii. Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42-K, respectivamente de 26 de marzo y 22 de abril del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Ana Gladys Henríquez Cuevas.

- iii. Copia de contrato entre Ana Gladys Henríquez Cuevas y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses.

UNDÉCIMO: Prueba de la defensa de Pablo Muñoz Giacaman:

a.- Testigo.

1.- Claudio Cabeza Muñoz, testigo compartido con la Fiscalía.-

b.- PERICIAL:

1- Pedro Cament Hormazábal, Perito psiquiatra, en relación a pericia psiquiátrica de fecha 27 de mayo de 2020, realizada al imputado.

2- Shirley Villouta Bustamante, perito bioquímico forense, en relación a pericia informe análisis toxicológico n° 022-20, de fecha 30 de noviembre de 2020, realizado al imputado.

c.- Prueba documental:

1.- Copia simple de querrela por delito de estafa interpuesta por don Héctor Jara Cabeza, con fecha 22 de octubre de 2015, y su proveído del Juzgado de Garantía de Concepción, bajo el RIT 11682-2015;

2.- Copia de estampe y certificación del receptor Felipe Mosqueira Troncoso, de 21 de agosto de 2016, que da cuenta de la traba de embargo de la Camioneta marca Dodge, Modelo N RAM 1500, ppu DHYH-17-5.

3.- Copia Simple Certificado de Concentración de Notas de la UDD (universidad del desarrollo) correspondiente al alumno PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, de la carrera de Ingeniería Comercial de fecha 04 de Mayo de 2020. (5 hojas)

DUODÉCIMO: Pruebas de los acusados Mario Arzola Henríquez, Hilda Henríquez Cuevas y Ana Henríquez Cuevas.

a.- Documental.

- 1.- Copia de Patrocinio y Poder presentado en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción.
- 2.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2020 con firma electrónica avanzada, sobre patrocinio y poder en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción.
- 3.- Escrito de entrega voluntaria de bienes, causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción.
- 4.- Resolución de fecha 04 de marzo de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción, sobre escrito de entrega de bienes.
- 5.- Escrito de retiro de buses y designa martillero presentado por el señor, Eugenio Hernández Aliste, abogado de Banco Estado de Chile, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción.
- 6.- Resolución de fecha 04 de agosto de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción, sobre escrito de retiro de buses y designa martillero.
- 7.- Copia de Patrocinio y Poder en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción.
- 8.- Resolución de fecha 11 de febrero de 2020, sobre patrocinio y poder con firma electrónica avanzada en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción.
- 9.- Escrito de entrega voluntaria de bienes, causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción.
- 10.- Resolución de fecha 04 de marzo de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción, sobre entrega voluntaria de bienes.
- 11.- Escrito de retiro de buses y designa martillero presentado por el señor, Eugenio Hernández Aliste, abogado de banco Estado de Chile en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción.
- 12.- Resolución de fecha 04 de agosto de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción, sobre retiro de buses y designa martillero.
- 13.- Set de 07 fotos donde consta el estado de 3 máquinas placas patentes HF SS 42, HD LW 79 y HD LW 80, incorporadas mediante su exhibición en audiencia de juicio.

DÉCIMO TERCERO: Que la prueba rendida en juicio, apreciada con libertad, pero sin contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, permite establecer los siguientes hechos:

“Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O'Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de

créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, ”

Primero: El cliente *José Iván Sepúlveda Tapia* originalmente solicitó en diciembre de 2014, a través de Pablo Muñoz Giacaman, un crédito como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía - por la suma de 1.000.000 de pesos, siendo informado por Muñoz Giacaman que dicho crédito había sido rechazado, sin percibir Sepúlveda Tapia directamente monto alguno.

No obstante lo anterior, basado en las gestiones de solicitud efectuadas por el cliente Sepúlveda Tapia, fue otorgado en su favor el 15 de diciembre de 2014 un crédito por la suma de \$ 35.672.852 (825,79 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$3.000.000 (69,44 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo, uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de *Sepúlveda Tapia* dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

A) Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LR-8989-7, de 14 y 10 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: José Iván Sepúlveda Tapia. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.

b) Cartola de cuenta corriente N° 0-000-6197476-8 a nombre de *José Iván Sepúlveda Tapia*, con movimientos entre 29 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014. La cartola no correspondía a *Sepúlveda Tapia* y los movimientos reflejados no eran verdaderos

c) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de *José Iván Sepúlveda Tapia*. El año 2014, Sepúlveda Tapia no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

d) Certificado N°003/2014 de la empresa “Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.”, suscrito por Nelson Hermosilla Toloza en favor de José Sepúlveda Tapia. Tal documento no había sido emitido por la empresa en favor de *José Sepúlveda Tapia*, sino de un tercero (David Arratia Soto), habiendo sido adulterado.

Del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente y abonado por el Banco a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado por la suma de \$33.970.000, fue girado a través de dos cheques de dicha cuenta corriente, N°2842736 y 2842738, con firma falsificada de *José Iván Sepúlveda Tapia*, uno pagadero a *José Sepúlveda T* por suma de \$17.000.000 y otro pagadero a Alejandro Flores Loyola por la suma de \$16.970.000; este último, fue presentado a cobro por Flores Loyola a requerimiento de **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien recibió finalmente el dinero.

Segundo: El cliente *Héctor Fernando Jara Cabezas*, originalmente solicitó en febrero de 2015, a través de **Pablo Muñoz Giacaman**, como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por la suma de \$20.000.000.

El crédito fue otorgado al cliente *Héctor Fernando Jara Cabezas* el 18 de febrero de 2015 por la suma de \$ 35.075.540 (815,23 UTM) más una línea de crédito por la suma de \$4.000.000 (92,96 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Jara Cabezas, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

a) Declaraciones anuales de Renta años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y pago Simultaneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de *Héctor Fernando Jara Cabezas*. Entre los años 2012 y 2014, Jara Cabezas, no presento Declaración Anual de Renta, ni declaraciones mensuales y pago Simultáneo de Impuestos, siendo los documentos presentados forjados en su formato y contenido.

b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DCHC.55-0 y DBKB.29-6, de 28 de enero de 2015, con indicación de PROPIETARIO: *Héctor Fernando Jara Cabezas*. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DCHC.55 y DBKB.29 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de *Héctor Fernando Jara Cabezas* en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.

c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 000061974523, a nombre de *Héctor Fernando Jara Cabeza*, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a Jara Cabezas y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.330.000 fue abonada en Febrero de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842740 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia pagadero a *René Muñoz Mera* -padre de Pablo Muñoz Giacaman - y entregado por **Pablo Muñoz** para ser presentado a cobro el 20 de Febrero de 2015, por **Mario Arzola Henríquez**, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude.

Tercero: La cliente *Paula Brant Parada* originalmente solicitó en marzo de 2015, a través de Pablo Muñoz Giacaman, como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por un monto ascendente a la suma de \$23.000.000. El crédito fue otorgado a la cliente *Paula Camila Brant Parada*, el 01 de abril de 2015, por la suma de \$37.135.462 (858,82 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de *Brant Parada*, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Paula Camila Brant Parada, Brant Parada presentó Declaración Anual de Renta del año 2014;

sin embargo, el contenido de la misma en los datos personales, en la Actividad, profesión o giro del negocio y en las partidas, no correspondían a las declaradas, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

b) Certificados de inscripción y anotaciones vigentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LT-9049- 5, de 14 de Julio de 2014, con indicación de propietario: *Paula Camila Brant Parada*. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de *Paula Camila Brant Parada* en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 0000-61-98-412-7 a nombre de *Paula Camila Brant Parada*, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a *Brant Parada* y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.360.000 fue abonada el 10 de abril de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842741 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia, pagadero a *René Muñoz Mera* - padre de Pablo Muñoz Giacaman- y entregado por Pablo Muñoz para ser presentado a cobro el 10 de abril de 2015, por Mario Arzola Henríquez, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude.

Cuarto: En los dos créditos otorgados a *Hilda Magdalena Henríquez Cuevas*, solicitados en Abril de 2015, y otorgados el 29 de abril de 2015 por \$88.290.129 (2041,86 UTM) y \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), **Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas Y Mario Arzola Henríquez** - hijo de Hilda y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por Muñoz Giacaman en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:

a) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DBPP.34-6, YB.4544- 1 y XV.5873-3, respectivamente de 26 de marzo, 13 de abril y 19 de Marzo del año 2015, con indicación de propietario: **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DBPP.34, YB.4544 y XV.5873 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

b) Copia de contrato entre **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida, siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

c) 06 copias de facturas de ventas y servicios (N°18, 19, 20, 23, 24 y 25) de “**Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**” “Servicio de Transporte de Personal, Servicios Especiales pagadas por AES GENER. Los documentos no eran auténticos pues no correspondían al giro de la imputada, no correspondían a documentación tributaria original de la contribuyente y daban cuenta de un servicio inexistente.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por Hilda Magdalena Henríquez Cuevas de los buses placa patente única HDLW.80-1 y HDLW.79-8 y otra parte de la suma, recepcionada por Hilda Henríquez Cuevas en su cuenta 533-0-017976-9 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de Pablo Andrés Muñoz Giacaman y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy

Scotiabank) perteneciente a Pablo Andrés Muñoz Giacaman y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue Mario Arzola Henríquez quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a Hilda Henríquez Cuevas el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por Muñoz Giacaman, llevó a esta la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de esta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma.

Quinto: En los dos créditos asociados a la clienta **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, solicitados en abril de 2015 y otorgados el 22 de abril de 2015 por \$88.221.883 (2040,28 UTM) y el 27 de abril del 2015 por \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), **Pablo Andrés Muñoz Giacaman Y Ana Gladys Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez** – sobrino de Ana y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por Muñoz Giacaman en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:

a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas. El año 2014, **Ana Gladys Henríquez Cuevas** no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42- K, respectivamente de 26 de marzo y 22 de abril del año 2015, con indicación de propietario: Ana Gladys Henríquez Cuevas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DPPP.36 y CJLJ.42 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Ana Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Copia de contrato entre **Ana Gladys Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** de los buses placa patente única HFSS.42-1 y HFSS.43-K y otra parte de la suma, recepcionada por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** en su cuenta 533-0-017988-2 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank)

perteneciente a **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue **Mario Arzola Henríquez** quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a **Ana Henríquez Cuevas**, por intermedio de su madre **Hilda Henríquez Cuevas**, el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por **Muñoz Giacaman**, llevó la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de esta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma.

De esta manera, los montos de dinero asociados a los créditos obtenidos fraudulentamente con datos falsos, en los hechos señalados, ascendieron a lo menos a \$458.976.544 en créditos (más \$11.000.000 en líneas de crédito) y los dineros provenientes de los créditos, a lo menos \$75.060.000, fueron obtenidos por o para PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN, a través de transferencias recibidas o cheques cobrados.

DÉCIMO CUARTO: Convicción del tribunal, análisis de las pruebas rendidas.

UNO: En relación a los hechos contenidos en el número uno del auto de apertura, imputado por el Ministerio Público y los querellantes a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, cual es:

*“Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían,”*

Primero: El cliente José Iván Sepúlveda Tapia originalmente solicitó en diciembre de 2014, a través de Pablo Muñoz Giacaman, un crédito como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía - por la suma de 1.000.000 de pesos, siendo informado por Muñoz Giacaman que dicho crédito había sido rechazado, sin percibir Sepúlveda Tapia directamente monto alguno.

No obstante lo anterior, basado en las gestiones de solicitud efectuadas por el cliente Sepúlveda Tapia, fue otorgado en su favor el 15 de diciembre de 2014 un crédito por la suma de \$ 35.672.852 (825,79 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$3.000.000 (69,44 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo, uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Sepúlveda Tapia dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

A) Certificados de inscripción y anotaciones vigentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LR-8989-7,

de 14 y 10 de Julio de 2014, con indicación de propietario: José Iván Sepúlveda Tapia. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.

b) Cartola de cuenta corriente N° 0-000-6197476-8 a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia, con movimientos entre 29 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014. La cartola no correspondía a Sepúlveda Tapia y los movimientos reflejados no eran verdaderos

c) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de José Iván Sepúlveda Tapia. El año 2014, Sepúlveda Tapia no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

d) Certificado N°003/2014 de la empresa “Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.”, suscrito por Nelson Hermosilla Toloza en favor de José Sepúlveda Tapia. Tal documento no había sido emitido por la empresa en favor de José Sepúlveda Tapia, sino de un tercero (David Arratia Soto), habiendo sido adulterado.

Del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente y abonado por el Banco a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado por la suma de \$33.970.000, fue girado a través de dos cheques de dicha cuenta corriente, N°2842736 y 2842738, con firma falsificada de José Iván Sepúlveda Tapia, uno pagadero a José Sepúlveda T por suma de \$17.000.000 y otro pagadero a Alejandro Flores Loyola por la suma de \$16.970.000; este último, fue presentado a cobro por Flores Loyola a requerimiento de **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien recibió finalmente el dinero.”

I.- Acreditación de los hechos. -

En cuanto a que entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, se encuentra probado por la propia declaración del imputado y con:

A) el contrato de trabajo, y anexos contenidos en la **documental 8** de la prueba del Ministerio Público, suscrito con fecha 15 de junio de 2010, entre representante del Banco Estado de Chile, y don Pablo Andrés Muñoz Giacaman, para desempeñarse, según reza este documento en el cargo de ejecutivo de negocios, en la oficina Concepción, ubicada en la avenida Bernardo O’Higgins 486, dando contenido a estas funciones, el documento adjunto denominado “descripción de cargo”, dentro del cual se clasifican en cuatro grupos de funciones, a saber: gestión de clientes, gestión de venta, gestión post venta y administración del riesgo,

B) complementándose lo anterior, con la deposición de los testigos **Claudio Marquínez, Sylvia Pérez Pedreros, Natalia Tighe Fuentes, Carola García Concha**, todos los cuales fueron contestes en cuanto a la calidad de ejecutivo pequeñas empresas, y las funciones asignadas, explicando que éstas consistían en síntesis en la tramitación de créditos de clientes, en este caso del segmento pequeña empresa, para lo cual debe obtener la información a efectos de justificar el patrimonio del potencial cliente, tales como declaraciones de renta, certificados de inscripción y anotaciones vigentes de vehículos motorizados que tuvieran inscritos, formulario de pago de IVA; siendo obligación del ejecutivo a cargo, el verificar la autenticidad de dicha información, para lo cual el banco les proporciona acceso a las bases de datos del SII y Servicio de Registro Civil, igualmente, el verificar los domicilios informados por el cliente, entre otros, debiendo adjuntar dicha documentación a la carpeta que confecciona a ese fin, además de subir dicha información al sistema computacional del banco. Estas actuaciones deben quedar reflejadas en la carpeta respectiva, junto con las solicitudes de productos debidamente firmadas por el solicitante, y en caso que se tratara de fotocopia del documento original, el ejecutivo a cargo debía estampar un timbre con la leyenda: “conforme al original tenido a la vista” a efectos de certificar la autenticidad del documento. Adicionando que, una vez reunidos y verificados todos los antecedentes proporcionados por el solicitante, corresponde al mismo ejecutivo el presentar la solicitud de crédito al comité competente, el cual decide conforme a dicho archivo, no siendo obligación de sus miembros el confrontar que la información presentada sea veraz, ya que como se explicó trabajan en base a la confianza, resultando ineficiente realizar una doble verificación de antecedentes. Procedimiento, del cual dieron cuenta estos testigos, habida consideración a que todos trabajan en dicha institución, el primero, en la Contraloría Interna del Banco, y en esa calidad le correspondió investigar internamente los hechos objeto de este juicio a raíz del reclamo de dos clientes. Las demás, por tener respectivamente, la primera, la calidad de jefa de plataforma de pequeña empresa en la sucursal del Banco Estado oficina O’Higgins, Concepción, es decir, era superior directo del acusado Muñoz Giacaman. Doña Natalia Thige, detenta el cargo de ejecutiva de la misma banca, es decir, era colega del acusado Muñoz Giacaman; y, doña Carola García como Jefa de Riesgo Regional de la misma sucursal del Banco querellante, a la fecha de acaecimiento de los sucesos.

C) Con el contenido de las **6 carpetas azules** incorporadas en **otros medios de prueba numeral 6** por el Ministerio Público, que demuestra que la práctica habitual o ejecución práctica de la tramitación de créditos en el Banco Estado, implicaba la verificación de los antecedentes presentados por el cliente, por parte del ejecutivo por medio del timbre “copia fiel del original que tuve a la vista”.

En cuanto a que el cliente José Iván Sepúlveda Tapia originalmente solicitó en diciembre de 2014, a través de Pablo Muñoz Giacaman, un crédito como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía - por la suma de 1.000.000 de pesos, siendo informado por Muñoz Giacaman que dicho crédito había sido rechazado, sin percibir Sepúlveda Tapia directamente monto alguno.

No obstante lo anterior, basado en las gestiones de solicitud efectuadas por el cliente Sepúlveda Tapia, fue otorgado en su favor el 15 de diciembre de 2014 un crédito por la suma de \$ 35.672.852 (825,79 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$3.000.000 (69,44 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo, uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Sepúlveda Tapia dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

A) Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LR-8989-7, de 14 y 10 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: José Iván Sepúlveda Tapia. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.

B) Cartola de cuenta corriente N° 0-000-6197476-8 a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia, con movimientos entre 29 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014. La cartolas no correspondía a Sepúlveda Tapia y los movimientos reflejados no eran verdaderos

C) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de José Iván Sepúlveda Tapia. El año 2014, Sepúlveda Tapia no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

D) Certificado N°003/2014 de la empresa "Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.", suscrito por Nelson Hermosilla Toloza en favor de José Sepúlveda Tapia. Tal documento no había sido emitido por la empresa en favor de José Sepúlveda Tapia, sino de un tercero (David Arratia Soto), habiendo sido adulterado.

Del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente y abonado por el Banco a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado por la suma de \$33.970.000, fue girado a través de dos cheques de dicha cuenta corriente, N°2842736 y 2842738, con firma falsificada de José Iván Sepúlveda Tapia, uno pagadero a José Sepúlveda T por suma de \$17.000.000 y otro pagadero a Alejandro Flores Loyola por la suma de \$16.970.000; este último, fue presentado a cobro por Flores Loyola a requerimiento de **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien recibió finalmente el dinero."

Todo lo anterior se demuestra mediante:

a) el testimonio de **don José Sepúlveda Tapia** quien pormenorizadamente detalló su situación. Contó que tiene un taller artesanal en su casa y repara soportes de vehículos desde hace aproximadamente treinta años, exponiendo que a través de la televisión se enteró que el Banco Estado estaba ayudando a micro empresarios. Así con el objeto de solicitar un crédito para ampliar su taller y comprar materiales en noviembre de 2014, se acercó a la sucursal de calle O'Higgins del Banco Estado, donde se entrevistó con un ejecutivo, a quien solicitó un crédito por \$ 1.000.000, firmando una solicitud de crédito, y cierta documentación, a la que no dio lectura antes de suscribirla. Días después, conversó telefónicamente con el ejecutivo, informándole éste que el crédito había sido rechazado.

No volvió a tener noticias de esta solicitud hasta que la PDI lo contactó, quienes hace aproximadamente dos años lo citaron como testigo, debiendo efectuar muestras de firmas y varias cosas más. Responde que no tiene cuenta corriente en el Banco Estado, nunca recibió un talonario de cheques del Banco Estado, el domicilio que aparece en la solicitud de 17 norte nº83, no corresponde a su actual domicilio. No ha sido propietario de un bus. No tiene vinculación con la empresa de Transportes Los Alces.

b) Información contenida en **otros medios de prueba, nº 1 número VI**, correspondiente a carpeta blanca o comercial con documentación asociada a la solicitud de crédito de este cliente, y que contiene: a) Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas el 11 de diciembre 2014 por \$35.672.852 y por \$3.000.000. b) Contrato de Apertura de Crédito compuesto de 4 hojas, firmada y con huella el 11 diciembre 2014 por la suma de \$35.672.852. c) Mandato De Cargo de Primas, suscrito por el solicitante el 11.12.2014. d) Propuesta de Seguro Desgravamen incompleta, solo 1 hoja, sin firma de fecha 11 diciembre 2014. e) Papeleta de Cierre de Negocios firmada por Pablo Muñoz G. y la Jefe de Plataforma del banco el 15 diciembre 2015. f) Hoja resumen de fecha 11 diciembre 2014 compuesta por 5 hojas. g) Comprobante de Entrega de Documentación, 1 hoja, firmada y con huella del 11 diciembre 2014. h) Anexo de Contratación de Productos y Servicios de Microempresa/ Pequeña Empresa de fecha 11 diciembre 2014, firmada en la primera hoja (compuesta de 6 hojas), en relación también con el **nº6 letra b, de la misma evidencia**, referido a carpeta asociada a José Iván Sepúlveda Tapia, con copia de los siguientes documentos: - Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos. - Antecedentes de Apertura de Cuenta Corriente y Contratos asociados (solicitud, anexos, incluido informe de visita) Solicitud de créditos y documentos asociados, incluidos: i. Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LR-8989-7, de 14 y 10 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: José Iván Sepúlveda Tapia. ii. Cartola de cuenta corriente Nº 0-000-6197476-8 a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia, con movimientos entre 29 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014. iii. Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de José Iván Sepúlveda Tapia. iv. Certificado Nº003/2014 de la empresa "Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.", suscrito por Nelson Hermosilla Toloza en favor de José Sepúlveda Tapia. Unidos a la prueba **documental nº9** consistente en oficio emitido con fecha 24 de julio de 2018, por doña Mónica Merino Grez, Subgerente Regional de Banco Estado, sobre otorgamiento y estado de situación de créditos con anexo de detalle, para los clientes, entre los cuales se encuentra don José Sepúlveda Tapia.

c) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 b (otros medios de prueba)** que acreditan los Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LR-8989-7, de 14 y 10 de Julio de 2014, con indicación de propietario: José Iván Sepúlveda Tapia fueron presentados, y la falsedad de estos documentos a través de certificados no adulterados de la **documental número 21**, incorporada por el

Ministerio Público y mediante declaración del testigo **Claudio Marquínez Fuentes** quien es claro en señalar la falsedad de los documentos presentados al contrastarlos con los originales obtenidos la página del Registro Civil.-

d) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 b**, ya referida, que acredita que Cartolas de cuenta corriente N° 0-000-6197476-8 a nombre de José Iván Sepúlveda Tapia, con movimientos entre 29 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014 fue presentada, acreditándose su falsedad mediante declaración del testigo **Claudio Marquínez Fuentes** quien explica detalladamente porque dicho documento no constituye una cartolas real, declaración del señor José Sepúlveda Tapia y el contraste con las cartolas incorporadas en las letras **6c y 6d**, que demuestran el uso de una plantilla.

e) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 b** que acredita que declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de José Iván Sepúlveda Tapia fue presentada, en circunstancia que según se acredita mediante la **documental número 18** que corresponde a la consulta integrada del Servicio de Impuestos Internos, el año 2014, Sepúlveda Tapia no presentó Declaración Anual de Renta.

f) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 b, IV**, que acredita que supuesto Certificado N°003/2014 de la empresa “Transporte de Pasajeros Los Alces S.A.”, suscrito por Nelson Hermosilla Toloza en favor de José Sepúlveda Tapia fue presentado, en circunstancia que tal documento no había sido emitido por la empresa en favor de José Sepúlveda Tapia, sino de un tercero (David Arratia Soto), según se acredita con oficio emanado de Nelson Hermosilla Toloza incorporado como **documental 22**.

g) Los cheques incorporados en **otros medios de prueba número dos, cuadro resumen de egresos con detalle de fojas 101 del expediente administrativo**, incorporado en **otros medios de prueba número 5, declaración de perito Poul Yáñez Zambrano** que en relación a ellos declara que las firmas son falsas, concordante con la deposición de José Sepúlveda Tapia en idéntico sentido, acreditan que del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente y abonado por el Banco a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado por la suma de \$33.970.000, fue girado a través de dos cheques de dicha cuenta corriente, N°2842736 y 2842738, con firma falsificada de José Iván Sepúlveda Tapia, uno pagadero a José Sepúlveda T por suma de \$17.000.000 y otro pagadero a Alejandro Flores Loyola por la suma de \$16.970.000

h) Que el cheque cobrado por Alejandro Flores Loyola lo fue a requerimiento de Pablo Andrés Muñoz Giacaman, y que los fondos ascendientes a la suma de \$16.970.000; le fueron entregados a él, se demostró mediante el testimonio de **Alejandro Flores Loyola** y en el mismo sentido declaraciones de testigos **Nicol Lara Henríquez y Mariela Sepúlveda Roa**.

II.- Acreditación de participación en los hechos.

La participación del imputado Pablo Muñoz Giacaman en los hechos precedentemente acreditados se encuentra establecida con las declaraciones del propio imputado, de José Sepúlveda Tapia que indicó que él era su ejecutivo a cargo, de Claudio Marquínez Fuentes quien realizó la investigación interna de estos hechos, de Silvia Pérez Pedreros quien reconoció que la carpeta con la información falsa correspondía a las preparadas por el imputado, de Natalia Tighe Fuentes, en el mismo sentido anterior, de Alejandro Flores Loyola quien depuso haber cobrado el cheque por \$16.970.000 a requerimiento de imputado y para entregarle los fondos a él y, en el mismo sentido testimonios de las funcionarias policiales Nicol Lara Henríquez y Mariela Sepúlveda Roa, además de la prueba específicamente señalada en el punto I precedente que acredita la existencia del hecho.-

Que la demás prueba rendida a la que no se hace mención expresa no altera lo concluido y en especial la prueba rendida por los imputados no modifica lo concluido.

III.- Calificación jurídica de los hechos, grado de desarrollo del delito y participación.

En opinión del ente persecutor y del querellante Consejo de Defensa del Estado, los hechos establecidos precedentemente corresponden al delito tipificado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal; en concepto del querellante Banco Estado de Chile corresponderían al delito tipificado en el artículo 160 de la ley general de Bancos en concepto del imputado al delito establecido en el artículo 470 del Código Penal o el señalado por el querellante Banco del Estado de Chile.-

El Tribunal calificará jurídicamente estos hechos como el delito contemplado en el artículo 239 inciso tercero del código penal, por las siguientes razones:

- El artículo 239 del Código Penal dispone:

“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

En todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.”

- El artículo 239 citado se encuentra en el Título V del Libro II del Código Penal.

- El artículo 260 del Código Penal, que también se encuentra en el Título V del Libro II del Código Penal dispone:

Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.

De esta forma siendo el Banco del Estado de Chile, una institución autónoma del Estado, en conformidad al artículo primero del D.F.L. 2079 del año 1977, al desempeñar un cargo o función en dicha institución el imputado, se reputa “empleado” para los efectos del título V del libro II del Código Penal en conformidad al artículo 260 citado, tal como reiteradamente lo ha resuelto la jurisprudencia, en este sentido la E. Corte Suprema de Justicia en fallo publicado en revista fallos del mes N° 43 Junio de 1962 p 114, resolvió

“ El artículo 260 del código penal amplía el concepto de empleado público a funcionarios o empleados que pueden no tener el carácter de tales , con respeto a su sistema previsional, o a las relaciones que los rigen con la institución empleadora, pero que debido a la función pública que ejercen , el Código Penal los considera como funcionarios públicos (----) Los empleados del Banco del Estado de Chile pertenecen a una institución de administración autónoma estatal y por lo tanto, quedan incluidos dentro de la disposición del artículo 260 , aunque su sistema de previsión se encuentre regido por la legislación para los empleados particulares y, en consecuencia, los delitos de sustracción o apropiación de fondos que administran, tiene carácter de malversación de caudales públicos.”.

Además, sentencia de fecha 15 de Mayo de 2008 de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa rol 1496-2007 y sentencia dictada en causa RIT: 12-2012 del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas.

Así, a través de las operaciones en que intervino el imputado, todas en relación a su cargo de ejecutivo de cuentas del Banco del Estado de Chile, defraudó o consintió en que se defraudará al Estado ocasionándole una pérdida, por el monto de los créditos otorgados (crédito y línea de crédito), pues el Banco no pudo recuperar ese dinero prestado, privándosele, además, de su lucro legítimo por dicho capital.

Por otra parte, el ilícito cometido por el imputado corresponde al tipificado en el inciso tercero del artículo 239 del Código Penal, por cuanto, aunque sólo se probó que el acusado percibió \$16.970.000 de lo defraudado, el tipo penal se satisface con que se defraudare o se consintiere en que se defraudare al Estado, originándole un detrimento al Estado, el cual, en este caso, ascendió a lo menos a

la suma de \$35.000.000 superior a las cuatrocientas (400) unidades tributarias mensuales que exige la norma, por cuanto la documental incorporada señalada precedentemente permite dar por acreditado que el Banco efectuó la disposición de \$ 35.672.852 (825,79 UTM), por concepto de crédito y de \$3.000.000 (69,44 UTM) por concepto de línea de crédito, sin que prueba alguna se ha rendido para demostrar que dichas sumas le fueron restituidas por lo que el detrimento o pérdida económica del Banco de Estado de Chile fue por dichas sumas.-, debiendo descartarse la alegación de la defensa del imputado de tipificar estos hechos en la figura residual tipificada en el artículo 470 del Código Penal.-

Sin que en este caso haya incurrido en el delito tipificado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos que dispone:

“El que obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.”

Por cuanto, él ningún crédito obtuvo, por lo que su conducta en este caso no satisface ni en forma aparente este tipo penal.

El delito de fraude al fisco que se encuentra en grado de consumado, por haberse desarrollado la totalidad de la conducta punible, cabiéndole participación como autor ejecutor, por haber tomado parte en su perpetración de una manera inmediata y directa conforme al artículo 15 n° 1 del Código Penal.

DOS: En relación a los hechos contenidos en el número segundo del auto de apertura, imputado por el Ministerio Público y los querellantes a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, cual es:

*“Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían,”*

Segundo: El cliente Héctor Fernando Jara Cabezas, originalmente solicitó en febrero de 2015, a través de **Pablo Muñoz Giacaman**, como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por la suma de \$20.000.000.

El crédito fue otorgado al cliente Héctor Fernando Jara Cabezas el 18 de febrero de 2015 por la suma de \$ 35.075.540 (815,23 UTM) más una línea de crédito por

la suma de \$4.000.000 (92,96 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Jara Cabezas, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

a) Declaraciones anuales de Renta años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y pago Simultáneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de Héctor Fernando Jara Cabezas. Entre los años 2012 y 2014, Jara Cabezas, no presentó Declaración Anual de Renta, ni declaraciones mensuales y pago Simultáneo de Impuestos, siendo los documentos presentados forjados en su formato y contenido.

b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DCHC.55-0 y DBKB.29-6, de 28 de enero de 2015, con indicación de PROPIETARIO: Héctor Fernando Jara Cabezas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DCHC.55 y DBKB.29 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.

c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 000061974523, a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a Jara Cabezas y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.330.000 fue abonada en Febrero de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842740 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia pagadero a René Muñoz Mera -padre de Pablo Muñoz Giacaman - y entregado por **Pablo Muñoz** para ser presentado a cobro el 20 de Febrero de 2015, por **Mario Arzola Henríquez**, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude.

I.- Acreditación de los hechos.

En cuanto a que entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, se encuentra acreditado por los medios de prueba y en la forma señalada en capítulo I del número UNO precedente respecto a este mismo hecho.

En cuanto a que el cliente *Héctor Fernando Jara Cabeza*, originalmente solicitó en febrero de 2015, a través de **Pablo Muñoz Giacaman**, como persona

natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por la suma de \$20.000.000. El crédito fue otorgado al cliente Héctor Fernando Jara Cabeza el 18 de febrero de 2015 por la suma de \$ 35.075.540 (815,23 UTM) más una línea de crédito por la suma de \$4.000.000 (92,96 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Jara Cabezas, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

- a) Declaraciones anuales de Renta años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y pago Simultaneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de Héctor Fernando Jara Cabeza. Entre los años 2012 y 2014, Jara Cabeza, no presentó Declaración Anual de Renta, ni declaraciones mensuales y pago Simultáneo de Impuestos, siendo los documentos presentados forjados en su formato y contenido.
- b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DCHC.55-0 y DBKB.29-6, de 28 de enero de 2015, con indicación de PROPIETARIO: Héctor Fernando Jara Cabeza. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DCHC.55 y DBKB.29 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original.
- c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 000061974523, a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a Jara Cabeza y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.330.000 fue abonada en Febrero de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842740 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia pagadero a René Muñoz Mera -padre de Pablo Muñoz Giacaman - y entregado por **Pablo Muñoz** para ser presentado a cobro el 20 de Febrero de 2015, por **Mario Arzola Henríquez**, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude, se acredita mediante:

A) El testimonio de **don Héctor Jara Cabeza** quien presentó querrela que dio origen a las investigación y detalló que el año 2015 trabajaba en Yumbel como inspector técnico de obras en el Juzgado de Familia de esa comuna para una empresa de inspecciones, no tenía ninguna una actividad, no era dueño ni de camiones de buses, decidió pedir un crédito por \$20,000,000 para retirar un carro de camión que estaba embargado y así hacer un negocio, con don Alejandro Beltrán quien era el dueño del camión que operaba con el carro, Beltrán lo presentó con el imputado en un café y luego el Sr. Jara le llevó los documentos al imputado a su lugar de trabajo, en el segundo piso del Banco Estado, en oficina principal de calle O'Higgins Concepción, sin embargo, no le entregó

documentación tributaria, declaraciones de renta, certificados de dominio de vehículos motorizados, ni cartolas de otros bancos.-

Así recibió los \$20.000.0000 en su cuenta corriente con tres meses de gracia, pero cuando aparecieron las cuotas a pagar, éstas eran de un valor muy superior al proyectado; de modo que concurrió a una sucursal de Talcahuano donde le informaron que el crédito era por \$35.000.000.- Ante lo anterior, intentó ubicar al imputado y sólo logró reunirse con él en la galería Caracol de Concepción, donde este último le señaló que esto lo habían hecho en Santiago, que él no tenía nada que ver, que había que pagar las cuotas para luego renegociar el crédito y de esa manera pagar la cuotas. Luego concurrió al Banco, le manifestaron que esos créditos se veían en Concepción y que, el imputado había renunciado.

B) Información contenida en **otros medios de prueba número 1 IV, esto es**, Carpeta correspondiente a HECTOR FERNANDO JARA CABEZA que contiene: **a)** Contrato Apertura Crédito por \$35.075.540. en 3 hojas, suscrito el 16 febrero 2015, con firma y huella. **b)** Propuesta de Seguro, en 2 hojas, firmada el 16 febrero 2015. **c)** Mandato De Cargo de Primas, suscrito el 16.02.2015. **d)** Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas el 4 de febrero del año 2015 por \$35.075.540 y por \$54.000.000. **e)** Papeleta de Cierre de Negocios suscrita el 18 febrero 2015 por Pablo Muñoz Giacaman y por el Jefe de Plataforma de Talcahuano, por la suma de \$35.075.540.

C) Información contenida en **otros medios de prueba número 1 V Carpeta** correspondiente a HECTOR FERNANDO JARA CABEZAS que contiene: **a)** Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas el 4 de febrero del 2015 por \$35.075.540 y por \$54.000.000. **b)** Contrato de Prestación de Servicios 24 Horas, 5 hojas, firmado, sin fecha. **c)** Registro Apertura Cuenta Corriente suscrito el 4 febrero 2015. **d)** Anexo de Aceptación de Productos, 5 hojas, suscrito el 4 febrero 2015. **e)** Contrato de Cuenta Corriente Bancaria, 8 hojas, suscrito el 4 febrero 2015. **f)** Hoja Resumen del Contrato, 3 hojas, suscrito el 4 febrero 2015. Contrato de Afiliación al Sistema y Uso de Tarjeta de Débitos, suscrito en 5 hojas el 4 febrero 2015. **h)** Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante. **i)** Resumen Boletín Concursal del solicitante, en 2 hojas, de fecha 12 febrero 2015. **j)** Informe Visita pequeña Empresa de fecha 4 febrero 2015. **k)** Declaración de Impuesto anual a la renta del año tributario 2014 del interesado.

D) **Otros medios de prueba número 6 letra c**, Carpeta asociada a Héctor Fernando Jara Cabezas, con copia de los siguientes documentos: - Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos. - Copia de Comprobante de traspasos (2). - Antecedentes de Apertura de Cuenta Corriente y Contratos asociados (incluido informe de visita)- Solicitud de créditos y documentos asociados, incluido: **i.-** Declaraciones anuales de Renta años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y pago Simultaneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de Héctor Fernando Jara Cabezas. **ii.-** Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DCHC.55-0 y DBKB.29-6, de 28 de enero de 2015, con indicación de

PROPIETARIO: Héctor Fernando Jara Cabezas. **iii.-** Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 000061974523, a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015.

E) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 c** que prueba que declaraciones anuales de Renta años 2012 y 2014 (Formulario 22) y 26 declaraciones Mensuales y pago Simultaneo de Impuestos (Formulario 29) de diciembre 2012 a octubre 2014, de Héctor Fernando Jara Cabeza, en circunstancia que según se acredita mediante **la documental número 11 y 17** que corresponde a la consulta integrada del Servicio de Impuestos Internos, que entre los años 2012 y 2014, Jara Cabezas, no presentó Declaración Anual de Renta, ni declaraciones mensuales y pago Simultáneo de Impuestos, siendo los documentos presentados forjados en su formato y contenido.

F) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 c**, Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DCHC.55-0 y DBKB.29-6, de 28 de enero de 2015, con indicación de PROPIETARIO: Héctor Fernando Jara Cabezas, que acredita que dichos certificados fueron presentados por el imputado. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DCHC.55 y DBKB.29 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados adulteraciones de uno original, y la falsedad de estos documentos se acredita mediante certificados no adulterados **documental número 21** incorporada por el Ministerio Público y mediante declaración del **Claudio Marquínez Fuentes** quien es claro en señalar la falsedad de los documentos presentados al contrastarlos con los originales obtenidos la página del Registro Civil.-

G) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 c** que acredita que Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 000061974523, a nombre de Héctor Fernando Jara Cabezas, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a Jara Cabezas y los movimientos reflejados no eran verdaderos. fue presentada, acreditándose su falsedad mediante declaración del testigo **Claudio Marquínez Fuentes** quien explica detalladamente porque dicho documento no constituye una cartolas real, declaración del **señor Jara Cabeza** quien indicó no haber tenido a esas fechas cuenta corriente y el contraste con las cartolas incorporadas en **otros medios de prueba 6b y 6d**, que demuestran el uso de una plantilla.

H) Los cheques incorporados en **otros medios de prueba número dos**, cuadro resumen de egresos con detalle de fojas 101 del expediente administrativo, incorporado **en otros medios de prueba número 5, declaración de perito Poul Yáñez Zambrano** que en relación a ellos declara que las firmas son falsas, concordante con la declaración de José Sepúlveda Tapia en idéntico sentido, acreditan que \$13.330.000, provenientes del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente transferido a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, según acredita comprobante de

traspaso incorporado a **fojas 119 de sumario administrativo, otros medios de prueba número 5** y la declaración del testigo **Manuel Jesús Muñoz Silva** quien reconoce y explica este documento y fue girado a través de cheque de dicha cuenta corriente cheque N°2842740, con firma falsificada de José Iván Sepúlveda Tapia, pagadero al padre del imputado (según se acreditó con **certificado de nacimiento de Pablo Muñoz Giacaman**), pero cobrado finalmente por Mario Arzola.-

I) Que el cheque N°2842740 por \$13.330.000, fue cobrado por Mario Arzola a requerimiento de Pablo Andrés Muñoz Giacaman, y que los fondos le fueron entregados a él, se estableció mediante la declaración **Mario Arzola**, además del documento incorporado en **evidencia 5** que acredita el visto bueno dado por el imputado para el pago de ese cheque.

II.- Acreditación de participación en los hechos.

La participación del imputado Pablo Muñoz Giacaman en los hechos precedentemente acreditados se encuentra establecida con las declaraciones del propio imputado, de Héctor Jara Cabeza, de José Sepúlveda Tapia, Claudio Marquínez Fuentes quien realizó la investigación interna de estos hechos, de Silvia Pérez Pedreros quien reconoció que la carpeta con la información falsa correspondía a las preparadas por el imputado, de Natalia Tighe Fuentes en el mismo sentido anterior, de Mario Arzola quien depuso haber cobrado el cheque por \$13.300.000, requerimiento de imputado y para entregarle los fondos a él, además de la prueba específicamente señalada en el punto I precedente que acredita la existencia del hecho.-

III.- Calificación jurídica de los hechos, grado de desarrollo del delito y participación.

En opinión del ente persecutor y del querellante Consejo de Defensa del Estado, los hechos establecidos precedentemente corresponden al delito tipificado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal; en concepto del querellante Banco Estado de Chile corresponderían al delito tipificado en el artículo 160 de la ley general de Bancos en concepto del imputado al delito establecido en el artículo 470 del Código Penal o el señalado por el querellante Banco del Estado de Chile.

El Tribunal calificará jurídicamente estos hechos como el delito tipificado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, por las razones señaladas en el capítulo III del punto UNO precedente, teniendo además presente que si bien solo se acreditó que el imputado percibió \$13.300.000, originó una pérdida al Estado por una suma superior a las cuatrocientas (400) Unidades Tributarias mensuales, ya que los fondos dispuestos por el Banco (\$ 35.075.540 (815,23 UTM) *más una línea de crédito por la suma de \$4.000.000 (92,96 UTM)*, que fueron recibidos por el señor Jara Cabeza gracias a la intervención y actuaciones del imputado, y por el

propio imputado, fueron una pérdida en cuanto capital y lucro cesante, ya que no se acreditó devolución alguna al Banco Estado.-

Delito que se encuentra en grado de consumado, por haberse desarrollado la totalidad de la conducta punible, cabiéndole participación como autor ejecutor, por haber tomado parte en su ejecución de una manera inmediata y directa conforme al artículo 15 n° 1 del Código Penal.

TRES: En relación a los hechos contenidos en el número tres del auto de apertura, imputado por el Ministerio Público y los querellantes a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, cual es:

*“Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían,”*

Tercero: La cliente Paula Brant Parada originalmente solicitó en marzo de 2015, a través de Pablo Muñoz Giacaman, como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por un monto ascendente a la suma de \$23.000.000. El crédito fue otorgado a la cliente Paula Camila Brant Parada, el 01 de abril de 2015, por la suma de \$37.135.462 (858,82 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de Brant Parada, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Paula Camila Brant Parada, Brant Parada presentó Declaración Anual de Renta del año 2014; sin embargo, el contenido de la misma en los datos personales, en la Actividad, profesión o giro del negocio y en las partidas, no correspondían a las declaradas, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

b) Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LT-9049- 5, de 14 de Julio de 2014, con indicación de propietario: Paula Camila Brant Parada. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de Paula Camila Brant Parada en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 0000-61-98-412-7 a nombre de Paula Camila Brant Parada, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a Brant Parada y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

*Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.360.000 fue abonada el 10 de abril de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842741 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia, pagadero a René Muñoz Mera - padre de Pablo Muñoz Giacaman- y entregado por **Pablo Muñoz** para ser presentado a cobro el 10 de abril de 2015, por **Mario Arzola Henríquez**, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude.*

I.- Acreditación de los hechos.

En cuanto a que entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, se encuentra acreditado por los medios de prueba y en la forma señalada en capítulo I del número UNO precedente respecto a este mismo hecho.-

En cuanto a que la cliente *Paula Brant Parada* originalmente solicitó en marzo de 2015, a través de Pablo Muñoz Giacaman, como persona natural y no como empresario del área del transporte – condición que no tenía – un crédito por un monto ascendente a la suma de \$23.000.000. El crédito fue otorgado a la cliente *Paula Camila Brant Parada*, el 01 de abril de 2015, por la suma de \$37.135.462 (858,82 UTM), siendo el imputado **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** quien tramitó, evaluó y presentó a aprobación el mismo en las condiciones en que fue aprobado, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de *Brant Parada*, dentro de los cuales se encontraban a lo menos:

- a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Paula Camila Brant Parada, Brant Parada presentó Declaración Anual de Renta del año 2014; sin embargo, el contenido de la misma en los datos personales, en la Actividad, profesión o giro del negocio y en las partidas, no correspondían a las declaradas, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.
- b) Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LT-9049- 5, de 14 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: *Paula Camila Brant Parada*. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de *Paula Camila Brant Parada* en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 0000-61-98-412-7 a nombre de *Paula Camila Brant Parada*, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015. La cartola no correspondía a *Brant Parada* y los movimientos reflejados no eran verdaderos.

Del dinero en exceso asociado al crédito obtenido fraudulentamente, la suma de \$13.360.000 fue abonada el 10 de abril de 2015 a la cuenta de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, siendo girado el mismo monto a través de un cheque N°2842741 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada del titular José Sepúlveda Tapia, pagadero a *René Muñoz Mera* - padre de Pablo Muñoz Giacaman- y entregado por **Pablo Muñoz** para ser presentado a cobro el 10 de abril de 2015, por **Mario Arzola Henríquez**, concretándose a través de éste la obtención de dichos dineros producto del fraude, se acredita mediante:

A) El testimonio de **doña Paula Brant Parada** quien depuso que es educadora diferencial y trabajaba profesora dependiente en una escuela DEM, no ejercía ninguna comercial, no era dueña ni de camiones de buses, decidió pedir un crédito por \$20.000.000 aproximadamente para constituir una PYME de artículos médicos y de enfermería, para lo anterior, Alejandro Beltrán quien es su expareja y padre de su hijo, lo presentó con el imputado en un café y luego llevó los documentos al acusado a su lugar de trabajo, no le entregó documentación tributaria, declaraciones de renta, certificados de dominio de vehículos motorizados.-

Así recibió los \$20.000.0000 en su cuenta corriente y los retiró mediante dos cheques que giró a su nombre y cobró por caja, pero cuando aparecieron las cuotas a pagar éstas eran de un valor muy superior al proyectado; determinando que concurriera a la sucursal Concepción y la agente le indicó que el monto del crédito era aproximadamente \$35.000.000.-

B) Documentos incorporados **otros medios de prueba Número 1, iii.** Carpeta correspondiente a PAULA CAMILA BRANT PARADA que contiene: **a)** Solicitud de Productos para Pequeña Empresa, compuesto de 2 hojas, donde solicita un crédito por \$37.135.462 y otro de \$2.000.000, firmado el 30 de marzo del año 2015. **b)** Papeleta de Cierre de Negocios firmada el 31.03.2015 por el ejecutivo Pablo Muñoz Giacaman 1 por la Jefe de Plataforma por la suma de \$37.135.462. **c)** Un correo electrónico compuesto de 2 hojas. **d)** Contrato de Apertura de Crédito compuesto de dos hojas, firmada y con huella, el 30 marzo 2015 por la suma de \$37.135.462. **e)** Propuesta de Seguro compuesta de 2 hojas, firmada el 27.03.2015. **f)** Mandato de Cargo de Primas, suscrito y junto a huella digital, el 27 marzo de 2015.

C) Documentos incorporados en **otros medios de prueba número 6 letra d.** Carpeta asociada a Paula Brant Parada con copia de los siguientes documentos:

-Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos. - Antecedentes de Productos para pequeña empresa y Contratos asociados (incluido informe de visita) - Solicitud de créditos y documentos asociados, incluido: **i.** Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Paula Camila Brant Parada. **ii.**

Certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LT-9049-5, de 14 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: Paula Camila Brant Parada. **iii.** Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 0000-61-98-412-7 a nombre de Paula Camila Brant Parada, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015.

D) Documento incorporado en **carpeta azul letra 6 d** que acredita que una declaración anual de Renta año 2014 (Formulario 22) fue presentada, en circunstancia que según se prueba mediante **la documental número 19**, que corresponde a la Consulta Integrada del Servicio de Impuestos Internos, la Sra. Brant el año 2014 no presentó Declaración Anual de Impuesto Renta, siendo el documentos presentado falso en su formato y contenido.

F) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 d**, certificados de inscripción y anotaciones vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación de los vehículos Placa Patentes Únicas XS.4977-1 y LT-9049- 5, de 14 de Julio de 2014, con indicación de PROPIETARIO: Paula Camila Brant Parada. Los vehículos referidos no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de *Paula Camila Brant Parada* en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original, la falsedad de estos documentos se acredita mediante certificados no adulterados **documental número 21**, incorporada por el Ministerio Público y mediante declaración del testigo, don **Claudio Marquínez Fuentes** quien es claro en señalar la falsedad de los documentos presentados al contrastarlos con los originales obtenidos la página del Registro Civil.-

G) Documentos incorporados en **carpeta azul letra 6 d, de otros medios de prueba**, que acredita que Cartola de cuenta corriente, asociada al N° 0000-61-98-412-7 a nombre de *Paula Camila Brant Parada*, con movimientos entre 24 de octubre de 2014 y 11 de febrero de 2015 fue presentada. La cartola no correspondía a doña Paula Brant y los movimientos reflejados no eran verdaderos., acreditándose su falsedad mediante declaración del testigo **Claudio Marquínez Fuentes** quien indicó detalladamente por qué dicho documento no constituye una cartola real, y el contraste con las cartolas incorporadas en el **número 6 letras b y C**, que demuestran el uso de una plantilla.

H) Los cheques incorporados en **otros medios de prueba número dos**, cuadro resumen de egresos con detalle de fojas 81 y 82 del expediente administrativo, incorporado en **otros medios de prueba número 5**, declaración de **perito Poul Yáñez Zambrano** que en relación a ellos declara que las firmas son falsas, concordante con la declaración de José Sepúlveda Tapia en idéntico sentido, acreditan que \$13.360.000, provenientes del dinero asociado al crédito obtenido fraudulentamente transferido a una cuenta abierta a nombre de José Sepúlveda Tapia N°53300159849 del Banco Estado, según demuestra comprobante de traspaso incorporado a **fojas 90 de sumario administrativo, otros medios de prueba número 5** y la declaración de la testigo **Leisla Lara Henríquez** quien

reconoce y explica este documento, y fue girado a través del cheque N°2842741 de dicha cuenta corriente, con firma falsificada de José Iván Sepúlveda Tapia, pagadero al padre del imputado, pero cobrado finalmente por Mario Arzola.

H) Que el cheque N° 2842741 por \$13.360.000, fue cobrado por Mario Arzola a requerimiento de Pablo Andrés Muñoz Giacaman, y que los fondos le fueron entregados a él, se demostró mediante la declaración del Sr. Mario Arzola,

II.- Acreditación de participación en los hechos.

La intervención del imputado Pablo Muñoz Giacaman en los hechos precedentemente acreditados se encuentra establecida con las declaraciones del propio imputado, de Paulina Brant, de José Sepúlveda Tapia, de Claudio Marquínez Fuentes quien realizó la investigación interna de estos hechos, de Silvia Pérez Pedreros, la cual reconoció que la carpeta con la información falsa correspondía a las preparadas por el imputado, de Natalia Tighe Fuentes en el mismo sentido anterior, de Mario Arzola quien depuso haber cobrado el cheque por \$13.360.000, a requerimiento de imputado y para entregarle los fondos a él,

III.- Calificación jurídica de los hechos, grado de desarrollo del delito y participación.

En opinión del ente persecutor y del querellante Consejo de Defensa del Estado, los hechos establecidos precedentemente corresponden al delito tipificado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal; en concepto del querellante Banco Estado de Chile corresponderían al delito tipificado en el artículo 160 de la ley general de Bancos en concepto del imputado al delito establecido en el artículo 470 del Código Penal o el señalado por el querellante Banco del Estado de Chile.

El Tribunal calificara jurídicamente estos hechos como el delito tipificado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, por las razones señaladas en el capítulo III del punto UNO precedente, teniendo además presente que si bien solo se demostró que el imputado percibió \$13.360.000: generó una pérdida al Estado por una suma superior a las cuatrocientas (400) unidades tributarias mensuales, ya que los fondos dispuestos por el Banco del Estado de Chile \$37.135.462 (858,82 UTM) y que fueron recibidos por la señora Brant gracias a la intervención y actuaciones del imputado en una parte, y el resto (\$13.360.000) por el propio imputado, fueron una pérdida total para el Banco del Estado, ya que no se acreditó hubiere recuperado parte alguna.

Delito que se encuentra en grado de consumado, por haberse desarrollado la totalidad de la conducta punible, cabiéndole participación como autor ejecutor, por haber tomado parte en su ejecución de una manera inmediata y directa conforme al artículo 15 n° 1 del Código Penal.

CUATRO: En relación a los hechos contenidos en el número cuatro del auto de apertura, imputado por el Ministerio Público y los querellantes a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez, cual es:

*“Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían,”*

Cuarto: En los dos créditos otorgados a Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, solicitados en Abril de 2015, y otorgados el 29 de abril de 2015 por \$88.290.129 (2041,86 UTM) y \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), **Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas Y Mario Arzola Henríquez** - hijo de Hilda y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por **Muñoz Giacaman** en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:

a) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DBPP.34-6, YB.4544- 1 y XV.5873-3, respectivamente de 26 de marzo, 13 de abril y 19 de marzo del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Hilda Magdalena Henríquez Cuevas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DBPP.34, YB.4544 y XV.5873 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

b) Copia de contrato entre **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida, siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

c) 06 copias de facturas de ventas y servicios (N°18, 19, 20, 23, 24 y 25) de **“Hilda Magdalena Henríquez Cuevas”** “Servicio de Transporte de Personal, Servicios Especiales pagadas por AES GENER. Los documentos no eran auténticos pues no correspondían al giro de la imputada, no correspondían a documentación tributaria original de la contribuyente y daban cuenta de un servicio inexistente.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por Hilda Magdalena Henríquez Cuevas de los buses

placa patente única HDLW.80-1 y HDLW.79-8 y otra parte de la suma, recepcionada por Hilda Henríquez Cuevas en su cuenta 533-0-017976-9 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de Pablo Andrés Muñoz Giacaman y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a Pablo Andrés Muñoz Giacaman y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue Mario Arzola Henríquez quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a Hilda Henríquez Cuevas el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por Muñoz Giacaman, llevó a esta la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de esta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma.

I.- Acreditación de los hechos. -

En cuanto a que entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, se encuentra acreditado por los medios de prueba y en la forma señalada en capítulo I del número UNO precedente respecto a este mismo hecho.-

En cuanto a que en los dos créditos otorgados a Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, solicitados en Abril de 2015, y otorgados el 29 de abril de 2015 por \$88.290.129 (2041,86 UTM) y \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), **Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas Y Mario Arzola Henríquez** - hijo de Hilda y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por **Muñoz Giacaman** en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:

a) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DBPP.34-6, YB.4544- 1 y XV.5873-3, respectivamente de 26 de marzo, 13 de abril y 19 de marzo del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**.

Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DBPP.34, YB.4544 y XV.5873 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

b) Copia de contrato entre **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida, siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

c) 06 copias de facturas de ventas y servicios (N°18, 19, 20, 23, 24 y 25) de "**Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**" "Servicio de Transporte de Personal, Servicios Especiales pagadas por AES GENER. Los documentos no eran auténticos pues no correspondían al giro de la imputada, no correspondían a documentación tributaria original de la contribuyente y daban cuenta de un servicio inexistente.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por Hilda Magdalena Henríquez Cuevas de los buses placa patente única HDLW.80-1 y HDLW.79-8 y otra parte de la suma, recepcionada por Hilda Henríquez Cuevas en su cuenta 533-0-017976-9 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de Pablo Andrés Muñoz Giacaman y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a Pablo Andrés Muñoz Giacaman y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue Mario Arzola Henríquez quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a Hilda Henríquez Cuevas el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por Muñoz Giacaman, llevó a ésta la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de esta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma, se acredita mediante:

A) El testimonio de **Mario Arzola Henríquez**: quien manifestó que conoce al imputado Pablo Muñoz Giacaman, pero antes de conocerlo tenía una Pyme en Norte que arrendaba buses para prestar a empresas el servicio de traslado de personas, un amigo en común, Patricio Hermosilla los presentó, se juntaron en el mall, la idea era hacer un negocio de transporte con camiones, de ahí trabó una relación con Pablo Muñoz Giacaman y decidieron iniciar en conjunto una empresa para trabajar en el norte, pero él no podía aparecer formalmente, por cuanto sus informes comerciales no eran buenos, entonces Pablo Muñoz Giacaman le propuso incluir en la empresa alguien de su confianza que lo representara, para lo anterior hablo con su tía Ada Henríquez quien aceptó aparecer en la sociedad, que empezó trabajar arrendando buses y luego prestando servicios con ellos.- El año 2014 o 2015, no recuerda exactamente, Pablo Muñoz Giacaman le dio la idea de comprar los buses, ya que les salió un contrato en Calama. Le preguntó cómo

hacerlo, ya que no tenían recursos y la empresa era nueva, Pablo Muñoz Giacaman le dijo que él se encargaba de eso, pero que le consiguiera una persona que no tuviera DICOM, así se le ocurrió decirle a su mamá y le pidió que le ayudara, su mamá aceptó, pero ella no calificaba para los cuatro buses, de modo que necesitaban a otra persona, ya que el crédito para los cuatro buses, y no se podía con ella solamente. Así, hablaron con su tía Ana quien finalmente consintió, y entonces, su madre y su tía le firmaron los documentos que Pablo le pasó y se los entregó a Pablo firmados, luego Pablo le entregó otros documentos para que firmaran su madre y su tía y como su tía se ponía nerviosa, él le hizo la firma en esos documentos y se los entregó a Pablo Muñoz Giacaman. Ni su madre ni su tía tenían buses o eran empresarias de la locomoción. Se gestaron los créditos y se compraron los buses. Su madre y tu tía firmaron en la Notaria García de Concepción los instrumentos necesarios para gravar con prenda los buses comprados, sin embargo, el negocio no funcionó como se esperaba y no fue posible pagar los créditos.

B) El atestado de doña **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**, quien expuso que es la madre de Mario Arzola, (según se acredita también con el certificado de nacimiento de éste acompañado en la **documental n° 4**) es dueña de casa, no es ni ha sido empresaria de transporte, ni dueña de buses con anterioridad a los comprados con el crédito, tampoco ha efectuado declaraciones de impuesto, ni tiene cuenta corriente. Su hijo le propuso pedir un crédito en Banco Estado para comprar cuatro buses y trabajarlos en el norte, ella aceptó y firmó todos los documentos que su hijo le pidió, además, como a ella solo le prestaban dinero para comprar dos buses, convenció a su hermana Ana de firmar los papeles que su hijo le pasó para que ella pidiera otro crédito para comprar dos buses más. Su hermana Ana, (vínculo acreditado con los certificados de ambas, que fueron incorporados como prueba **documental n°5 y 6**) igualmente, era dueña de casa, no tenía buses, ni era empresaria del transporte. Además, ambas concurrieron a la Notaria García de Concepción a firmar los instrumentos para gravar con prenda los buses comprados. El negocio no funcionó y, en consecuencia, no pudieron pagar los créditos.

C) El testimonio de **Pablo Muñoz Giacaman**, -quien reconoce haber sido el ejecutivo que gestionó los créditos y que una parte de los fondos provenientes de ellos fueron a su cuenta corriente y a una impersonal con su cónyuge.

D) Documentos incorporados **otros medios de prueba Número 1, VII y VIII:** - vii. Carpeta correspondiente a HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene: **a)** Contrato Apertura Crédito por S 88.290.129 en 3 hojas, suscrito el 21 abril 2015, con firma y huella. **b)** Propuesta de Seguro Desgravamen incompleta, 2 hojas, con firma y huella de fecha 21 abril 2015. **c)** Mandato De Cargo de Primas, suscrito el 21 abril 2015. **d)** Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas, con firma y huella, de fecha 21 abril 2015 por \$7.000.000, por

\$88.290.129 y por \$2.000.000. **e)** Papeleta de Cierre de Negocios Firmada por Pablo Muñoz G. y la Jefe de Plataforma del banco el 22 abril 2015 por la suma de S 88.290.129. **f)** Hoja denominada "Consulta Consolidada de Saldo de Coberturas"

- viii. Carpeta a nombre de HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene: **a)** Contrato Apertura Crédito por \$88.290.339 en 3 hojas, suscrito el 27 abril 2015, con firma y huella. **b)** Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrita en 2 hojas, con firma y huella de fecha 27 abril 2015 por \$88.290.339. **c)** Papeleta de Cierre de Negocios Firmada por Pablo Muñoz G. y la Jefe de Plataforma del banco el 28 abril 2015 por la suma de \$88.290.339. **d)** Formulario para Operar Sin Seguro de Desgravamen Jefe Plataforma del Banco. **e)** 4 hojas de correos de fechas 27 y 28 abril 2015. **f)** Hoja denominada "Consulta Consolidada de Saldo de Coberturas".

E) Documentos incorporados en **otros medios de prueba número 6 letra e.** Carpeta asociada a Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, con copia de los siguientes documentos: - Información sobre estado de crédito, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos. - Antecedentes de Productos para pequeña empresa y Contratos asociados (incluido informe de visita y presentaciones de crédito) - Solicitud de crédito y documentos asociados, incluido: **i.** Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DBPP.34-6, YB.4544-1 y XV.5873-3, respectivamente de 26 de marzo, 13 de abril y 19 de marzo del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Hilda Magdalena Henríquez Cuevas. **ii.** Copia de contrato entre Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. **iii.** 06 copias de facturas de ventas y servicios (N°18, 19, 20, 23, 24 y 25) de "Hilda Magdalena Henríquez Cuevas" "Servicio de Transporte de Personal, Servicios Especiales pagadas por AES GENER.

F) Documento incorporado en **carpeta azul letra 6 E ii**, que acredita que *Copia de contrato entre **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses.* El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida, siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento, en circunstancia que según se acredita mediante la **documental número 23**, certificado expedido por AES Gener el documentos presentado falso en su formato y contenido.

G) Documentos incorporados en **carpeta azul letra E número 6** *Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DBPP.34-6, YB.4544- 1 y XV.5873-3, respectivamente de 26 de marzo, 13 de abril y 19 de marzo del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DBPP.34, YB.4544 y XV.5873 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original. La falsedad de estos documentos se acredita mediante certificados no adulterados,*

documental número 21 de la letra c, incorporada por el Ministerio Público y mediante declaración del **Claudio Marquínez Fuentes** quien es tajante en señalar la falsedad de los documentos presentados al contrastarlos con los originales obtenidos la página del Registro Civil.

H) Documentos incorporados en **carpeta azul letra E número 6, iii** que acredita que *06 copias de facturas de ventas y servicios (N°18, 19, 20, 23, 24 y 25) de “Hilda Magdalena Henríquez Cuevas” “Servicio de Transporte de Personal, Servicios Especiales pagadas por AES GENER* fueron presentados. Los documentos no eran auténticos, pues no correspondían al giro de la imputada, no correspondían a documentación tributaria original de la contribuyente y daban cuenta de un servicio inexistente según se acredita con **documental N° 23 y declaración de Mario Arzola**.

G) Que de la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por Hilda Magdalena Henríquez Cuevas de los buses placa patente única HDLW.80-1 y HDLW.79-8 y otra parte de la suma, recepcionada por Hilda Henríquez Cuevas en su cuenta 533-0-017976-9 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de Pablo Andrés Muñoz Giacaman y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a Pablo Andrés Muñoz Giacaman y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la obtención de los dineros producto del fraude, se demuestra mediante la declaración de todos los testigos precedentemente señalados, **facturas de compra de los buses incorporadas a fojas 126 y 137 de investigación sumaria y documental 27** incorporada, en especial declaración **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** que reconoce las trasferencias de fondos a sus cuentas corrientes (personal y bi personal) y cartolas de cuenta bipersonal incorporada en documental 25 y 26, y el certificado de matrimonio del acusado incorporado como **documental n°3**.

II.- Acreditación de participación en los hechos.

La intervención de los acusados Pablo Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez en los hechos precedentemente acreditados se encuentra establecida con las declaraciones de los propios imputados, y en la documental precedentemente señalada.-

III.- Calificación jurídica de los hechos, grado de desarrollo del delito y participación.

En concepto del fiscal y del querellante Consejo de Defensa del Estado, los hechos establecidos precedentemente corresponden al delito tipificado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal; a juicio del querellante Banco Estado

de Chile corresponderían al delito tipificado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos; y, a juicio de los imputados correspondería al delito contemplado en el artículo 470 del Código Penal o el señalado por el querellante Banco del Estado de Chile.

El Tribunal calificará jurídicamente estos hechos como el delito previsto en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, por las siguientes razones:

- El artículo 239 del Código Penal dispone:

“El empleado público que en las operaciones en que interviniera por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

En todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.”

- El artículo 239 citado se encuentra en el Título V del Libro II del Código Penal.

- El artículo 260 del Código Penal, que también se encuentra en el Título V del Libro II del Código Penal dispone:

Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.

De esta forma tal como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia citada en el punto III del número UNO de este considerando, los trabajadores del Banco de Estado de Chile, tienen la calidad de empleados para los efectos de los delitos tipificados en el Título V del Libro II del Código Penal.

Así a través de las operaciones descritas precedentemente en que intervino el imputado Pablo Muñoz Giacaman, todas en relación a su cargo de ejecutivo de cuentas del Banco del Estado de Chile, operaciones en las que participaron concertados los demás imputados, se defraudó o consintió en que se defraudara al Estado, por el monto de los créditos otorgados (crédito, línea de crédito y demás productos bancarios), pues el Banco no pudo recuperar ese dinero prestado, privándosele, además, de su lucro legítimo por dicho capital, el ilícito

cometido por el imputado corresponde al consagrado en el inciso tercero del artículo 239 del Código Penal, por cuanto el monto de la pérdida causada es superior a las cuatrocientas (400) unidades tributarias mensuales que exige la norma.

Estos hechos son constitutivos del delito de Fraude al Fisco respecto del imputado Pablo Muñoz Giacaman como autor y en los mismos términos en relación a los imputados Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez estableciéndose así, por la mayoría del tribunal, la comunicabilidad de la calidad de funcionario público que el primero mantenía, a los otros dos mencionados.

Empero, previo a dar los argumentos jurídicos para haber resuelto de ese modo, es necesario consignar los presupuestos de hecho que obtuvieron un alto grado de comprobación a través de los medios de prueba disponibles y que, por tanto, constituyen una factibilidad acreditada en juicio, la que permitió concluir que, no obstante no poseer las calidades de funcionarios públicos, podía considerarse que el tipo penal en ellos habían incurrido, era el de Fraude al Fisco, al operar la comunicabilidad de la calidad de tal que mantenía Muñoz Giacaman al momento de ejecutar el delito. Así, en primer lugar, el acusado Arzola Henríquez y las enjuiciadas Henríquez Cuevas sabían que Muñoz Giacaman cumplía la función de ejecutivo de cuentas en el Banco del Estado de Chile, tal como ha quedado suficientemente analizado precedentemente y, en segundo término, todos ellos no sólo planificaron y se concertaron para la obtención fraudulenta de dinero, sino también ejecutaron acciones que provocaron una merma económica a la entidad bancaria en que se desempeñaba aquél, que no era otra que el Banco del Estado que, de conformidad a la *Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile* (DL 2079/1977), es una empresa autónoma del Estado.

Como se puede vislumbrar, los hechos ejecutados por los acusados que no eran funcionarios públicos lo fueron en concierto con Muñoz Giacaman, con el objetivo de lograr una finalidad única y común, de tal suerte que, el comportamiento de uno sumado al de los otros, generó la disposición fraudulenta del dinero, siendo significativo el aporte de la conducta de todos ellos para la comisión del ilícito. De esta manera, se trata de un hecho único ejecutado por todos los acusados, por lo que debe ser sancionado por la misma figura típica, no pudiendo ser valorado jurídicamente de un modo diverso para todos los que intervinieron conjuntamente en él, como lo fue en este caso, por ser el mismo título de imputación (Novoa Monreal, Eduardo (2005) Curso de Derecho Penal Chileno. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. T. II, pág.211)

Pero, además, como se ha razonado en los motivos precedentes, los acusados que no tenían la calidad de funcionario público al momento de los hechos, participaron sabiendo y utilizando en su favor la calidad que investía Muñoz Giacaman, asumiendo que las maniobras por todos ellos realizadas en comunión, generaría un perjuicio al erario fiscal, lo que justifica que se les otorgue el mismo tratamiento jurídico.

Aquí no rige incomunicabilidad contemplada en el artículo 64 del Código Penal, por cuanto esa norma sólo se refiere a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, tal como se señala expresamente, no pudiéndole darle una interpretación más amplia de la que claramente contempla su literalidad y, por lo mismo, no operaría respecto de elementos del tipo penal, cual sería la calidad de funcionario público.

De esta forma, los principios de indivisibilidad de la imputación y de accesoriedad deben regir en este caso, atendido especialmente la particular forma de comisión del delito, a saber, un actuar conjunto que se sostuvo durante un periodo, presentando documentación a sabiendas falsa con la finalidad de obtener dinero mediante la concesión de créditos de consumo, lo que conlleva a sostener válidamente que el dinero así obtenido causaría un perjuicio al Banco del Estado. Este razonamiento recibe apoyo normativo en el artículo 61 regla 4ª del Código Penal, que se refiere a las *penas copulativas* y según el cual "... cuando una de dichas penas se impone al autor del crimen o simple delito por circunstancias peculiares a él que no concurren en los demás, no se hará extensiva a éstos", precepto en virtud del cual el legislador acepta expresamente la comunicabilidad, por cuanto esa regla parte de la base que aunque las penas se impongan *en razón de circunstancias particulares*, como lo sería el caso del funcionario público, sólo se aplicarán al autor en quienes concurren.

En este sentido sentencias de la E. Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de diciembre de 2015 rol 17.014-2015 y 24 de octubre de 2018 rol 13.123-2018.-

Por último, el delito de fraude al fisco que se encuentra en grado de consumado, por haberse desarrollado la totalidad de la conducta punible, cabiéndole participación a tres imputados como autores ejecutores, por haber tomado parte en su perpetración de una manera inmediata y directa conforme al artículo 15 n° 1 del Código Penal.

QUINTO: En relación a los hechos contenidos en el número cinco del auto de apertura, imputado por el Ministerio Público y el querellante Consejo de Defensa del Estado a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Ana Magdalena Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez y por el querellante Banco Estado de Chile a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas, Ana Magdalena Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez, cual es:

*"Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, quien se desempeñaba como "ejecutivo de negocios pequeña empresa "A" del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O'Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los*

requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, ”

En los dos créditos asociados a la clienta **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, solicitados en abril de 2015 y otorgados el 22 de abril de 2015 por \$88.221.883 (2040,28 UTM) y el 27 de abril del 2015 por \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), **Pablo Andrés Muñoz Giacaman y Ana Gladys Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez** – sobrino de Ana y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por Muñoz Giacaman en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:

a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas. El año 2014, **Ana Gladys Henríquez Cuevas** no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42- K, respectivamente de 26 de marzo y 22 de abril del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Ana Gladys Henríquez Cuevas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DPPP.36 y CJLJ.42 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Ana Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Copia de contrato entre **Ana Gladys Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** de los buses placa patente única HFSS.42-1 y HFSS.43-K y otra parte de la suma, recepcionada por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** en su cuenta 533-0-017988-2 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue **Mario Arzola Henríquez** quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a **Ana Henríquez Cuevas**, por intermedio de su madre **Hilda Henríquez Cuevas**, el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por **Muñoz Giacaman**, llevó la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de esta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma.

De esta manera, los montos de dinero asociados a los créditos obtenidos fraudulentamente con datos falsos, en los hechos señalados, ascendieron a lo menos a \$458.976.544 en créditos (más \$11.000.000 en líneas de crédito) y los dineros provenientes de los créditos, a lo menos \$75.060.000, fueron obtenidos por o para Pablo Andrés Muñoz Giacaman, a través de transferencias recibidas o cheques cobrados.

I.- Acreditación de los hechos. -

En cuanto a que entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, se desempeñaba como “ejecutivo de negocios pequeña empresa “A” del Banco Estado de Chile, en la sucursal ubicada en calle Avda. O’Higgins N° 486, comuna de Concepción, en el marco de sus funciones en

la gestión de clientes y gestión de venta, tramitó, evaluó y presentó al comité de créditos de dicha institución, solicitudes de créditos, tomando parte en la presentación de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de los clientes solicitantes, para que estos cumplieran con los requisitos exigidos por el Banco, para la obtención de determinados créditos a pequeñas empresas, condición que realmente no tenían, se encuentra probado por los medios de prueba y en la forma señalada en capítulo I del número UNO precedente respecto a este mismo hecho.- *En cuanto a que en los dos créditos asociados a la clienta **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, solicitados en abril de 2015 y otorgados el 22 de abril de 2015 por \$88.221.883 (2040,28 UTM) y el 27 de abril del 2015 por \$ 88.290.339 (2041,86 UTM), más una línea de crédito por la suma de \$2.000.000 (46,25 UTM), **Pablo Andrés Muñoz Giacaman**, **Ana Gladys Henríquez Cuevas** y **Mario Arzola Henríquez** – sobrino de Ana y socio de facto de Muñoz Giacaman – concertados, intervinieron en la solicitud de estos, haciendo uso de datos falsos respecto de actividades, estados de situación o patrimonio de **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, como empresaria del área del transporte – condición que no tenía – para posteriormente ser tramitados y presentados a aprobación los mismos por Muñoz Giacaman en las condiciones en que fueron aprobados. Dentro de los datos y antecedentes falsos se encontraban a lo menos:*

a) Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas. El año 2014, **Ana Gladys Henríquez Cuevas** no presentó Declaración Anual de Renta, siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

b) Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42- K, respectivamente de 26 de marzo y 22 de abril del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Ana Gladys Henríquez Cuevas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DPPP.36 y CJLJ.42 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Ana Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original.

c) Copia de contrato entre **Ana Gladys Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento.

De la suma de dinero asociado a los créditos obtenidos fraudulentamente, una parte sirvió a la compra por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** de los buses placa patente única HFSS.42-1 y HFSS.43-K y otra parte de la suma, recepcionada por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** en su cuenta 533-0-017988-2 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la obtención de los dineros producto del fraude.

En los hechos anteriores, fue **Mario Arzola Henríquez** quien, previo acuerdo con Pablo Muñoz Giacaman, propuso a **Ana Henríquez Cuevas**, por intermedio de su madre **Hilda Henríquez Cuevas**, el modo de obtención fraudulenta de los créditos ejecutado por **Muñoz Giacaman**, llevó la documentación necesaria para la solicitud del crédito, participó en el llenado y forjamiento de parte de ésta y posteriormente la entregó a Muñoz Giacaman para su tramitación, a sabiendas de la falsedad de la misma, se prueba mediante:

A) El testimonio de **Mario Arzola Henríquez**: quien expuso, que conoce al imputado Pablo Muñoz Giacaman, pero antes de conocerlo tenía una Pyme en Norte que arrendaba buses para prestar a empresas el servicio de traslado de personas, un amigo en común Patricio Hermosilla los presentó, se juntaron en el mall, la idea era hacer un negocio de transporte con camiones, de ahí trabó una relación con Pablo Muñoz Giacaman y decidieron hacer en conjunto una empresa para trabajar en el norte, pero él no podía aparecer formalmente, por cuanto sus informes comerciales no eran buenos, Pablo Muñoz Giacaman le propuso poner en la empresa alguien de su confianza que lo represente, para lo anterior habló con su tía Ada Henríquez (vínculo acreditado con el certificado de nacimiento de éste y la madre del acusado, incorporados **como documental 5 y 7**) quien aceptó aparecer en la sociedad (según consta de **documental 12, 13, 14**), que empezó trabajar arrendando buses y luego prestando servicios con ellos. El año 2014 o 2015 no recuerda exactamente Pablo Muñoz Giacaman le dio la idea de comprar los buses, ya que les salió un contrato en Calama. Le preguntó cómo hacerlo ya que no tenían recursos y la empresa era nueva, Pablo Muñoz Giacaman le dijo que él se encargaba de eso, pero que le consiguiera una persona que no tuviera DICOM, así se le ocurrió decirle a su mama y le pidió que le ayudara, ella estuvo de acuerdo, pero no calificaba para los cuatro buses, de manera que necesitaban a otra persona, ya que el crédito para los cuatro buses no se podía obtener con ella solamente. Entonces, hablaron con su tía Ana, quien finalmente aceptó y su madre y su tía le firmaron los documentos que Pablo le pasó y se los devolvió a Pablo firmados, luego Pablo le entregó otros documentos para que firmaran su madre y su tía y como su tía se ponía nerviosa, él le hizo la firma en esos documentos, y se los entregó a Pablo Muñoz Giacaman. Ni su madre ni su tía tenían buses o eran empresarias de la locomoción. Se gestaron los créditos y se compraron los buses, su madre y tu tía firmaron en la Notaría García de Concepción los instrumentos necesarios para gravar con prenda los buses comprados. Sin embargo, el negocio no funcionó como se esperaba y no fue posible pagar los créditos.

b) El testimonio de doña **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas** Es la madre de Mario Arzola, es dueña de casa, no es ni ha sido empresaria de transporte, ni dueña de buses con anterioridad a los comprados con el crédito, tampoco ha efectuado declaraciones de impuesto, ni tiene cuenta corriente. Su hijo le propuso pedir un crédito en Banco Estado para comprar 4 buses y trabajarlos en el norte, ella aceptó y firmó todos los documentos que su hijo le pidió, además, como a ella sólo le prestaban dinero para comprar dos buses, convenció a su hermana Ana de firmar los papeles que su hijo le pasó para que ella pidiera otro crédito para

comprar dos buses más. Su hermana Ana también era dueña de casa, no tenía buses, ni era empresaria del transporte. Asimismo, ambas concurren a la Notaria García de Concepción a firmar los instrumentos para gravar con prenda los buses comprados. El negocio no funcionó así que no pudieron pagar los créditos.

c) El testimonio de **Pablo Muñoz Giacaman**, quien reconoce haber sido el ejecutivo que gestionó los créditos y que una parte de los fondos provenientes de ellos fueron a su cuenta corriente y a una bipersonal con su cónyuge.

d) El testimonio de doña **Ana Gladys Henríquez Cuevas**: Que nunca ha trabajado, que es dueña de casa, no es ni ha sido empresaria de transporte, ni dueña de buses con anterioridad a los comprados con el crédito, reconociendo haber firmado los documentos para la obtención del crédito en Banco Estado para compra de dos buses, crédito que sería gestionado por Pablo Muñoz Giacaman a requerimiento de su hermana Hilda y de haber firmado en la Notaria García los instrumentos para gravar con prenda los buses comprados con los fondos del crédito, todo esto para ayudar a su sobrino Mario Arzola. Finalmente, reconoce haber tenido conocimiento que los créditos se obtendrían fraudulentamente.

e) Documentos incorporados **otros medios de prueba Número 1 i y ii**. Carpeta correspondiente a ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene: **a)** Original del Contrato de Apertura de Crédito por S 88.290.339, firmado el 27 abril 2015. **b)** Declaración de Consentimiento Recaudación y Pago de Comisión Fogain Corfo, de fecha 27 Abril 2015. **c)** Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrito el 27 Abril 2015. **d)** Papeleta de Cierre de Negocio de fecha 29.04.2019 firmada en original por Pablo Muñoz Giacaman y por la Jefa de Plataforma. **e)** 4 correos electrónicos respecto a la operación. **f)** Formulario para Operar Sin Seguro Desgravamen firmado por Pablo Muñoz Giacaman.

ii. Carpeta correspondiente a ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS que contiene: **a)** Original del Contrato de Apertura de Crédito por \$ 88.221.883, firmado el 22 Abril 2015. **b)** Mandato de Cargo de Primas, firmado el 23.04.2015. **c)** Propuesta de Seguro, firmado el 23.04.2015. **d)** Declaración Personal de Salud firmada el 23.04.2015 (3 hojas). **e)** Declaración de Consentimiento Recaudación y Pago de Comisión Fogain Corfo, de 22 Abril 2015. **f)** Solicitud de Productos Para Pequeña Empresa, suscrito el 23 Abril 2015 (2 hojas). **g)** Papeleta de Cierre de Negocio de fecha 29.04.2015 firmada en original por Pablo Muñoz Giacaman y por la Jefa de Plataforma. **h)** 4 correos electrónicos respecto a la operación.

f) Documentos incorporados en **otros medios de prueba número 6 letra f**. Carpeta asociada a Ana Gladys Henríquez Cuevas, con copia de los siguientes documentos: - Información sobre estado de créditos, incluidos antecedentes de liquidación y calendario de vencimientos. - Antecedentes de Productos para pequeña empresa y Contratos asociados (incluido informe de visita y

presentaciones de crédito).- Solicitud de crédito y documentos asociados, incluido:
i. Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas. **ii.** Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42-K, respectivamente de 26 de marzo y 22 de abril del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Ana Gladys Henríquez Cuevas. **iii.** Copia de contrato entre Ana Gladys Henríquez Cuevas y AES GENER S.A. de 15 de febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses.

g) Documento incorporado en **carpeta azul letra 6 F iii** que acredita que Copia de contrato entre **Ana Gladys Henríquez Cuevas** y AES GENER S.A. de 15 de Febrero de 2015, sobre servicio de arriendo de Buses. El contrato anterior con **Henríquez Cuevas**, nunca fue suscrito con la empresa referida, siendo falso su contenido y la mención de comparecientes en representación de la empresa, señalados en el documento, en circunstancia que según se acredita mediante la **documental número 23**, certificado expedido por AES Gener, el documento presentado es falso en su formato y contenido

h) Documentos incorporados en **carpeta azul, otros medios de prueba, número 6 letra Fiscalía** consistentes en Certificados de Anotaciones Vigentes de los vehículos DPPP.36-6 y CJLJ.42- K, respectivamente de 26 de marzo y 22 de abril del año 2015, con indicación de PROPIETARIO: Ana Gladys Henríquez Cuevas. Las referidas placas patentes no existen con el número verificador señalado y las placas DPPP.36 y CJLJ.42 no se encontraban, ni se encuentran registrados a nombre de **Ana Henríquez Cuevas** en el Registro de Vehículos Motorizado, siendo los certificados presentados adulteraciones de uno original. La falsedad de estos documentos se acredita mediante certificados no adulterados **documental número 21 de la letra C**, incorporada por el Ministerio Público y mediante declaración del **Claudio Marquínez Fuentes** quien es claro en señalar la falsedad de los documentos presentados al contrastarlos con los originales obtenidos la página del Registro Civil.-

i) Que la Declaración Anual del Impuesto a la Renta año tributario 2014 de Ana Gladys Henríquez Cuevas fue presentada consta en **documento incorporado en número 6 letra f, i.**, en circunstancias que el año 2014, **Ana Gladys Henríquez Cuevas** no presentó Declaración Anual de Renta, según se acreditó con documental incorporada por el Ministerio público **número 20** siendo el documento presentado forjado en su formato y contenido.

h) Que de la suma de dinero una parte sirvió a la compra por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** de los buses placa patente única HFSS.42-1 y HFSS.43-K y otra parte de la suma, recepcionada por **Ana Gladys Henríquez Cuevas** en su cuenta 533-0-017988-2 del Banco Estado, fue transferida el 06 de Mayo y 19 de Junio de 2015 en la suma total de \$10.700.000, a la cuenta Corriente Bancaria N°61-97476-8 del Banco Santander de **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y la suma de \$5.000.000, el día 11 de mayo de 2015, a la cuenta Bancaria 500100348899 del Banco BBVA (hoy Scotiabank) perteneciente a **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** y su cónyuge Francisca Andrea Vásquez Aguirre, para la

obtención de los dineros producto del fraude, se demuestra mediante el testimonio de todos los testigos precedentemente señalados, **facturas de compra de los buses incorporadas a fojas 126 y 137 de investigación sumaria y documental 27 incorporada**, en especial declaración **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** que reconoce las transferencias de fondos a sus cuentas corrientes (personal y bipersonal) y cartolas de cuenta bipersonal incorporada en **documental 25 y 26**.

II.- Acreditación de participación en los hechos.

La participación de los imputados Pablo Muñoz Giacaman, Ana Gladys Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez en los hechos precedentemente acreditados se encuentra establecida con las declaraciones de los propios imputados, y en la documental precedentemente señalada.-

Que en cuanto a la participación en estos hechos de doña Hilda Magdalena Henríquez Cuevas atribuida por el querellante Banco Estado de Chile, es Tribunal esta que la prueba rendida e incorporada en autos, no generar la convicción suficiente para establecer su responsabilidad criminal en este hecho.

III.- Calificación jurídica de los hechos, grado de desarrollo del delito y participación.

En concepto del fiscal y del querellante Consejo de Defensa del Estado, los hechos establecidos precedentemente corresponden al delito tipificado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal; a juicio del querellante Banco Estado de Chile corresponderían al delito tipificado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos y, a criterio de los imputados correspondería al delito tipificado en el artículo 470 del Código Penal o el señalado por el querellante Banco del Estado de Chile.-

El Tribunal calificará jurídicamente estos hechos como el delito contemplado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, por las siguientes razones:

- El artículo 239 del Código Penal dispone:

“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

En todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.”

- El artículo 239 citado se encuentra en el Título V del Libro II del Código Penal.-

- El artículo 260 del Código Penal, que también se encuentra en el Título V del Libro II del Código Penal dispone:

Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.

De esta forma tal como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia precedentemente citada los trabajadores del Banco de Estado de Chile, institución autónoma del Estado, en conformidad al artículo primero del D.F.L. 2079 del año 1977 tienen la calidad de empleados para los efectos de los delitos tipificados en el Título V del Libro II del Código Penal

De modo que, a través de las operaciones en que intervino el imputado Pablo Muñoz Giacaman, todas en relación a su cargo de ejecutivo de cuentas del Banco del Estado de Chile, concertado con Ana Gladys Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez, defraudó o consintió en que se defraudara al Estado ocasionándole una pérdida, por el monto de los créditos otorgados (crédito, línea de crédito y demás productos bancarios), pues el Banco no pudo recuperar ese dinero prestado, privándosele, además, de su lucro legítimo por dicho capital.

Estos hechos son constitutivos del delito de Fraude al Fisco respecto del imputado Pablo Muñoz Giacaman en calidad de autor y en los mismos términos respecto a los imputados Ana Gladys Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez, estableciéndose así, por la mayoría del tribunal, la comunicabilidad de la calidad de funcionario público que el primero mantenía, a los otros dos mencionados, por las razones señaladas en el capítulo III del número 4 de este considerando, extensibles en este caso a los acusados Ana Gladys Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez.-

Por otra parte, el ilícito cometido por los imputados corresponde al tipificado en el inciso tercero del artículo 239 del Código Penal, por cuanto el monto de la pérdida causada es superior a las cuatrocientas (400) Unidades Tributarias Mensuales que exige la norma.

El delito de fraude al fisco que se encuentra en grado de consumado, por haberse desarrollado la totalidad de la conducta punible, cabiéndole participación a los imputados como autores ejecutores, por haber tomado parte en su perpetración de una manera inmediata y directa conforme al artículo 15 n° 1 del Código Penal.

DÉCIMO QUINTO: Alegatos de clausura.

Al clausurar, el **Ministerio Público** hizo un repaso de la prueba incorporada en juicio respecto de cada uno de los delitos por los cuales formuló acusación aseverando haber acreditado cada uno de los supuestos de aquellos. Justificó la calificación jurídica que atribuyó, entregando argumentos de texto, de carácter doctrinario y citando múltiples sentencias, tanto de la Exma. Corte Suprema, como de Corte de Apelaciones y de tribunales de primera instancia. Se refirió a la calidad de empleados públicos de los trabajadores del Banco Estado, y explicó latamente que tal calidad se comunica a los copartícipes, citando igualmente jurisprudencia al efecto. Pidiendo, en definitiva, condena para cada uno de los acusados respecto de los hechos que le fueran atribuidos en la acusación.

La querellante **Consejo de Defensa del Estado** complementó el alegato de la Fiscalía, entregando más jurisprudencia y complementando las ideas en cuanto al concepto de empleado público, su comunicabilidad a los extraneos, justificando que se trata de un delito de fraude al fisco, y descartando que sea el delito del artículo 160 de la Ley de Bancos. Manteniendo su petición de condena en la forma indicada en la acusación fiscal.

Por su parte, el **querellante Banco del Estado de Chile**, sustentó su posición que se trata del delito contemplado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, dando argumentos de texto, y citando jurisprudencia de la Contraloría General de la República a fin de establecer que los funcionarios del Banco Estado no son empleados públicos y que, en consecuencia, no les es aplicable el Código Penal en materia de delitos funcionarios. En definitiva, pidió se condene a todos los acusados como autores del delito previsto en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, a las penas señaladas en su acusación particular, y basado en la misma prueba rendida en juicio pidió se acoja también la demanda civil entablada en contra de todos los acusados.

La **defensa del Sr. Pablo Muñoz Giacaman**, estima que la calificación jurídica de los hechos atribuidos a su representado corresponde al previsto en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, y al efecto, cita la ley 21.121 que modificó el Código Penal y otras normas para la prevención, detección y persecución de la corrupción.

En relación a la calificación del delito como fraude al fisco, argumenta que, de acuerdo a la nueva normativa y a la nueva doctrina, si una persona realiza la conducta de fraude al fisco, pero no tiene la calidad de funcionario público, responderá a título de autor de la figura del artículo 470 número 1 del Código Penal. Este es el caso del señor Giacaman pues, no desarrollaba una función pública, de manera que está mal acusado.

En cuanto a la calidad de funcionario público de su representado, está definido en el artículo 260 Código Penal, el cual debe interpretarse restrictivamente y no contra reo, porque ello lo prohíbe el principio de legalidad que trasunta en normas constitucionales, también el principio de tipicidad y de aplicación de la ley penal más favorable. Además, en cuanto al concepto de empleado público la actividad privada tiene incidencia en la actividad estatal y el solo hecho de trabajar en una empresa que realice una actividad estatal no

permite afirmar su calidad de funcionario público. En definitiva, la función pública refiere a quien realiza un cargo o función pública, y respecto de esta última, actualmente prima el concepto de la teoría mixta que sostiene que se refiere a que la función dice relación con un régimen de giro de la institución pública en relación a la actividad del estado, el giro de la empresa debe ser un giro público, no un giro privado. Asimismo, se agrega que persiga fines públicos y que la función pública se realice mediante actos sometidos al derecho público. Estima que la actividad realizada por su representado, como ejecutivo de cuentas de la pequeña empresa, se refiere a las relaciones que gestiona como intermediario un banco, regulado por la legislación bancaria, aplicable a todos los bancos del sector privado comercial.

Destaca la competencia del funcionario público, quien debe tener poder legítimo de disposición del patrimonio público y en este caso, tratándose de la disposición patrimonial de una empresa del Estado, algún rol tendrá los estratos superiores al ejecutivo de cuenta y se puede concluir que no tenía la legítima disposición sobre los bienes del Estado, sino que su conducta consistió en obtener créditos para él y para terceras personas mediante documentos falsos.

En cuanto a las fuentes de la competencia de un funcionario público, son la ley, una potestad reglamentaria, una orden de autoridad, jamás circunstancias de hecho y no contratos privados regidos por la ley laboral. Si bien hay fallos que dicen que no es óbice que tenga contrato de trabajo, ello debe ser interpretado con los otros elementos antes señalados.

De esta forma, no podía el Ministerio Público acusar por fraude al fisco sosteniendo que se daban esos elementos del tipo, porque su representado era un ejecutivo del Banco Estado y la actividad que desarrollaba era la propia de la esfera privada y no se le podía considerar funcionario público, y la norma a aplicar era el artículo 160 de la Ley General de Bancos, respecto del cual ni siquiera existe un concurso aparente de leyes penales.

Si se analiza la figura del artículo 160 de la Ley General de Bancos los hechos 4 y 5 de la acusación implican la obtención de créditos con datos falsos y entre ellos acerca de la identidad de los requirentes del crédito, la conducta es subsumible en este tipo penal, aseverando que no es posible afirmar que un ejecutivo de Banco Estado no que puede cometer el ilícito del artículo 160 y siempre cometerá fraude, ya que esta disposición no restringe el sujeto activo a particulares, puede ser su representado o alguno de los solicitantes del crédito. Aclara que el Banco Estado es un banco público que desarrolla actividades privadas dentro de la esfera de la comercial. Esta figura penal, al igual que la estafa y la administración desleal del patrimonio ajeno, requiere ocasionar perjuicio a la institución. Basta leer la acusación para entender que la conducta de su representado en la figura 4° y 5° es subsumible en este tipo penal, porque está claramente establecido que los créditos fueron obtenidos por él pero, como no los podía pedir él porque era funcionario de Banco Estado, se pidieron a través de interpósita persona. Esa es la norma jurídica que corresponde aplicar para satisfacer los principios constitucionales subyacentes a la tipicidad. Respecto de los hechos 1, 2, 3 de la acusación, entiende que la figura también es subsumible en el artículo 160 de la Ley General de Bancos toda vez que lo que se hizo, por parte de su representado y participando estas terceras personas, fue la obtención

de créditos de una empresa pública con datos falsos, parte de ese crédito fue a parar al bolsillo de su representado.

Finalmente, se refirió a las declaraciones prestadas por su defendido durante la investigación y su deposición ante este tribunal, y someramente a la prueba rendida en juicio, ya que según reconoció el centro de la discusión es de carácter jurídico. Haciendo hincapié en la especial condición anímica de su representado en la comisión de estos delitos alegando que no se le puede dar el mismo tratamiento que a un delincuente profesional, y en este caso, se trata de una persona que por alguna situación desafortunada cometió un ilícito. Debe tener una sanción, pero no puede ser medido con el mismo baremo. Debe considerarse su consumo de drogas y adicción al juego, la cual fue reconocida por el perito de la defensa como una enfermedad que permite comprender la ilicitud de la conducta, pero que entorpece el proceso de formación de la voluntad.

Termina señalando que, desde el punto de vista jurídico, es una cuestión compleja porque en esta causa se incorpora doctrina y normativa nueva que debe ser ponderada pues, la interpretación del delito de fraude al fisco es distinta y el devenir del funcionario público es diverso. Estima que su representado no ha cometido fraude al fisco y el ilícito cometido es el del artículo 160 de la Ley General de Bancos y, en último caso, sería la figura residual del artículo 470 del Código Penal.

La defensa de los acusados Mario Arzola Henríquez, Hilda Henríquez Cuevas y Ana Henríquez Cuevas, hizo presente la colaboración prestada por sus representados desde los inicios de la investigación, tanto prestando declaración como accediendo voluntariamente a diligencias que facilitaron la investigación.

Refiere, respecto de Mario Arzola, que está acreditado, primeramente, que los cheques que cobró por \$13.330.000 y \$13.360.000, girados a nombre de René Muñoz Mera, desconociendo su verdadero origen y sin que recibiera parte alguna de los fondos, haciendo entrega de su totalidad a Pablo Muñoz Giacaman, según reconoció el mismo y según dan cuenta los peritajes caligráficos a que se sometió voluntariamente. Asimismo, admitió su participación en el forjamiento de la documentación falsa para comprar los buses, lo que es relevante pues, pues le significó una reformatización por nuevos hechos y la acusación por fraude al fisco.

En cuanto a Hilda Henríquez Cuevas, con la declaración prestada ante el fiscal y en este juicio, se acreditó su participación específica en estos hechos lo que se reflejó con las pericias de Poul Yañez y de Ximena Hermosilla. Ella puso su firma en estos contratos motivada para ayudar a su hijo Mario Arzola, firmó documentos para la compra de estos dos buses al Banco Estado, idea de Pablo Muñoz pues, sin la participación y ayuda de éste, jamás habría sido posible la obtención de estos créditos. Su participación, específicamente, fue la firma de documentación bancaria para la obtención de estos créditos en la huella dactilar y nada más. Respecto a la cuenta corriente, línea de crédito que se abrieron a su nombre, ella nunca tuvo conocimiento de la apertura de ellas ni tampoco recibió dinero alguno por esto concepto, quedó demostrado que estos dineros fueron transferidos de esas cuentas a las del señor Muñoz Giacaman.

Respecto de los dos buses que adquirió, hizo entrega voluntaria al Banco Estado de ellos, primero se hizo parte en las causas del 1° Juzgado Civil de Concepción, lo que probó con prueba de su parte (b, 1 al 13) poniendo a disposición los buses e indicando donde se encontraban ubicados.

En lo tocante a Ana Henríquez Cuevas, declaró ante fiscal y en este juicio, y con ello se acreditó su participación, que consistió solo en la firma de una carpeta de crédito de Banco Estado, que se negó en un principio, pero por ayudar a su hermana, accedió. No tuvo ninguna participación en el forjamiento de otra documentación y así lo declaró siempre. También se sometió a pericias caligráficas voluntariamente. Respecto de la apertura de cuenta corriente y línea de crédito, se confirmó con la prueba documental consistente en la investigación interna del Banco Estado, la declaración de Claudio Martínez, copias de transferencias de las cuentas, que no tuvo participación en la apertura de las cuentas, en el uso de los fondos y tampoco utilizó dichos dineros en forma alguna. Respecto de los buses que adquirió, asimismo, se hizo parte en la causa civil, del 2° Juzgado Civil de Concepción, lo que se demostró con la prueba documental de la Defensa haciendo entrega voluntaria de los mismos al Banco Estado.

Agrega que tanto la señora Hilda como la señora Ana, hicieron entrega al Banco Estado de estos buses, reparando el daño causado y haciendo devolución de ellos. Respecto a que estos créditos eran con garantía estatal FOGAIN, igualmente, se demostró, con prueba documental consistente en la investigación interna del Banco Estado y declaración de Claudio Martínez y Silvia Pérez Manríquez, que no existió perjuicio económico para el Estado, ya que la pérdida la asumió íntegramente el Banco Estado, de manera que, a su respecto, las garantías estatales fueron caducadas.

Respecto de la calificación jurídica de los hechos, no comparte lo señalado en la acusación por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado pues, los hechos no se enmarcan en el delito de fraude al fisco pues, sus representadas no tienen calidad de empleados públicos, como lo establece el artículo 260 del Código Penal, ni siquiera Pablo Muñoz. Añadiendo que, no pueden quedar ligados jurídicamente a la misma suerte y calificación típica de aquellos autores o partícipes que poseen la calidad típica de empleado público. Esta calidad no la tiene el extraneus y, en este caso, se tiene que atenuar la responsabilidad respecto del sujeto calificado, ya que se necesita una aplicación más bien restringida o limitada para la pena. Cada partícipe debe ser castigado según la naturaleza del delito que comete por lo que nunca puede extender el delito de otro. Si no existe norma expresa al respecto, las cualidades personales nunca pueden comunicar al extraneus, quien solo puede responder tratándose de los delitos especiales impropios, por el delito común aplicable y para este caso el delito aplicable sería la estafa del artículo 470 del Código Penal y no el del artículo 239 del mismo texto, de fraude al fisco. Sus representadas no reúnen las calidades del tipo penal pues, si bien adquirieron esos buses o más bien, concurrieron a la firma para la compra de ellos, el destinatario de éstos y del dinero, nunca fueron ella, lo que se incorporó con la prueba del Ministerio Público

En cuanto a la pena, atendida la participación de sus representadas en los hechos y la colaboración vital para el esclarecimiento de los hechos, unido a que se hizo entrega voluntaria de los bienes adquiridos, solicita se les conceda a sus tres representados, la atenuante del artículo 11 n° 9 del Código Penal y se les estime como muy calificada. Asimismo, solicita respecto de Hilda Henríquez Cuevas y Mario Arzola Henríquez, la atenuante del artículo 11 n°6 del mismo Código. Finalmente solicita en favor de Hilda y Ana Henríquez Cuevas, la atenuante del artículo 11 n°7 del Código Penal.

Por todas las razones señaladas y la prueba incorporada, pide respecto de Ana Henríquez Cuevas, la absolucón.

DÉCIMO SEXTO: Réplicas.

Que, replicando el Ministerio Público añadió en la parte de hechos, en relación a Pablo Muñoz Giacaman, no hay controversia relevante en cuanto a los hechos, las discrepancias sobre las condiciones de colaboración ya ha sido expuestas. Respecto del eventual vínculo que propone la defensa respecto de los afectados de los hechos 1, 2 3 con el señor Beltrán y desde ahí con el imputado, respecto de José Sepúlveda no se ha dado ninguna referencia sobre el punto. No es cierto que se haya pedido una diligencia de investigación como la que refiere el defensor y que se haya denegado. En relación con la especial disposición anímica como circunstancia de hecho del imputado Muñoz Giacaman, nada se ha acreditado. La pericia no fue controvertida porque no tiene ni su método ni en sus conclusiones, los elementos de fundamento que permitan dar por establecidos hechos ocurridos entre 2014 y 2015 a partir de la sola entrevista del imputado, los principios científicamente afianzados, no permiten establecer que una persona, en condición singular y a través de una comunicación de una hora pueda, respecto de un adulto, entregar elementos de hecho que no han sido sostenidos por ningún otro medio de prueba, ni siquiera un familiar cercano. Además, no hay ninguna petición jurídica de la que se pueda hacer cargo y entiende que es por la extensión pena.

En cuanto a los elementos de hecho del resto de los imputados, no hay elementos de hecho que se hayan controvertido, quien haya pagado no tiene trascendencia, según ya se explicó. Respecto de la petición final de absolucón no hubo en las clausuras elementos que la sustenten y las réplicas no serían el momento para hacerlo pues ellas solo se refieren a conclusiones y a aspectos jurídicos.

Respecto de Pablo Muñoz Giacaman, las cuestiones de comunicabilidad no son relevante en su lugar, sí la calificación jurídica del delito pues, la comunicabilidad tiene implicancia para el resto. La ley 21.121 que se usa para citar doctrina de manera genérica y sin citar jurisprudencia, dicha ley no modifica el artículo 239 en la redacción del tipo penal ni el artículo 260 en relación a quienes se entiende que son empleados públicos. Concuerda con el defensor de Muñoz Giacaman en cuanto a que efectivamente no se puede recurrir a criterios administrativos para determinar la condición de empleado público y esa circunstancia es la que el abogado querellante del Banco Estado no ha tenido

presente al hacerse cargo en sus conclusiones respecto de la calificación jurídica que el Ministerio Público sostiene. Con desdén se refiere a las argumentaciones dogmáticas que han citado con texto expreso, con autores específicos, con jurisprudencia concreta y luego el colega cita dictámenes de contraloría.

El razonamiento de la condición de empleado público del funcionario del Banco Estado, ni en alegaciones de las Defensas ni del querellante Banco Estado, han tenido el mínimo sostén doctrinario ni jurisprudencial, a lo más una forzada y novísima posición exegetica, que no se hace cargo de cuestiones sistemáticas desde que no indica a que empresas autónomas se refiere el artículo 260 y a cuáles no. Si todas las empresas autónomas del Estado en sus leyes orgánicas, entre ellas el Banco Estado en el artículo 3 definen su función pública, que es aquella que las pone en la especial condición. El querellante, y el defensor se ha tomado de aquello también, pretende poner al Banco Estado una condición especialísima que no tiene, porque las normas de la Ley 1.350, que crea Codelco, del cual latamente se ha mencionado jurisprudencia, que en términos temporales no son distintas de las que regulan a Banco Estado y respecto de Codelco, se rige por las normas de las sociedad anónimas abiertas, en cuanto no se oponga a las disposiciones de esa ley orgánica, y en relación con otras normas que contiene esa mismas ley, las normas dictadas para las empresas del sector público, empresas del estado, sociedades con participación estatal u otra denominación semejante, solo serán aplicables a la Corporación Nacional del Cobre en caso de que se haga referencia expresa a ella en la norma legal respectiva (artículo 25 ley de Codelco). Así y todo, antes y hoy se sigue entendiendo que los funcionarios de empresas autónomas son funcionarios públicos. Solo agrega la sentencia dictada en el rit 12-2012 de 25 mayo de 2012 del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, en un delito de malversación de caudales públicos al interior del Banco Estado, en la que el banco fue querellante particular, adhiriendo a posición del Ministerio Público, sosteniendo la condición de funcionario público. Asume que el querellante Cerliani reconocerá que lo que dice el defensor no es efectivo en términos de las condiciones de la querella del Banco Estado y que, en enero de 2020, antes de que se decretara la prisión preventiva del señor Muñoz Giacaman, dirigió su acción en querella por el delito de fraude al fisco en contra de Muñoz Giacaman. Para que no se diga que es el fiscal quien está torciendo la conducta del Banco Estado durante el procedimiento. Desconoce las razones para este cambio de opinión y para salirse de la doctrina que el mismo banco ha sostenido y apoyado.

El defensor de Pablo Muñoz Giacaman habla en relación del tipo penal que el imputado debe tener un poder de disposición directo en los fondos y probablemente está hablando del delito de malversación, porque la conducta típica del delito de fraude al fisco es defraudar o consentir en que se defraude. De acuerdo a los profesores Rodríguez Collao y Ossandon Widow, en la obra "Delitos contra la función pública", página 418, no necesariamente debe constituir una acabada mise en scène, incluso el perjuicio puede provenir, en el caso del fraude al fisco, del incumplimiento de los deberes funcionarios, aunque no exista propiamente un engaño, si bien, habitualmente, habrá a lo menos una mentira. En el mismo sentido los profesores Etcheberry, en su obra "Derecho Penal", página

247 y Urrejola González en “Fraude al Estado” como medio para cometerlo basta por sí solo para su perpetración. Así también lo ha entendido la jurisprudencia que requiere el engaño, abuso de confianza o mala fe del funcionario, sin exigir un especial ardid de su parte precisamente debido a la posición del funcionario, la dinámica defraudatoria no pasa necesariamente por el despliegue de un engaño hacia otra persona, ya que es por definición el funcionario con capacidad de decidir el resultado del proceso por su intervención en el que realiza la operación fraudulenta. En este caso la unidad de medida, de control respecto de la autenticidad de la información estaba en manos de Muñoz Giacaman, por eso hay fraude en su acción porque hay a lo menos una mentira, lo que esperaban sus superiores y el Comité era información verdadera conforme a sus deberes. Las reglas sobre el establecimiento de la conducta típica, manifestadas en el texto de Rodríguez y Ossandón, son las que regularmente describen la conducta de fraude en el contexto del artículo 239. No hay otra referencia doctrinal que invite a una posición como la planteada por el defensor.

El artículo 160 no es aplicable en la especie, ni el artículo 468 ni el artículo 473, porque eso supone que el imputado Pablo Muñoz Giacaman no es empleado público, conforme al artículo 260 del Código Penal. La doctrina y jurisprudencia mencionada y los fundamentos que ella contiene, incluido el sistemático de la comparación con otras empresas del estado, donde se obra, desde el punto de vista de la interpretación penal, del mismo modo, que en los casos del Banco Estado ya citados. La condición de engaño o estafa al fisco, supone respecto de Pablo Muñoz Giacaman quitarle la condición esencial que es la de empleado público. En la medida que es empleado público, las condiciones de los fondos asociados, es la que permite que se haga de todo o parte de ellos por terceros o sí mismo. Siendo un sujeto calificado que tiene una norma especial, no puede aplicarse el 468 ni el 473 del Código Penal.

En cuanto a la atribución a Ana Henríquez Cuevas de la condición de encubridora, atendido el hecho que tenía conocimiento de la actividad que se iba a realizar, de la actividad o condición de Pablo Muñoz Giacaman y haber participado directamente en el retiro de los vehículos como producto del delito del artículo 239, a su respecto la condición sigue siendo la del artículo 15 en su número 3, a lo menos. Respecto de la invitación del defensor de esta acusada, no se puede hacer cargo de la petición a absolución.

Por su parte, en su oportunidad de réplica la **querellante Consejo de Defensa del Estado**, manifestó que refuerza la posición de Ministerio Público en una cuestión esencial, también referida por el defensor de Muñoz Giacaman al referirse reiteradamente al profesor Balmaceda, en relación a lo que se entiende por empleado público, que es la piedra angular del resto de las calificaciones jurídicas, y cita un trabajo del mismo profesor “Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en los delitos contra la función pública”, Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Sección Estudios, año 19, número 2, 2012, páginas 45 a 81. Específicamente se refiere al concepto jurídico de funcionario público, lo que cita la querellante. Este pasaje es el mismo referido por el defensor, pero en relación a los notarios y conservadores, sin embargo este autor

habla de los empleados del Conservador de Bienes Raíces y entiende que estos empleados, pagados con dinero que genera el Conservador de Bienes Raíces, son empleados público. De esta manera, si se trata de una empresa autónoma del Estado, como sostiene el profesor Francisco Grisolia en la causa Dávila y otros, que es la causa de Codelco, fojas 3643, “por cargo público debe entenderse una vinculación al Estado de carácter permanente o transitoria, proveniente del desempeño de funciones políticas, administrativas, judiciales o municipales, el concepto es amplio y comprende las funciones no solo políticas y de la administración pública fiscal, sino también las desempeñadas en los servicios de la administración descentralizada”. Afirma la querellante que el Banco del Estado es una empresa autónoma del Estado, es un órgano descentralizado tanto territorial como institucionalmente. Continúa señalando que “en este concepto quedan comprendidas todas las instituciones fiscales, organismos de administración autónoma, empresas del Estado, servicios Municipales, organismos creados por el Estado dependientes de él, etc., todos ellos son entidades de carácter público, cualquiera sea el régimen de previsión a que estén sometidos sus integrantes”

Llama la atención la postura del Banco del Estado en cuando a que no es una empresa del Estado y que sus funcionarios no son funcionarios públicos, cuando la misma ley orgánica constitucional DL 2.079, señala en su artículo 4º que “el capital autorizado del Banco Estado es de cuatro mil millones de pesos y se enterará con los fondos que actualmente tiene contabilizados como capital y reservas en moneda nacional. Si dicho fondo no se alcanzare para completar el capital autorizado, éste se enterará con cargo a revalorizaciones o a utilidades que se produzcan en futuros ejercicios. Este capital podrá ser aumentado por Decreto Supremo, previo informe favorable de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras”. De esta manera, si el capital del banco Estado, con el que se paga a los funcionarios, puede ser aumentado por Decreto Supremo, es porque es aumentado con plata fiscal. Que el banco tenga ganancias o no, no elimina el hecho de que no se trate de dineros públicos, porque el artículo 239 de fraude al fisco no solo contempla el daño emergente, sino también el lucro cesante pues, no solo habla del lucro legítimo al que se tiene derecho para poder obtener algún dinero. En este caso, el Banco Estado es una empresa lucrativa para el fisco de Chile, obtiene beneficios económicos y un lucro y el 239 lo incluye. Si el artículo 239 no hubiere incluido el concepto del legítimo derecho que tiene de percibir algún lucro, no se podría haber incluido el Banco Estado.

En este contexto, estamos ante un funcionario público y hay una comunicabilidad para las personas que participan en la ejecución de este hecho, porque efectivamente hay un título de imputación y éste, de acuerdo al profesor Garrido Montt, debería ser considerado desde el dolo. Es un hecho público y notorio que este Banco es del Estado de Chile, por lo que cualquiera persona, con un mínimo conocimiento, sabe que si obtiene un crédito de este Banco, defraudó al Estado de Chile en su aspecto económico. Agrega que la señora Ana lo sabía, participó con conocimiento, fue a firmar, que haya querido atenuar su participación, no se condice con el hecho de que haya ido a firmar las prendas. Es más, en su declaración, la señora Hilda refiere que ella le dijo a su hermana y que

Ana sabía que iban a obtener los créditos de manera fraudulenta, razón por la que se negó, por eso le tuvo que insistir y finalmente accedió con el conocimiento que estaba actuando para defraudar. Por eso no entiende que pueda ser considerada como cómplice.

Respecto del artículo 160 de la Ley General de Bancos, la defensa de Muñoz Giacaman nunca acreditó que él no podía pedir créditos como funcionario del Banco Estado, nada se sabe, no se consultó sobre esa temática. Mal se podrá tener por acreditado que no podía y por ello recurrió a esta figura de falsificación. Lo que hizo fue defraudar al banco, porque el banco le dio una confianza, se desprende de cierta responsabilidad en los actos porque confía y de esa manera él tiene el control respecto de conferir los créditos y por eso engaña a sus superiores o a sus colegas. Esas son las figuras que establece el artículo 239 respecto de Muñoz Giacaman.

Estima que debe aplicarse la teoría de la comunicabilidad y por lo mismo desecha la aplicación de las figuras de los artículos 468 y 473.

En cuanto a petición de absolución, en los alegatos de apertura no escuchó que su teoría se basara en la absolución de la señora Ana, ni en su alegato de clausura, al reconocer que ella había participado en los hechos, por lo que no se puede pronunciar sobre ello porque no ha habido debate ni fundamento alguno.

Por su parte, el querellante Banco del Estado, manifestó que nunca ha actuado con desdén. El hecho de defender una postura con texto expreso, sin recurrir a jurisprudencia o doctrina, es por una razón obvia ya que estima que el sentido de la ley es claro. Señala que efectivamente el Banco del Estado es una institución del Estado, sin embargo, los funcionarios de este Banco, en función de lo que le corresponde al Banco del Estado de Chile, no son funcionario público. En forma errada se han hecho comparaciones con Codelco y otras empresas del Estado, sin embargo, la función del Banco del Estado es esencialmente bancaria, lo que consta en el artículo 3° de la Ley Orgánica, en los artículos 29 y 40 de la Ley General de Bancos, que indica que es un banco. En la parte final del artículo 3° de la Ley Orgánica del Banco se señala una situación distinta que se refiere a que el banco ejerce una función pública de manera excepcional, no día a día en que actúa como cualquier banco de Chile. Está sujeto al artículo 40 de la Ley General de Bancos, que describe qué es un banco. El Banco del Estado, conforme a esta última ley, está autorizado para realizar 27 operaciones bancarias y cuando realiza función pública, lo hace de manera excepcional pues, no es su giro. Por eso, quienes trabajan en el Banco del Estado no son funcionarios públicos.

En cuanto a la ampliación de la querella que se hizo en esta causa, indica que es una situación conocida por el fiscal pues él la solicitó y no se va a referir a ello, solo indica que ampliaron la querella porque estimaron, en ese momento, que los dineros del Fogain, que son dineros del fisco, habían sido mucho mayores que lo que realmente había sido defraudado o pagado, sin embargo, del Fogain lo que se pagó fue muy poco y el perjuicio en gran medida lo sufrió el Banco del Estado, de manera que presentaron la querella pues el perjuicio al fisco, en la medida que

haya pagado Fogain, es mayor. Solo por eso, no porque detrás de esto haya un funcionario público.

Respecto de la referencia del Consejo de Defensa del Estado al fallo 12-2012 de Punta Arenas, es una situación distinta a lo que hoy se discute, donde procede la aplicación del artículo 160 del Ley General de Bancos, norma especialísima que deja fuera la aplicación del Código Penal. En razón de ello no procede la aplicación de los artículos 468 y 473.

En cuanto a la situación de la señora Ana, respecto de su absolución, lo deja entregado al Tribunal.

Por otro lado, **replicando el defensor del acusado Pablo Muñoz Giacaman**, aclara que solicitó no en una oportunidad sino que reiteró como diligencia al fiscal, respecto de Sepúlveda, afirmando que tenía certeza que se habría cobrado cheques, lo que solicitó que se oficiara al banco para que informara como se habrían cobrado los documentos y el monto de los mismos. Además agrega que la querella presentada por Banco del Estado el 15 abril de 2016, por fraude y uso de instrumento privado y público adulterado, refiere expresamente la situación del artículo 160 de la Ley General de Bancos.

Precisa que el profesor Balmaceda nunca ha sido partidario de la comunicabilidad en este tipo de delitos y en virtud de la democratización del conocimiento, en página You Tube, el profesor da una charla completa en relación a su pensamiento en cuanto a la malversación y fraude al fisco, a propósito de la ley 21.121 y señala que tuvo cambios en su postura, por lo que toda situación anterior es previa a esta doctrina que esta ley hizo variar y que hoy, respecto de este delito especial impropio, se considera como delito base no la estafa, sin el previsto en el artículo 470 n° 11. Agrega que allí se precisa quienes son funcionarios públicos, indicando que el concepto, para el derecho penal, es unívoco, que si bien es amplio, ello no puede significar ampliar el ámbito de punibilidad y por ello se debe recurrir a una interpretación restrictiva no siendo posible una interpretación contra reo. No solo el hecho de trabajar en una empresa que se entienda del Estado o vinculada al Estado, implica la calidad de funcionario público. El profesor Balmaceda indica que hay que estarse a la calidad de función pública del Estado y ella, en base a la posición mixta, requiere de un elemento objetivo: que sea realizada mediante actos sometidos a derecho público, de manera que la actividad crediticia desarrollada por Muñoz Giacaman no estaba sometida a la regulación del derecho público sino a la de la actividad bancaria. El profesor Balmaceda también indica que es fundamental la fuente de la competencia del funcionario y no puede ser por circunstancias de hecho y el defensor entiende que no puede ser a través de contrato privado y que el funcionario debe tener poderes legítimos de disposición sobre el patrimonio público, lo que en este caso no se da.

Aclarar que si se está a la figura del 468 y 473 del Código Penal, esto es la figura de estafa genérica o residual, los elementos que deben concurrir son una puesta en escena, un error el sujeto pasivo, una relación causal y un perjuicio que no ha sido acreditado en el juicio, muchos seguros fueron cancelados. Estima que

el delito que da en la especie es el contemplado en el artículo 160 de la Ley General de Banco.

La jurisprudencia citada, nada tiene que ver con la situación que se ha planteado en este juicio y son situaciones distintas.

Por último, **el defensor de los acusados Mario Arzola Henríquez, Hilda Henríquez Cuevas y Ana Henríquez Cuevas.**

Respecto a la solicitud del tribunal calificar la conducta de Ana Henríquez conforme al artículo 16 del Código Penal, en el juicio se reconoció por ella cual habría sido su participación: en un momento, cuando se le propuso la compra de los buses, se negó, luego y ante la insistencia, firmó, pero firmó una carpeta del banco de solicitud de crédito sin falsificar nada. El conocimiento de la señora Ana de contextualizarse pues, es una persona con octavo básico, muy distinto a Muñoz Giacaman o Mario Arzola, su conocimiento era otro, al pasar el tiempo se dio cuenta. Efectivamente concurrió con posterioridad a la firma de prenda de buses. No participó en el forjamiento de ningún documento más allá de su firma y el retiro de buses. Si bien es cierto, concurrió con su firma a la compra de estos buses, el destino de los buses no eran para ella, sino para otras personas. Deja claro que nunca recibió dinero ni tuvo conocimiento de la apertura de cuenta.

En cuanto al artículo 468 del Código Penal, entiende que tanto respecto de Mario Arzola, Ana e Hilda Henríquez no es discutible que no son empleados públicos por lo que se debiere aplicar la pena del delito común aplicable en la especie que es el del artículo 468. Reitera que sus representados concurrieron en la tramitación de los créditos, que fue lo que se acreditó y se alegó.

DECIMO SEPTIMO: Alegaciones de la defensa.

La defensa del imputado Pablo Muñoz Giacaman, en cuanto alega la atipicidad de la conducta de su defendió en cuanto al delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal que le imputan el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, debe ser desestimada por las razones señaladas en el título III del número Uno del Considerando décimo cuarto, en especial que la conducta de su representado, quien se reputa empleado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal para estos efectos, en los cinco hechos, se encuadra el tipo establecido en el artículo 239 del Código Penal, ya que en las cinco operaciones interviniera por razón de su cargo, y se defraudó o al menos consintió en que se defraude al Estado, originado la pérdida que respecto a cada hecho se indica en el considerando décimo cuarto de esta sentencia; descartándose en su caso haya incurrido en la conducta tipificada en el artículo 160 de la Ley General de Bancos por las razones expuestas precedentemente en el citado considerando y en las conductas de los artículos 468 y 473 del Código Penal por no corresponder sus conductas al tipo de la primera y por la especialidad de la conducta tipificada en el artículo 239 del Código Penal en su caso respecto de la segunda, sin que las disposiciones de la Ley 21.121 alteren la interpretación de las normas señalada o alteren lo concluido.

Respecto a sus alegaciones en cuanto a la eventual participación de otras personas en los hechos que no se encuentran imputadas, esta eventual participación en nada altera su participación en calidad de autor en los delitos señalados en el considerando décimo catorce de esta sentencia, pues el tipo se satisface con que en las cinco operaciones interviniera por razón de su cargo, y se defraudare o al menos consintiere en que se defraude al Estado, originando la pérdida, sin que sea necesario el imputado haya percibido el dinero.

Respecto a sus argumentaciones que no forjó los documentos empleados, carecen de relevancia por cuanto no cabe duda que él fue quien los empleó o permitió que se usaran para defraudar el Estado originando la pérdida,

Sus demás alegaciones respecto a las condiciones particulares de su representado se considerarán su procedencia o improcedencia como circunstancias modificatorias de responsabilidad penal al imponer la pena

La defensa de los imputados Arzola y Henríquez Cuevas.

Sus alegaciones en cuanto a que Arzola actuó sin concierto con el imputado Pablo Muñoz Giacaman al cobrar los cheques señalados en los hechos dos y tres de la acusación, carecen de relevancia por cuanto ni el Ministerio Público ni ninguno de los querellantes imputa responsabilidad penal a Arzola en esos sucesos.

Sus exposiciones en cuanto a que los hechos ejecutados por sus representados constituirían los ilícitos tipificados en los artículos 470 del Código Penal, deben ser rechazadas por las razones en expuestas en el título III del punto CUATRO del considerando décimo cuarto de esta sentencia.

Respecto a sus alegaciones en cuanto a las intenciones de sus representados al participar en los hechos por los que se les acusa y su forma de colaborar en la investigación, se considerará su procedencia o improcedencia como circunstancias modificatorias de responsabilidad penal al imponer la pena

DÉCIMO OCTAVO: Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal.

El **Ministerio Público** en relación con el acusado Pablo Muñoz Giacaman incorporó el extracto de filiación y antecedentes penales del sentenciado, el que no registra anotaciones penales, por lo que le reconoce la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, se opone a la concesión de la atenuante del artículo 11 N° 9 alegada por su defensa, porque en el juicio quedó en evidencia que mintió y dijo sólo verdades parciales, y en cuanto a la atenuante del artículo 11 N° 1 en relación con el artículo 10 N° 1 del Código Penal que alega su abogado, señala que hay un inconveniente técnico para pronunciarse sobre esta petición, que solo se hizo en esta audiencia, ya que ella no es ajena al hecho punible, es parte de la culpabilidad y que tampoco podría ser admitida, toda vez que no se demostró los fundamentos de la misma. En cuanto a la multa, señala que el peritaje social incorporado por la defensa no lo exime del pago de la misma, cuando más a una rebaja, se mantiene en su petición de pena y para el caso que se acojan dos atenuantes por el tribunal, dice que sólo puede rebajarse la pena solicitada en un grado e igual deberá cumplirla en forma efectiva.

La **defensa del encartado**, por su parte, hace valer el artículo 18 del Código Penal en relación a la ley penal vigente al momento de los hechos, señala que le favorece más a su representado que se aplique en su favor el artículo 351 del Código Procesal Penal; alega las atenuantes de los números 6, y 9 del Código Penal y también la del N° 1 en relación con el artículo 11 del Código Penal, respecto de la cual sólo hace alegación en esta audiencia y prueba con el mérito del peritaje psiquiátrico rendido en el juicio, en virtud de lo cual solicita la rebaja en uno, dos o tres grados de la pena quedando, en definitiva, su solicitud de pena en quinientos cuarenta y un (541) días de presidio menor en su grado medio. Para el caso que no se acoja la atenuante del artículo 11 N° 1, en relación con el artículo 10 N° 1 del Código Penal, y por la concurrencia de dos atenuantes pide una pena de presidio menor que vaya entre los quinientos cuarenta y un (541) días con un máximo de tres (3) años y un (1) día. En cuanto a la pena de multa, pide se rebaje a treinta (30) Unidades Tributarias Mensuales por cuanto su representado no tiene los medios necesarios para solventarla. En relación a beneficios, cumpliendo su representado con los requisitos legales, es que solicita la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, al respecto el acusado fija su domicilio registrado en autos, ya que sólo se ha trasladado a esta ciudad para los efectos del juicio.

En cuanto al acusado **Mario Arzola Henríquez**, la Fiscalía incorporó el extracto de filiación y antecedentes penales del sentenciado, el que no registra anotaciones penales, por lo que le reconoce la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal. Asimismo le reconoce la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, la de su colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, no se opone a que sea considerada como muy calificada y se le aplique una pena de presidio menor en su grado máximo. En cuanto a la rebaja de la multa estará a lo que el tribunal determine.

Por su parte, la **defensa** del encausado alegó las atenuantes de los números 6 y 9 del Código Penal, solicita que esta última sea considerada como muy calificada, y pide una rebaja de tres grados solicitando una pena de presidio menor en su grado medio y en cuanto al cumplimiento de la pena solicita se le aplique la pena sustitutiva de remisión condicional, por darse los requisitos para ello. En cuanto a la pide solicita una rebaja de la misma, por lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal.

En relación a la acusada **Hilda Henríquez Cuevas**, el ente persecutor incorporó el extracto de filiación y antecedentes penales de la sentenciada, el que no registra anotaciones penales, por lo que le reconoce la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, se opone a la concesión de la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, toda vez que ella mintió durante la investigación, en cuanto a la atenuante del artículo 11 N° 7 alegada por la defensa señala que ella no es oportuna, lo que aparece de la misma aprueba incorporada por la defensa, en cuanto a la rebaja de la multa estará a lo que el tribunal determine.

La **defensa** de la encartada, por su parte, solicita la aplicación de la atenuante del número 6 del artículo 11 del Código Penal, la que prueba con su extracto de filiación, también solicita el reconocimiento de la atenuante del artículo

11 N° 9 en carácter de muy calificada, por cuanto la encausada no sólo prestó declaración en la causa, sino que se sometió voluntariamente a todos los peritajes solicitados por el Ministerio Público y alega también la atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal en su favor, la que hace consistir en la entrega de dos buses al Banco del Estado y al efecto acompaña documentación de la causa ejecutiva en la que incide esta entrega, por lo que en base a todas estas atenuantes pide rebaja de la pena solicitada por el Ministerio Público a la de presidio menor en su grado mínimo, y se le aplique alguna pena sustitutiva. En cuanto a la multa, requiere rebaja de la misma, acompañando al efecto un informe socio económico elaborado por una asistente social, con sus respectivos anexos.

En lo tocante a la acusada **Ana Henríquez Cuevas**, el Ministerio Público incorporó el extracto de filiación y antecedentes penales de la sentenciada, el que registra anotaciones penales anteriores, por faltas penales, hurtos faltas del año 2014, por lo que no se le reconoce la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, en relación a la atenuante del artículo 11 N° 7 alegada por la defensa señala que ella tampoco es oportuna, lo que aparece de la misma prueba incorporada por la defensa; no se opone al reconocimiento de la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, por cuanto de la conclusión de las pericias aparece que las firmas consignadas en los documentos no son de esta encartada y no obstante ello reconoció su intervención en los mismos, en cuanto a la rebaja de la multa estará a lo que el tribunal determine.

La **defensa** de la enjuiciada, por su parte, alega en su favor la aminorante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, ya que no obstante su escasa participación en los hechos se sometió a las pericias caligráficas solicitadas por el Ministerio Público, la que debe tenerse como muy calificada; también pide que se aplique la atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal en su favor, la que hace consistir en la entrega de un bus al Banco del Estado y al efecto acompaña documentación de la causa ejecutiva en que incide esta entrega, por lo que en base a estas atenuantes pide rebaja de la pena solicitada por el Ministerio Público a la de presidio menor en su grado mínimo, y que se le aplique alguna pena sustitutiva. Respecto a la multa, pide rebaja de la misma acompañando al efecto un informe socio económico elaborada por una asistente social, con sus respectivos anexos.

DÉCIMO NOVENO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal:

I.- en relación a Pablo Muñoz Giacaman.

Que favorece al encartado Muñoz Giacaman **la atenuante de irreprochable conducta anterior del artículo 11 N° 6** del Código Penal, probada suficientemente con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que incorporó al juicio el Ministerio Público, el que no registra anotaciones penales pretéritas.

Asimismo, beneficia al acusado la circunstancia atenuante contemplada en el **artículo 11 número 9 del Código Penal**, esto es, haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, por cuanto renunciando a su derecho a guardar silencio en forma voluntaria depuso en el juicio y relató las circunstancias generales de los créditos gestionados por él y por los cuales fue

acusado, así como haberse quedado con parte de los mismos, y haber desviado parte de ellos a la cuenta corriente de su cónyuge, relató la forma como conoció a las personas a las cuales les cursó los créditos, y la manera que urdió la compra de los buses para la sociedad de hecho que mantenía con Mario Arzola, antecedentes todos que han sido útiles al tribunal, para afianzar aún más su convicción condenatoria. No es óbice para no considerar esta atenuante, el que haya señalado que José Sepúlveda Tapia se quedó con parte del crédito, que no recordara qué llenos hizo él y cuántas veces puso su impresión dígito pulgar derecha o izquierda en los mismos, así como el que haya tratado de disminuir su culpabilidad alegando patologías y adicciones que no resultaron probadas, aspectos, que como ya se ha dicho, quedaron claramente obviados con los antecedentes probatorios por aportados por el Ministerio Público, por cuanto la norma no exige un reconocimiento absoluto de todos y cada uno de los elementos del delito, sino colaborar a su esclarecimiento, aspecto que es de resorte de los sentenciadores.

Que se debe desestimar la petición de la Defensa en orden a configurar la **eximente incompleta de la imputabilidad disminuida prevista en el artículo 11 N°1 en relación a la eximente del artículo 10 N°1 del Código Penal**. En efecto, cabe señalar que en el parecer de estas sentenciadoras se trata de una alegación de fondo que incide en la determinación del delito, pues aún cuando opere de manera incompleta, incide de todos modos en uno de sus elementos como es la culpabilidad. De ahí que debe ser considerada extemporánea la petición, si, recién se invoca en la audiencia de determinación de la pena prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, como ha ocurrido en la especie, pues, de acuerdo a lo mencionado con antelación y lo dispuesto en mismo artículo antes mencionado, únicamente es posible de debatirse en la citada oportunidad aquellas circunstancias modificatorias que sean ajenas al hecho punible.

Por lo demás, y aún de superarse lo anterior, de todas maneras, debía desecharse su configuración, pues se sustenta la solicitud sólo en un informe emitido por el perito siquiatra Pedro Cament Hormazábal, quien lo entrevistó el 27 mayo de 2020, vía telemática cuando el encartado se encontraba en prisión, pericia que no tuvo la entidad suficiente para establecer que la disminución de las capacidades cognitivas que según el perito padecería el acusado, fueren suficiente para configurar una imputabilidad disminuida como morigerante de responsabilidad criminal, tal como se dirá a continuación.

Primero se debe señalar que el artículo 11 N° 1 del Código Penal señala que son circunstancias atenuantes: 1.-Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. A su vez, el artículo 10 N° 1 del texto legal en comento señala que están exentos de responsabilidad criminal: 1.- El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón. En la doctrina se ha sostenido que el artículo 11 N° 1 del Código Penal expresa que atenúan la responsabilidad las eximentes descritas en el artículo 10 del mismo cuerpo legal, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos y que cuando emplea la palabra “requisitos” es necesario que “una eximente, para calificarse como incompleta

requiere necesariamente de la concurrencia del requisito que le es fundamental.”(Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, año 2012, Mario Garrido Montt, páginas 185 y 186). Ciertamente, debe ser en una menor intensidad que impida calificar la circunstancia como eximente de responsabilidad criminal. Consecuencialmente, en el caso del encartado Muñoz Giacaman deberá determinarse si las patologías -que según el perito padecía al momento de los hechos por él ejecutados implicó un trastorno o detrimento serio o importante en su capacidad de comprensión y/o autodeterminación.

Según el perito Pedro Cament Hormazábal, el encartado tiene un trastorno de adicción al juego unido al consumo abusivo de drogas, específicamente cocaína, siendo ambos graves, ello en base a criterios que indica la literatura científica, presentarían en el entrevistado dificultades importantísimas, ya que la dependencia da lugar a una pérdida completa de libertad, cuando las personas no se mantienen las adicciones se produce síndrome de abstinencia, se siente muy incómodos con sensación de que algo le va a ocurrir, y cuando vuelven al juego o a consumir droga esto baja y se sienten más tranquilos. Sostuvo el perito que mientras más se consume mayor es el daño cerebral, en la parte que controla los impulsos, y que como el encartado llevaba más de diez años en el juego en forma anormal y en el consumo abusivo de drogas, el descontrol patológico era bastante grave, y es en este contexto que cometió actos ilegales, tomaba datos falsos y los llevaba a un sistema crédito, de esta manera lograba tener más dinero para mantener adicción.

Sin embargo, la conclusión a la que llegó el perito, la hizo en base a los antecedentes entregados únicamente por el propio encartado, reconociendo no los trianguló con otra información proporcionada por terceros, o allegados al periciado, que pudieran entregar informes o referencias que avalaran los dichos de Muñoz Giacaman, reconociendo el perito que no tiene certezas acerca de los datos que le proporcionó el encartado, pero que sí pudo determinar que tenía un normal nivel de conciencia, estaba ubicado témporo espacialmente, orientado y que tenía conciencia del problema, que se presentaba con un nivel normal de raciocinio y autocrítica, utilizando elementos morales para criticarse, reconociendo que había fallado a hijos y a su familia, que su memoria era normal. Igualmente, declaró este perito que el periciado tenía un lenguaje normal, acorde con los estudios, que tenía motricidad normal, y que su estado emocional era bastante tranquilo, ya que estaba adaptado a la situación, que, si bien estaba con pesar, no estaba ansioso; dijo que su capacidad intelectual era normal, y que le contestó todas las preguntas de partes aritméticas, sinonimia. En aspectos formales de su pensamiento, dijo expresamente el perito que su razonamiento era normal también, que no presenta ni ha presentado fenómenos psico patológicos como alucinaciones.

De esta manera, y en base a lo indicado anteriormente, el perito no señaló en la audiencia que el encartado haya presentado indicadores de daño patológico de las funciones cognitivas superiores, ni que haya presentado indicadores de daño patológico de la capacidad de pensamiento, de comprensión, de lenguaje y memoria, ya que según lo señalado por el perito el encartado tiene la capacidad suficiente para discernir acerca de las consecuencias de su actuar.

Lo anterior resulta relevante, porque descarta la posibilidad que el acusado haya presentado un descontrol de impulsos o personalidad impulsiva derivada de sus supuestas patologías de adicción al juego y a las drogas. Más aún, la asistente social **Gabriela Soto Muñoz**, dijo que había sido un alumno destacado en sus estudios medios, egresando como el segundo mejor alumno de la carrera de Ingeniería Comercial, que debido a ello obtuvo trabajo de inmediato en el Banco Santander de esta ciudad, donde fue contratado como ejecutivo, de tal manera que sus funciones cognitivas ni en el trabajo ni en la vida social aparentaron estar disminuidas, ni fueron afectados sus conocimientos de información general, su capacidad de enjuiciamiento y sentido común para apreciar las situaciones, ni sus habilidades numéricas, por mucho que las personas que sufren estas patologías lleven una doble vida como lo sostiene el perito.

Atento a lo anterior, aún para el caso hipotético de ser admitida la atenuante en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, el testimonio del perito Cament Hormazábal, resulta insuficiente para sustentar una supuesta imputabilidad disminuida del enjuiciado en los términos que pretende el abogado defensor. Y la pericial de carácter bioquímico evacuada por doña Shirley Villouta tampoco constituyó un aporte, por cuanto se refiere muestras tomadas con mucha posterioridad a los eventos objeto de este juicio.

II.- Respecto de Mario Esteban Arzola Henríquez.

Que favorece al encartado Mario Arzola Henríquez la atenuante de irreprochable conducta anterior del **artículo 11 N° 6 del Código Penal**, probada suficientemente con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que incorporó al juicio el Ministerio Público, el que no registra anotaciones penales pretéritas.

Asimismo, tal como lo sostiene el Ministerio Público en el auto de apertura, favorece a este acusado la circunstancia atenuante contemplada en el **artículo 11 número 9 del Código Penal**, esto es, haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, por cuanto ya en la etapa investigativa colaboró sustancialmente cuando entregó antecedentes de su participación en la comisión de los ilícitos en compañía del encartado Muñoz Giacaman con la incorporación de documentos falsos, para así lograr obtener los créditos relacionados con su madre Hilda Henríquez y su tía Ana Henríquez, lo que permitió al Ministerio Público reformatizar en la causa. Luego en la audiencia de juicio oral, renunciando a su derecho a guardar silencio, en forma voluntaria prestó declaración y relató pormenorizadamente cuál fue su actuación para obtener en forma fraudulenta los créditos en favor de su madre y tía ya individualizadas, reconociendo haber llevado las carpetas para su firma a estas personas, haber confeccionado una factura falsa y haber hecho algunas firmas, sometiéndose voluntariamente a los peritajes solicitados por el Ministerio Público a fin de ratificar su participación en los dos hechos por los cuales fue acusado, de este modo sus declaraciones vertidas en el juicio, constituyeron una ayuda para el órgano jurisdiccional que sobresalió de lo normal y corriente de las cosas, desde que no sólo se limitó a narrar los hechos y admitir su intervención en los mismos entregándole un notable

soporte fáctico a la pericia realizada por el perito huellográfica **Sra. Ximena Hermosilla Díaz**, sino que ayudó a establecer la existencia de los ilícitos, de tal modo que se trata de una colaboración extraordinaria y en tal grado fecunda que a juicio de estas sentenciadoras permite el privilegio de la calificación.

III.- en relación a Hilda Magdalena Henríquez Cuevas.

Que concuerda este tribunal en orden a que concurre respecto de la acusada Hilda Henríquez Cuevas, la atenuante del **artículo 11 N° 6 del Código Penal**, esto es, la de su irreprochable conducta anterior, establecida con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que sin registra anotaciones pretéritas a esta causa.

Que, además, favorece a esta acusada la atenuante del **artículo 11 N° 9 del Código Penal**, es decir, la de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, teniendo para ello presente que ella renunciando a su derecho a guardar silencio, en forma voluntaria declaró y confesó su participación en los hechos, reconoció que carecía de los requisitos necesarios para pedir el préstamo bancario que le fue concedido, que ella nunca ha sido transportista, que firmó los documentos que le llevó su hijo en una carpeta, a sabiendas que no eran auténticos, y que convenció a su hermana Ana Gladys para que participara en los hechos, sometiénndose voluntariamente a los peritajes huella gráficos a que fue sometida por el Ministerio Público, de los cuales dieron cuenta en juicio los peritos **Ximena Hermosilla Díaz y Poul Yáñez Zambrano** antecedentes todos que han sido útiles al Tribunal para afianzar aún más su convicción condenatoria. No obstante, esta minorante de responsabilidad no habrá de ser acogida en grado de muy calificada, como lo solicita la defensa, toda vez que en concepto de estas sentenciadoras, no existen motivos para estimar que la colaboración prestada por la enjuiciada, haya sido de tal magnitud, que sólo en virtud de ella se lograra establecer el ilícito y participación culpable de los enjuiciados, circunstancia que evidentemente obsta a la aludida pretensión.

Que, no favorece al Hilda Henríquez la atenuante contemplada en el artículo 11 N° 7 del Código Penal, que alega su defensa, ya que el elemento objetivo de esta minorante -consistente en reparar el mal causado-, entraña la idea de poner remedio, ayudar, resarcir, compensar de alguna manera, el perjuicio provocado por el agente con su comportamiento ilícito, asimismo, el resarcimiento que debe realizarse a raíz de la perpetración del acto delictivo, debe reflejar el celo que exige la ley para que opere como atenuante, demostrándose así por la acusada la existencia de un real celo reparatorio, en forma diligente y oportuna, en el caso de esta encartada, la defensa lo fundamenta con los documentos que incorporó durante la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, consistente en una fotocopia del escrito de entrega voluntaria de bienes, causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción, de la resolución de fecha 04 de marzo de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción, sobre escrito de entrega de bienes; del escrito de retiro de buses y designa martillero presentado por el señor, Eugenio Hernández Aliste, abogado de Banco Estado de Chile, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción; de la resolución de fecha 04 de agosto de 2020, con

firma electrónica avanzada, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción, sobre escrito de retiro de buses y designa martillero.

Como puede observarse, esta documentación incide en el juicio ejecutivo, seguido contra la encartada, ante el Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, en causa rol C-4778-16 iniciada en el año 2016, en la cual Hilda Henríquez sólo en el mes de marzo de 2020, dando cumplimiento a una resolución judicial, hizo ficta entrega de las especies, las que ya se encontraban debidamente embargadas en el juicio, asimismo, la ficta entrega se hizo casi cinco años después de haberse cometido el delito, por lo que se trataría de un arrepentimiento y reparación tardíos, no celosa, carente de inmediatez, y únicamente serviría para regular la pena según la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

IV.- con respecto a Ana Henríquez Cuevas.

Que a juicio de este tribunal, le beneficia a esta encartada la atenuante del **artículo 11 Nº 9 del Código Penal**. por cuanto ésta, en el juicio oral y público, oportunidad procesal en que se debe resolver adecuadamente el caso en conflicto, cuando declaró, aportó información para el esclarecimiento de los hechos, la cual se corresponde plenamente con la prueba rendida durante el debate, todo lo cual ha permitido convencer al tribunal que los hechos y la participación de la enjuiciada ocurrieron realmente como se atribuyó en la acusación fiscal, circunstancia que en el caso de esta encartada cobra especial relevancia, toda vez que durante el juicio sus co imputados trataron de disminuir la entidad de su participación en los hechos, señalando ambos que ella no quería aparecer solicitando un crédito, que alegaba que no figuraba con renta, y que sin embargo, debido a la insistencia de Hilda, accedió a firmar unos documentos en su domicilio particular, sin saber su procedencia, confiando en su hermana Hilda, incluso les firmó poder sin saber su finalidad, que fue Hilda quien le llevó hasta su casa todos los papeles para firmar y que fue una sola vez a la Notaría con Mario Arzola e Hilda Henríquez. Asimismo, una de las testigos, doña Ada Henríquez, dijo que esta encartada nada tenía que ver con los hechos, que su hermana no sabía de qué se trataba esta presentación al Banco. Sin embargo, la enjuiciada ante una pregunta directa que le efectuó su defensa respondió “que sí sabía que los buses que compraron se habían hecho fraudulentamente”, resultando entonces dicha colaboración útil para la formación de la convicción, más allá de toda duda razonable, tanto de la existencia y forma de desarrollo de los hechos, como de su participación en ellos, y de la calificación jurídica asignada, de modo que, a juicio de estas sentenciadoras, no sólo concurre la causal de atenuación sino que además, corresponde asignarle el **carácter de muy calificada**, dando lugar con ello a la solicitud de la defensa a ese respecto.

Que no procede acoger en la especie la minorante de responsabilidad penal del artículo 11 n°7 del Código Penal y que la defensa hace consistir en la entrega de un bus- ya que el otro le fue robado- ante el Primer Juzgado Civil de esta ciudad, y que pretendió probar con el mérito de los documentos incorporados en la audiencia correspondiente a saber: escrito de entrega voluntaria de bienes, causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción. Resolución de fecha 04 de

marzo de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción, sobre entrega voluntaria de bienes. Escrito de retiro de buses y designa martillero presentado por el señor, Eugenio Hernández Aliste, abogado de banco Estado de Chile en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción. Resolución de fecha 04 de agosto de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción, sobre retiro de buses y designa martillero. Set de 07 fotos donde consta el estado de 3 máquinas placas patentes HF SS 42, HD LW 79 y HD LW 80.

Que esta minorante, si bien no exige un resarcimiento total y completo del menoscabo inferido por el delito, sino basta que, en este caso la encausada, sí procure o haga lo posible por aliviar las consecuencias dañosas del hecho y que la inculpada lo haya “procurado con celo”. En la especie Ana Henríquez, al igual que su hermana, sólo después de ser demandada en la causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción, y luego de ser embargadas las especies, y pasado 5 años de ocurrido los hechos, hizo entrega ficta de solo un bus de los dos que adquirió fraudulentamente, dando cumplimiento a una resolución judicial, el que como ya se dijo, había sido debidamente embargado y designado un receptor para su retiro, limitándose la encausada a indicar dónde se encontraba la especie, luego entonces, para que opere la minorante invocada, lo que importa en el actuar del agente es que haya una preocupación, un sacrificio y esfuerzo tendientes a aminorar, menguar o reparar el mal ocasionado, es decir, la atenuante en cuestión supone la exteriorización de una conducta que debe constar de manera objetivamente celosa y reparadora en el proceso, lo que no ha ocurrido en este caso.

DÉCIMO NOVENO: Que no quedan cuestiones que resolver, por cuanto el debate se centró en la calificación jurídica de los hechos, lo que ha sido ya resuelto.

Con respecto a las circunstancias atenuantes alegadas, ya fueron examinadas en esta sentencia.

VIGÉSIMO: Penas aplicables.

Que la pena aplicable al caso concreto es la prevista en el artículo 239 del Código Penal, por cuanto la defraudación excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, en consecuencia, la pena es la de presidio mayor en su grado mínimo, multa del cincuenta por ciento del perjuicio causado y e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.

En caso del acusado **Pablo Muñoz Giacaman**, y en relación a la pena principal, al tener el delito el carácter de reiterado le resulta más beneficioso aplicar la pena conforme al artículo 351 del Código Procesal Penal, esto es, aumentarla en un grado desde el mínimo, lo que nos lleva al rango del presidio mayor en su grado medio, en contraste del artículo 74 del Código Penal que implica aplicar una pena por cada uno de los delitos.

Aclarado aquello, se debe considerar, que favorecen al enjuiciado dos atenuantes de responsabilidad, de modo que conforme al artículo 67 del Código

Penal, se puede bajar en uno o dos grados, según el número y entidad de tales atenuantes, optando el tribunal en rebajarla en un grado, quedando entonces en el rango del presidio mayor en su grado mínimo.

Y en este, tramo, teniendo en consideración la extensión del mal causado por el delito, conforme al artículo 69 del Código Penal, tanto desde el punto de vista patrimonial, por el perjuicio directo causado al Banco Estado, y por otro lado, la afectación a la vida tanto personal como historial comercial de los afectados indirectos por los tres primeros ilícitos, a quienes se le dejó en una situación de desmedro en cuanto se afectó su capacidad crediticia, e incluso en el caso del Sr. Jara Cabeza, le implicó consecuencias en su matrimonio, el tribunal estima que una pena racional y proporcional es la que se señalará en lo resolutivo.

En relación al acusado **Mario Arzola Henríquez**, también corresponde aplicar el artículo 351 Código Procesal Penal sobre el artículo 74 del Código Penal, por cuanto le resulta más favorable, y en consecuencia, desde el mínimo de la pena señalada por la ley al delito, esto es, el presidio menor en su grado mínimo, aumentar en un grado.

Luego teniendo en consideración que lo benefician dos circunstancias atenuante y que el artículo 67 del código citado, permite la rebaja en uno o dos grados considerando el número y entidad de las circunstancias atenuantes, en este caso se considera por estas sentenciadoras que su colaboración fue de una entidad mayor, por cuanto le implicó ser acusado y condenado por un delito de mayor gravedad por el que originalmente había formalizado el Ministerio Público, motivo por el cual, se rebajará en dos grados, y dentro del mismo se impondrá en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Con respecto a **Hilda Magdalena Henríquez Cuevas**, a su respecto se trata de un solo delito y, en consecuencia, se parte de la pena del presidio mayor en su grado mínimo, luego se deben considerar las dos circunstancias atenuantes que le benefician, que permiten la rebaja en uno o dos grados, optando estas sentenciadoras en disminuirla en un grado. Dentro del mismo en atención al nivel de participación que tuvo en la comisión del ilícito, en comparación a los copartícipes, se considera que es razonable imponerla en el quantum que se señalará en lo resolutivo.

En cuanto a la situación de **Ana Gladys Henríquez Cuevas**, se le ha condenado por un solo delito, y le beneficia una circunstancia atenuante a la cual el tribunal le ha otorgado el carácter de muy calificada, por consiguiente, y por aplicación de los artículos 67 y 68 bis del Código Penal, se rebajará la pena en un grado desde el mínimo asignado por la ley al delito, arribando a una pena en el rango del presidio menor en su grado máximo, la cual se aplicará en el quantum menor, en atención al nivel de intervención que le cupo en el delito, en relación con sus copartícipes.

VIGÉSIMO PRIMERO: Forma de cumplimiento.

Que, en atención a lo resuelto precedentemente, el sentenciado Pablo Muñoz Giacaman deberá cumplir la pena temporal en forma efectiva por no reunir

los requisitos para optar a alguna pena sustitutiva contempladas en la Ley N° 18.216, especialmente por lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la mencionada ley.

Respecto al acusado, **Mario Arzola Henríquez**, considerando la pena temporal a imponérsele, los antecedentes allegados al juicio y que dan cuenta que antes de los hechos se desempeñaba como pequeño empresario en el Norte del País, y según lo indicado por la testigo Ada Henríquez, tenía una pequeña empresa, una pyme, y arrendaba buses para empresas en traslado de personal, dijo que este encartado siempre ha trabajado, que de los dineros, que se obtuvieron de los buses que trabajó en el Norte, nunca vio un peso; señaló que se trata de una buena persona, trabajadora y empeñosa, que ella siempre lo ayudó cada vez que le pedía dinero para trabajar los buses en el norte, y que a veces no tenía dinero ni para comer, de todo lo que se desprende que Arzola Henríquez tiene arraigo social y laboral, que tiene red de apoyo familiar y que tiene una profesión u oficio con el que siempre ha trabajado con anterioridad los hechos, asimismo, del mérito de su extracto de filiación se colige que ha mantenido una conducta exenta de reproche penal, lo que refuerza al tribunal a concluir que se trata de un sentenciado que efectivamente -no sólo formalmente- posee una conducta que aleja su posibilidad de reincidencia en la fase de ejecución de la sentencia, por todo lo anterior el tribunal estima que se cumplen los requisitos del artículo 15 bis de la Ley 18.216, por lo que se le sustituirá la sanción privativa de libertad por la de libertad vigilada intensiva.

En cuanto a la acusada **Hilda Henríquez Cuevas**, considerando la pena temporal a imponérsele y los antecedentes allegados por la defensa consistente en informe social incorporado en la audiencia respectiva, evacuado con el fin de evaluar sus facultades económicas y socio familiares, así como las necesidades actuales de esta encartada, elaborado el 03 de agosto de 2020, por la asistente social Nélida Campos Peña, en el que concluye que la encartada tiene condición de vulnerabilidad reflejada en que su hogar está calificado entre el 0% y el 40% de menores ingresos, aunque carece de un sueldo, sus recursos de subsistencia los obtiene mediante ayuda de su familia, actualmente vive con su hermano Tito Humberto, pensionado de invalidez solidaria, según cartola Hogar Registro Social de Hogares, comprobante de pago de pensión que incorpora Nélida Campos Peña a su informe, compartiendo el mismo domicilio desde el año 2010, por lo que distribuyen sus dineros entre ambos, siendo doña Hilda quien ejerce el rol de dueña de casa y el cuidado de su hermano enfermo, si bien tienen ingresos inestables, pero les permiten cubrir sus necesidades mínimas, igualmente se apoyan en sus creencias religiosas. En base a estos antecedentes el tribunal estima que se cumplen los requisitos del artículo 15 bis de la Ley 18.216, por lo que se le sustituirá la sanción privativa de libertad por la de libertad vigilada intensiva, por cuanto tiene arraigo familiar y un oficio que es el de modista. Igualmente se adjunta al informe un certificado de la doctora Macarena Arias Thorman, que da cuenta que la encartada es portadora de una diabetes de larga data, siendo usuaria de insulina y otras patologías que describe, junto a un informe médico del Cesfam de Chiguayante que describe las mismas patologías. También

incorporó la asistente social un informe psicológico, de la acusada que señala que presenta malestares derivados de agentes estresores externos crónicos.

En relación a la acusada **Ana Henríquez Cuevas**, considerando la pena temporal a imponérsele y los antecedentes allegados por la defensa, consistente en informe social incorporado en la audiencia respectiva, evacuado con el fin de evaluar sus facultades económicas y socio familiares, así como las necesidades actuales de esta encartada, elaborado el 03 de agosto de 2020, por la asistente social Nélida Campos Peña, en el que concluye que la encartada se encuentra en proceso de divorcio de su cónyuge, Juan de Dios Salas Sanzana, quedándose a vivir con éste sólo su hija Tamar Belén. Por su parte, la encartada se encuentra de allegada en la casa de su hija mayor Loredana Javiera, en el que también hay falencias económicas, porque su yerno Jonathan Gutiérrez Castro quedó sin trabajo; ella espera que su cónyuge la ayude de alguna manera, pero igual trabaja ayudando a su hija en la confección de productos alimenticios que preparan para su venta y con lo que se ayudan entre ellos; además su cónyuge estaría cancelando rentas básicas del hogar y manteniendo a su hija Tamar Belén, señala el informe que la encartada y el grupo familiar donde se encuentra de allegada, no pueden aún contar con otras alternativas porque se atraviesa por este período de pandemia. Se acompaña al informe una Cartola de Hogar, Registro Social de Hogares del grupo familiar de la encartada y de su yerno Jonathan Gutiérrez Castro. Así las cosas, el mérito de este informe demuestra que la encartada presenta arraigo social, tiene red de apoyo familiar y tiene expectativas laborales, por lo que el tribunal estima que se cumplen los requisitos del artículo 15 bis de la Ley 18.216, por lo que se le sustituirá la sanción privativa de libertad por la de libertad vigilada intensiva.

VIGÉSIMO SEGUNDO multa.

Que conforme al artículo 239 inciso final del Código Penal corresponde, además, imponer una pena de multa del cincuenta por ciento del perjuicio causado.

Estas sentenciadoras teniendo en consideración las facultades económicas de los sentenciados como se alegó y demostró en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal y con los informes sociales antes examinados, y la declaración de la perito asistente social **Gabriela Soto Muñoz**, y en el caso de Pablo Muñoz Giacaman, el hecho además que deberá cumplir pena privativa de libertad, hará uso de la facultad que le concede el artículo 70 del Código Penal y rebajará la pena de multa en la forma que se señalará para cada caso en lo resolutivo, permitiendo su pago en cuotas.

VIGÉSIMO TERCERO. Costas.

Que se condenará en costas a todos los sentenciados por haber resultado totalmente vencidos.

VIGÉSIMO CUARTO: Prueba restante.

Que no altera lo resuelto precedentemente la prueba incorporada consistente en declaración de doña Ada Henríquez, que no tiene relevancia más

allá de establecer la forma como se generó la sociedad de hecho Muñoz y Arzola Limitada, las declaraciones de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, Eladio Alvial Ramis, Claudio Cabeza Muñoz, por cuanto dieron cuenta de diligencias o declaraciones respecto de testigos o acusados que prestaron directamente declaración ante el tribunal, documental número 23, la evidencia número 24, consistente en una grabación de audio contenida en un disco compacto, informe pericial de Elizabeth Pacheco por cuanto recae un antecedente no invocado en la acusado. copia simple de querella por delito de estafa, copia de estampe y certificación del receptor Felipe Mosqueira que dan cuenta de antecedentes que no han podido tener influencia en la decisión de condena que se pronunció en contra de los sentenciados, ni en la determinación de la pena que en esta sentencia se hará, como quiera que los datos que arrojan no agravan ni aminoran su responsabilidad.

La documental consistente en: Copia de Patrocinio y Poder presentado en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción; Resolución de fecha 11 de febrero de 2020 con firma electrónica avanzada, sobre patrocinio y poder en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción. Escrito de entrega voluntaria de bienes, causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción. Resolución de fecha 04 de marzo de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción, sobre escrito de entrega de bienes. Escrito de retiro de buses y designa martillero presentado por el señor, Eugenio Hernández Aliste, abogado de Banco Estado de Chile, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción. Resolución de fecha 04 de agosto de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-4778-2016, del 2do Juzgado Civil de Concepción, sobre escrito de retiro de buses y designa martillero. Copia de Patrocinio y Poder en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción. Resolución de fecha 11 de febrero de 2020, sobre patrocinio y poder con firma electrónica avanzada en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción. Escrito de entrega voluntaria de bienes, causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción. Resolución de fecha 04 de marzo de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción, sobre entrega voluntaria de bienes. Escrito de retiro de buses y designa martillero presentado por el señor, Eugenio Hernández Aliste, abogado de banco Estado de Chile en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción. Resolución de fecha 04 de agosto de 2020, con firma electrónica avanzada, en causa C-6647-2016, del 1er Juzgado Civil de Concepción, sobre retiro de buses y designa martillero. Set de 07 fotos donde consta el estado de 3 máquinas placas patentes HF SS 42, HD LW 79 y HD LW 80, incorporadas mediante su exhibición en audiencia de juicio, se tuvo en consideración a efectos de desestimar la circunstancia atenuante reparación celosa del mal causado alegada por el defensor Díaz, por los fundamentos señalados en el considerando décimo noveno.

VIGÉSIMO QUINTO: Acción civil

UNO: El Banco Estado presentó demanda civil, en conjunto con la acusación particular, se confirió traslado a los demandados de la Demanda Civil presentada en contra de todos acusados, por parte del querellante BANCO DEL ESTADO DE CHILE, representada por el abogado Rodolfo Cerliani Vásquez, fundada en los hechos descritos en su acusación particular, a la cual se remite. Solicita que en definitiva se condene a una indemnización de perjuicios en contra de: Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Mario Esteban Arzola Henríquez, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y en contra de Ana Gladys Henríquez Cuevas, los cuatro ya individualizados, para que, en definitiva, sean condenados a pagar a su representado las cantidades que a continuación se detallan:

a.- A **Pablo Andrés Muñoz Giacaman** para que sea condenado al pago, el solo, de la suma en capital de \$ 114.883.854 (que es la diferencia entre el total defraudado \$ 471. 976.544 menos todos los créditos fraudulentos obtenidos por las hermanas Hilda Magdalena y Ana Gladys, ambas de apellido Henríquez Cuevas, la suma de \$ 357.092.690).

b.- Para que sean condenados al pago en forma solidaria, conforme al artículo 2317 del Código Civil, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y a Mario Arzola Henríquez**, al pago de la suma de \$ 178.580.468, que es el total, en capital, de los tres créditos obtenidos en forma fraudulenta por Hilda Magdalena Henríquez Cuevas: \$88.290.129 +88.290.339 + \$2.000.000= Total 178.580.468.

c.- Para que sean condenados al pago en forma solidaria conforme al artículo 2317 del Código Civil, **Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Ana Gladys Henríquez Cuevas, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y a Mario Arzola Henríquez**, al pago de la suma de \$178.512.222 que es el total, en capital, de los tres créditos obtenidos en forma fraudulenta por Ana Gladys Henríquez Cuevas: \$88.221.883 + \$88.290.339 + \$2.000.000= Total \$ 178.512.222. O la suma que US. estime conveniente, de acuerdo al mérito del proceso.

2.- El reajuste, equivalente a la variación que haya experimentado dichas cifras desde la época de la comisión de los delitos, hasta la fecha del entero y cumplido pago de las cantidades demandadas, todo de conformidad al índice respectivo determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

3.- Los intereses legales correspondientes, los que deberán ser calculados y liquidados por el Tribunal, desde la fecha de la comisión de los delitos, hasta la época en que se verifique el pago de las cantidades demandadas.

4.- El pago de las costas de la causa.

DOS: Los demandados no contestaron la demanda civil en el plazo establecido en el artículo 62 del Código Procesal Penal.-

TRES: Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce. -

CUARTO: Según se estableció en los números uno, dos y tres del considerando décimo cuarto precedente Pablo Andrés Muñoz Giacaman es autor de tres delitos de fraude al Fisco, delitos que han causado al Banco del Estado de Chile una pérdida económica de \$114.883.854 daño patrimonial que debe ser indemnizado en conformidad a los artículos 2314 y siguientes del código civil, por ser este daño una consecuencia de los ilícitos señalados imputables al demandado.-

CINCO: Según se estableció en el número cuatro del considerando décimo cuarto precedente Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y

a Mario Arzola Henríquez, son autores del delito fraude al Fisco, delito que ha causado al Banco del Estado de Chile una pérdida económica de \$ 178.580.468.- daño patrimonial que debe ser indemnizado en conformidad a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por ser este daño una consecuencia de los ilícitos señalados imputables a los demandados, razón por la cual todos serán condenados solidariamente al pago de esta indemnización.

SEIS: Según se estableció en el números cinco del considerando décimo cuarto precedente Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Ana Gladys Henríquez Cuevas y a Mario Arzola Henríquez, son autores del delito fraude al Fisco, delito que ha causado al Banco del Estado de Chile una pérdida económica de \$ 178.512.222, daño patrimonial que debe ser indemnizado en conformidad a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por ser este daño una consecuencia de los ilícitos señalados imputables a los demandados, razón por la cual todos los mencionados serán condenados solidariamente al pago de esta indemnización. Respecto a la demandada Hilda Magdalena Henríquez Cuevas no se accederá a la demanda en este punto por considerar que este daño no es consecuencia de un ilícito imputable a ella.

Por estas consideraciones, y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 11 N°6, 11 N°9, 14, 15, 18, 21, 24, 28, 31, 47, 49, 50, 61, 64, 67, 68 bis, 69, 74, 239, 260 y demás pertinentes del Código Penal, 1 y siguientes, artículo 160 del DF3, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, artículo 1 y siguientes del DL 2.079 de 1977, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, 1 y siguientes de la ley 18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y los artículos 1, 2, 3, 4, 36, 45, 46, 47, 281, 295, 296, 297, 309 y siguientes 351, y demás pertinentes del Código Procesal Penal, 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:

A.- EN LO CRIMINAL:

I.-Que se **CONDENA** a **PABLO ANDRES MUÑOZ GIACAMAN**, ya individualizado, en calidad de autor de cinco delitos de fraude al fisco, previstos y sancionados en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, en grado de consumados, cometidos entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, en esta ciudad, a la pena temporal única de **SIETE AÑOS (7)** de presidio mayor en su grado mínimo; a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficio públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de una multa ascendente a treinta **(30) UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES**, equivalente a la moneda de curso legal vigente al momento de su pago efectivo; y al pago de las costas de la causa.

Se autoriza a este sentenciado a pagar la multa en diez (10) parcialidades de tres (3) unidades tributarias mensuales cada una, debiendo pagar las mensualidades el último día hábil de cada mes, principiando al mes siguiente en que quede ejecutoriada la sentencia. El no pago de una sola cuota hará exigible el total, sin nueva notificación.

Si el sentenciado no pagare la multa impuesta, se procederá de conformidad al artículo 49 del Código Penal, en la etapa procesal correspondiente.

II.- Que se **CONDENA** a **MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ**, antes individualizado, como autor de dos delitos de fraude al fisco, previstos y sancionados en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, en grado de consumados, cometidos en esta ciudad en el mes de abril de 2015, a la pena temporal única de **CINCO (5) AÑOS** de presidio menor en su grado máximo; a la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; al pago de una multa, ascendente a **DIEZ (10) UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES**, equivalente a la moneda de curso legal vigente al momento de su pago efectivo.

Se autoriza a este sentenciado a pagar la multa en diez (10) parcialidades de una (1) unidad tributaria mensual cada una, debiendo pagar las mensualidades el último día hábil de cada mes, principiando al mes siguiente en que quede ejecutoriada la sentencia. El no pago de una sola cuota hará exigible el total, sin nueva notificación.

Si el sentenciado no pagare la multa impuesta, se procederá de conformidad al artículo 49 del Código Penal, en la etapa procesal correspondiente.

III.- Que se **CONDENA** a **HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS**, antes individualizada, como autora de un delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, en grado de consumado, cometido en esta ciudad en el mes de abril de 2015, a la pena temporal de **CUATRO (4) AÑOS** de presidio menor en su grado máximo; a la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; al pago de una multa, ascendente a **CINCO (5) UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES**, equivalente a la moneda de curso legal vigente al momento de su pago efectivo.

Se autoriza a esta sentenciada a pagar la multa en **DIEZ (10)** parcialidades de media (1/2) unidad tributaria mensual cada una, debiendo pagar las mensualidades el último día hábil de cada mes, principiando al mes siguiente en que quede ejecutoriada la sentencia. El no pago de una sola cuota hará exigible el total, sin nueva notificación.

Si la sentenciada no pagare la multa impuesta, se procederá de conformidad al artículo 49 del Código Penal, en la etapa procesal correspondiente;

IV.- Que se **CONDENA** a **ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS**, ya individualizada, como de autora de un delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, en grado de consumado, cometido en esta ciudad en el mes de abril de 2015, a la pena temporal de **TRES (3) AÑOS Y UN DÍA (1)** de presidio menor en su grado máximo; a la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; al pago de una multa ascendente a **CINCO (05) UNIDADES**

TRIBUTARIAS MENSUALES, equivalente a la moneda de curso legal vigente al momento de su pago efectivo.

Se autoriza a esta sentenciada a pagar la multa en diez (10) parcialidades de media (1/2) unidad tributaria mensual cada una, debiendo pagar las mensualidades el último día hábil de cada mes, principiando al mes siguiente en que quede ejecutoriada la sentencia. El no pago de una sola cuota hará exigible el total, sin nueva notificación.

Si la sentenciada no pagare la multa impuesta, se procederá de conformidad al artículo 49 del Código Penal, en la etapa procesal correspondiente;

V.- Que, de acuerdo a lo razonado en el motivo vigésimo primero el sentenciado Pablo Muñoz Giacaman, deberá cumplir íntegra y efectivamente la pena corporal impuesta, debiendo abonarse el tiempo desde el cual se encuentra privado de libertad de manera ininterrumpida desde el 24 de enero al 1 de diciembre de 2020, en prisión preventiva, y bajo la modalidad de arresto domiciliario total desde el 1 de diciembre de 2021, como consta en el acápite Séptimo del auto de apertura de juicio, refrendado en la audiencia de determinación de pena.

VI.- Que, reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 15 bis de la Ley N°18.216 y lo razonado en el considerando vigésimo primero de esta sentencia, se sustituye a los sentenciados **MARIO ESTEBAN ARZOLA HENRÍQUEZ, HILDA MAGDALENA HENRÍQUEZ CUEVAS y ANA GLADYS HENRÍQUEZ CUEVAS**, el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de **LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA** por igual término que el de la pena privativa de libertad impuesta a cada uno de ellos y que se sustituye, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile que corresponda, o el que se designe, y debiendo, además, todos ellos cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe para cada uno de ellos en su momento y con las condiciones legales de las letras a), b) y c) del artículo 17 de la citada ley.

Estos sentenciados deberán presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, ya individualizado, dentro del plazo de cinco días, contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en contra de cada uno de ellos.

Si la pena sustitutiva impuesta les fuese revocada o quebrantada por alguno de los condenados se cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas en caso de ocurrir estos eventos respecto de alguno de ellos.

En estos casos, se someterá a los condenados que incurrieren en estos eventos ya señalados al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva, sin abonos que considerar por cuanto no han estado privados de libertad con motivo de esta

causa, como consta del mismo acápite del auto de apertura y lo resuelto en esta sentencia.

VII.- Para los efectos de lo prevenido en el artículo 55 del Reglamento de la Ley N°18.216 comuníquese a Gendarmería de Chile las penas sustitutivas impuestas, y la audiencia de aprobación de los planes de intervención individual de cada uno de estos condenados se fijará en su oportunidad;

B.- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

I.- SE HACE LUGAR, CON COSTAS, a la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el Banco del Estado de Chile, solo en cuanto se condena a:

a.- A Pablo Andrés Muñoz Giacaman a pagarle la suma en capital de \$114.883.854 como indemnización de los daños padecidos por el demandante a consecuencia de los delitos señalados en el número cuatro del considerando décimo cuarto de esta sentencia.

b.- a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y a Mario Arzola Henríquez, solidariamente a pagarle la suma de \$ 178.580.468 como indemnización de los daños soportados por el actor a consecuencia del delito señalado en el número cinco del fundamento décimo cuarto de esta sentencia

c.- a Pablo Andrés Muñoz Giacaman, Ana Gladys Henríquez Cuevas, y a Mario Arzola Henríquez, solidariamente a pagarle la suma \$178.512.222 como indemnización de los daños padecidos por el demandante a consecuencia del delito señalado en el número seis del motivo décimo cuarto de esta sentencia.

II.- y se rechaza en lo demás.

III: - Estas sumas deberán pagarse reajustadas en la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor (IPC) desde la época de la comisión de los delitos cuyos daños cada una indemniza, hasta la fecha del entero y cumplido pago de las cantidades demandadas, y devengarán los intereses corrientes desde la fecha que se constituyan en mora y su pago efectivo.

VIII.- Regístrese, archívese, y remítase oportunamente al Tribunal encargado de su ejecución, cúmplase con el artículo 468 del Código Procesal Penal, 17 de la Ley 18556 Ley Orgánica Constitucional Sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral

Y devuélvanse al Ministerio Público y a las Defensas la prueba que incorporaron a juicio.

Se previene que la jueza Vargas Bustamante estuvo por calificar los delitos de que han resultado responsables el acusado Mario Esteban Arzola Henríquez y las acusadas Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y Ana Gladys Henríquez Cuevas y que se han tenido por acreditados en esta sentencia, como constitutivos del tipo penal contemplado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos.

En primer término, hay que decir que el Ministerio Público y la querellante Consejo de Defensa del Estado, dedujeron acusación por el delito de fraude al fisco contemplado en el artículo 239 del Código Penal. Por su parte, el Banco del

Estado de Chile, también querellante en esta causa, presentó acusación por los mismos hechos que el acusador fiscal, pero calificándolos como el delito del artículo 160 de la Ley General de Bancos.

Que el artículo 239 del Código Penal señala que *“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de...”*. De la redacción de esta norma es claro que el tipo penal exige que el autor sea un funcionario público actuando en razón de su cargo. Entonces, si se acusa a un funcionario público, no hay ninguna discusión en cuanto a que debe aplicársele esta norma, como es el caso del encartado Pablo Andrés Muñoz Giacaman.

El problema surge respecto de los partícipes que no reúnen esa calidad especial, ser funcionario público, que contempla el tipo penal en cuestión, es decir, si esa calidad especial se comunica a los demás acusados, quienes claramente no son funcionarios públicos. Al respecto hay que decir que ello no está solucionado en nuestra legislación y por tal razón es que han surgido diferencias en la doctrina y la jurisprudencia respecto a si la calidad especial que exige un tipo penal como el de esta causa se comunica o no a los extraneus. La única norma que alude a la comunicabilidad en nuestro sistema es el artículo 64 del Código Penal, que sólo se refiere a que no se comunican las atenuantes y agravantes de carácter personal, por lo que no puede sostenerse, sin vulnerar el principio de legalidad, que, si se establece la incomunicabilidad de las circunstancias atenuantes y agravantes, significa que los elementos del tipo penal de carácter personal sí se comunican. Al contrario y tal como como se sostiene por el profesor Héctor Hernández Basualto, (Código Penal Comentado, Parte General, Doctrina y Jurisprudencia, primera edición 2011), respecto a la norma del artículo 64 recién aludida, *“si la ley ha querido categóricamente que no se comuniquen las circunstancias personales que atenúan o agravan la penalidad, no se aprecia por qué habría de querer algo distinto respecto de aquellas circunstancias típicas que constituyen el injusto”*, agregando en el mismo texto que *“siendo esta la única norma expresa sobre comunicabilidad en el derecho penal chileno y consagrando una solución tan nítida, resulta contra intuitivo que justamente en los casos en que la punibilidad de la conducta se funda en términos absolutos en la infracción de un deber especial y exclusivo del sujeto, la Ley le asigne menos importancia al carácter personal de dicho deber y lo extienda indiscriminadamente a cualquiera”*. Igualmente se señala en el texto citado, como argumento en contra de la comunicabilidad, que en ciertos casos nuestro legislador ha establecido expresamente a la punibilidad del extraneus en delitos especiales propios, como en el delito de torturas contemplado en el artículo 150 A del Código Penal, caso en que se regula la responsabilidad del extraneus en el artículo 150 B del mismo Código, con penas más bajas.

Entonces, en opinión de la jueza disidente, no existe en nuestro derecho penal comunicabilidad de los elementos de carácter personal que integran el tipo penal. Por tanto, en el caso del delito del fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal por el que se ha acusado en estos autos, solo cabe concluir que este tipo

penal sólo se aplica al acusado que es funcionario público, en este caso al señor Muñoz Giacaman, pero no a los demás acusados, el señor Arzola, la señora Hilda Henríquez y la señora Ana Henríquez, pues ellos no tienen la especial calidad que exige el tipo penal, o sea, no son funcionarios públicos.

Ahora, en este caso, no se producen lagunas de punibilidad, pues existe un delito común por el cual deben ser sancionados los extraneos Mario Esteban Arzola Henríquez, Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y Ana Gladys Henríquez Cuevas, cual es el delito contemplado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, que establece que *“El que obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”*.

La conducta descrita en el tipo penal artículo 160 de la Ley General de Bancos es precisamente la que llevaron a cabo el acusado Mario Esteban Arzola Henríquez y las acusadas Hilda Magdalena Henríquez Cuevas y Ana Gladys Henríquez Cuevas y, por tanto, debieron ser sancionados como autores de dicho ilícito y no como autores de fraude al fisco.

Redacción de doña Karina Mihovilovic Gutiérrez y la prevención por su autora.

RUC N° 1510036490-2

RIT N° 125-2020

Pronunciada por doña Ana María Hernández Hulín, doña Nancy Loreto Vargas Bustamante y doña Karina Gema Mihovilovic Gutiérrez, jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.